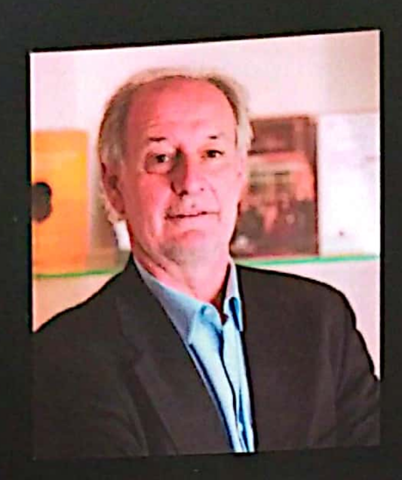

Prólogo de
Marcela Cubillos S.
SEGUNDA EDICIÓN
EL OTRO GOLPE
18 de octubre de 2019
Luis Larraín A.
ediciones LYD
EDICIONES EL LIBERO



Luis Larraín Arroyo es ingeniero comercial y licenciado en Economía de la Universidad Católica. Fue Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo entre 2010 y 2020, tras ser su subdirector entre los años 1990 y 2010. Actualmente es Presidente del Consejo Asesor de LyD.

Es columnista del diario La Tercera, Diario Financiero y El Libero.

Luis Larraín se ha desempeñado a lo largo de su carrera como profesor universitario en cátedras de economía en diferentes universidades. Entre los años 1978 y 1979 fue investigador de la publicación Economía y Sociedad, dirigida por José Piñera. Fue asesor del Ministro del Trabajo y Previsión Social y miembro del Comité de Estudios de la Reforma Previsional, Superintendente de Seguridad Social, subdirector de la Oficina de Planificación Nacional y director de Chilectra, CTC, Colbún y Metro.

Entre los años 1989 y 1990 fue Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional y entre 1990 y 1992 fue Director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Nacional Andrés Bello.

Posteriormente se desempeñó como Gerente General de INVESCO.

EL OTRO GOLPE

18 de octubre de 2019

EL OTRO GOLPE
18 de octubre de 2019

Registro Propiedad Intelectual
Inscripción Nº 2020-A-7451
ISBN 978-956-7183-94-4

Impreso en Chile / Printed in Chile
Segunda edición de 300 ejemplares, diciembre de 2020

Editado por

EDICIONES LYD EDICIONES EL LÍBERO

Diseño Ana M. Wielandt
Fotografía portada: Agencia Uno
Impresos Donnebaum

Se terminó de imprimir en Santiago,
Noviembre de 2020

EL OTRO GOLPE

18 de octubre de 2019

Luis Larraín Arroyo

EL OTRO GOLPE
18 de octubre de 2019

Prólogo

Este es un libro valiente desde su título.

Si algo caracteriza a la izquierda es su infinita capacidad para reescribir la historia, para "revisitar" los acontecimientos y para " camalonear" su participación en los mismos. Logran transformar a quienes fracasan en héroes, y a los que destruyen en mártires.

La forma en que se presentan hoy día los tres años fatídicos de la Unidad Popular y la propia figura de Allende es más que elocuente. La evidencia no tiene importancia alguna, los documentos que transcriben lo ocurrido tampoco, y los testimonios mas significativos que son aquellos que provienen de los más destacados protagonistas -Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, entre otros- son relegados al olvido o ignorados como si nunca hubieran existido.

El 4 de septiembre del 2020 se cumplieron 50 años desde que Salvador Allende asumiera como Presidente de la República. En una entrevista reciente al diputado Jaime Tohá, ex ministro de Allende, en la radio Biobío, éste señalaba: "En todos los países hay etapas y la que inauguró el Presidente Allende se mantiene vigente, en términos de haberle dado a la gente dignidad..."; "...la consecuencia, el apego a la palabra empeñada, la defensa irreductible de la democracia, respeto a las minorías, que fueron grandes valores que llevaron a Allende a ofrendar su vida para defenderlos, tienen plena vigencia hoy, sobre todo cuando la política está tan desprestigiada".

Más adelante el diputado se preguntaba..."¿Por qué Salvador Allende está tan vivo en la memoria de los chilenos y no sólo en Chile sino que en otras partes del mundo? ¿Por qué el Partido Socialista tiene a Allende como un ícono fundamental de su presente y de su futuro?". Y se respondía a sí

mismo: "...en Chile hay quienes, y espero estar entre ellos, seguimos manteniendo la defensa de valores fundamentales, de la igualdad, de la dignidad, del fin de los abusos, la defensa de las riquezas básicas del país. En ese sentido Allende fue un precursor de esa manera de actuar en política".

Es digno de destacar que no sólo Jaime Tohá, que fue su ministro, lo recordaba en esos términos, sino también el diputado Gabriel Boric, que en su cuenta de twitter escribía: "...a 50 años del triunfo tomamos tu posta compañero, y de tantos luchadores y luchadoras sociales. Con la esperanza intacta, seguimos!". Si no fuera por la corrección política en el lenguaje de género al referirse a "luchadores y luchadoras", sería imposible pensar que se trata de un diputado que irrumpió en la política con un discurso para renovar la izquierda.

De más está decir que en el paisaje intelectual construido por la izquierda no hay espacio para la frase lapidaria de Eduardo Frei Montalva en la carta a Mariano Rumor: "El fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo -que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial- estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria..."

La izquierda atribuye a la interpretación de la historia un valor fundamental para la acción política. En la derecha existe, en cambio, el rasgo exactamente opuesto. Como su talante se aproxima más a lo concreto y menos a la teorización, equivocadamente presume que la realidad es mas fuerte que su interpretación. Nada más a la derecha que aquello de que "un hecho vale más que mil palabras" y , muchas veces, nada más alejado de la realidad. Es cosa de ver lo ocurrido con los 30 años desde la recuperación de la democracia. Son, objetivamente, los mejores de la historia de Chile a partir de todos los antecedentes fidedignos: nunca se había reducido más la pobreza, nunca se habían elevado más los niveles de vida, nunca

se había expandido más la clase media; sin embargo, nada de eso ha sido óbice para que la izquierda haya montado una verdadera campaña para desfigurar todos esos logros y presentar lo que es una trayectoria de éxito como si fuera una historia de fracaso.

El primer aporte del libro es la firme determinación de salir al frente de tal tendencia, es decir, la convicción de que sin una visión desde la derecha, el camino para desfigurar la realidad queda despejado.

Basta abrir el libro de Luis Larraín para advertir que él entiende muy bien que en la médula de la política están los relatos, las controversias interpretativas, la disputa en la atribución de significados y que la política, al final del día, es una guerra de narrativas.

El Otro Golpe: 18 de octubre de 2019 es una lúcida, contundente y bien argumentada respuesta a la interpretación, que la izquierda se ha empeñado en instalar, de los acontecimientos vividos desde esa fecha.

Hay que reconocer que esta vez se superaron a sí mismos: la interpretación no fue a posteriori sino a la par de los aconteciminetos. No es que en 50 años más contarán lo ocurrido en octubre del 2019 del modo en que les sirva a sus objetivos políticos, sino inventaron e interpretaron la historia mientras ella transcurría. Es decir, ya no se trata de escribir un relato falso respecto de lo vivido hace décadas, sino de hacer política, día a día, sin que los hechos importen. La izquierda, esta vez, impulsó una interpretación a la par de los acontecimientos.

De partida "normalizó" la violencia, soslayó la acción terrorista en los orquestados y devastadores ataques a las instalaciones del Metro, estigmatizó la acción de las fuerzas de orden idealizando una "primera línea" que hacía del enfrentamiento un quehacer diario, y le atribuyó a la protesta un significado a su antojo. De esta manera, la dotó de un sentido político. Poco importa que todas las encuestas de opinión asignaban a la desigualdad y al cambio constitucional -los dos *leitmotiv* de la revuelta según la izquierda- un bajísimo lugar en las prioridades ciudadanas.

El segundo aporte del libro tiene que ver con dejar en evidencia que la centroderecha en vez de sumarse, a veces sin advertirlo, al relato de la izquierda, debió oponer su propia explicación. La violencia desatada no era legítima ni desarticulada, por tanto, había que enfrentarla con coraje y decisión; las razones del descontento tenían que ver más con el estancamiento en las condiciones de vida de los sectores medios, provenientes de 6 años anteriores de escaso crecimiento, que de fallas estructurales; la porfiada desigualdad, a la que cuesta tanto derrotar, estaba en su nivel histórico más bajo y no más alto; en fin, las propuestas de la izquierda para salir de la crisis eran idénticas a las que habían sido derrotadas en la última elección presidencial y que a partir de octubre sólo se impusieron por la fuerza.

La Izquierda definió al día siguiente (¿o el día anterior?) lo que había ocurrido el 18 de octubre. Cuando en política una fuerza logra imponer su visión sin contrapeso, ésta avanza como un cuchillo en la mantequilla. En este caso no hubo ni siquiera guerra de narrativas, sino abdicación.

Es cierto que el esfuerzo de Luis Larraín es cuesta arriba. Implica remar contra la corriente, desafiar las encuestas, enfrentar el oportunismo de quienes se suman con rapidez a las causas de la izquierda y a sus interpretaciones de los hechos, porque es una cómoda manera de asegurar un transitorio blindaje sin tener que soportar transitorias impopularidades. En eso consiste el engaño del populismo: cedes una vez abdicando de tus ideas, y te celebran por "razonable y moderado". Sigues haciendo lo mismo, y cuando te das cuenta, ya es tarde: lo has cedido todo. El triunfo es de tu adversario, la derrota es tuya, y tus ideas se desvanecieron.

Luis Larraín no sólo relata hechos, que a la luz de la interpretación asumida en silencio por parte importante de la derecha, corren el riesgo de empezar a quedar en el olvido, sino que construye, con libertad y sin complejos, una narrativa de lo ocurrido a partir del 18 de octubre.

A pocas horas de los atentados al Metro, el Partido Comunista pedía la renuncia del Presidente de la República. Días después, una manifestación

multitudinaria pasaba a definir el relato de todo lo ocurrido a tal punto que hoy sólo queda la marcha y no la destrucción. El gobierno respondía a la violencia con paquetes de medidas sociales cada día más generosos. Era la respuesta a la definición hecha por la izquierda, y asumida por parte de la derecha, que el problema era el malestar y la desigualdad. Muy pocos se atrevían a hablar de terrorismo, ni siquiera en las noches más violentas.

¿Alguien cree que la sola protesta, sin la violencia, hubiera generado este itinerario constitucional? Sin atentados ni destrucción, ¿estaríamos, como hoy lo estamos, a las puertas de elegir una Asamblea Constituyente? La verdad es que no fue "la gente", sino la violencia la que gatilló el escenario en el que hoy nos encontramos.

De ahí la importancia de este libro, en que Luis Larraín define y explica cómo por la fuerza se impidió a un gobierno gobernar, y cómo se relegó, a quienes eligieron este gobierno, a ciudadanos sin derechos políticos. La democracia vale en cuanto elijas lo que la izquierda considera correcto. Tu voto se reconoce, excepto que tengas la osadía de pretender que la centroderecha gobierne.

Para la izquierda nunca bastó que la centroderecha hubiera ganado democráticamente. Sienten que sólo ellos tienen la legitimidad ética para llegar al poder.

La derecha pasó así a ser la única coalición política a la que no le basta ganar las elecciones. La minoría derrotada debe concederle el derecho a gobernar. ¿Puede haber algo más antidemocrático que esa falsa superioridad moral de la izquierda que actúa, cuando la centroderecha gana, como si fuera "un error del sistema" despreciando a la gente que la vota y la elige?

Por último, el tercer aporte de este libro es diseñar una hoja de ruta para la derecha más allá de los desafíos electorales que tenemos por delante.

Luis Larraín describe muy bien la falta de vocación de nuestro sector para construir un proyecto político propio. Al leer los últimos capítulos del li-

bro, es imposible no recordar a la ex portavoz del Partido Popular español, Cayetana Alvarez de Toledo, que en entrevista al diario El Mercurio (9 de agosto 2020), señalaba: "la izquierda es una pésima gestora, pero una habilísima propagandista de sí misma. Tapa sus fracasos con toneladas de celofán ideológico. Y nunca descansa. Hace política de manera constante y creativa. La derecha, en cambio, cree que su capacidad como gestora le exime de dar la batalla de las ideas. ¡Incluso piensa que la batalla de las ideas le perjudica! Es un error. Primero, porque es una forma de desistimiento: renuncias a gobernar salvo que la izquierda lo haga mal. Y segundo, porque en caso de gobernar, no evitarás una contestación brutal por parte de quien sigue gozando de la hegemonía ideológica y política".

Es curioso que siempre sea desde la derecha que se levante el discurso de "eliminar las trincheras", de asumir que en Chile, para "la gente", ya no hay ni derechas ni izquierdas, y se retome en un especie de *deja vu* la nostalgia de la "democracia de los acuerdos". Lo que no se repara es que la izquierda de hoy poco y nada tiene que ver con la de los 90. En aquella prevalecía la responsabilidad; en ésta la imprudencia; en aquella el gradualismo, en ésta el maximalismo; en aquella la seriedad, en ésta el populismo; en fin, en aquella prevalecía la moderación, en ésta la música la pone la izquierda radical que avanza sin transar, cada vez que se le permite, en su agenda ideológica.

La polarización política actual ya cobró su primera víctima: los sectores de centroizquierda, que desaparecieron del mapa político.

Más allá de lo que ocurra en el plebiscito de octubre, la esperanza está en nuevos liderazgos que -apoyados en la experiencia de quienes deben respaldar más que protagonizar- tienen que alimentarse de convicciones. Al final del día son ellas las que inspiran, las que persuaden, las que le dan vida a los principios.

Nada le puede hacer más daño a la centroderecha que hacer política desde el populismo. Las convicciones deben ser firmes, la popularidad suele ser volátil. Tampoco hacen sentido las estrategias que suponen adhesión a

los planteamientos adversarios, aunque se revistan de inteligencia táctica. En verdad, muchas veces, son simple oportunismo.

El desafío no es otro, como bien lo relata este libro, que dar la batalla de las ideas en cada escenario por hóstil que se nos presente.

Margaret Thatcher decía: "puede que tengas que pelear una batalla más de una vez para ganarla". Y esta verdad, ante la seducción de la popularidad efímera, se olvida con rapidez.

Si estamos convencidos que las ideas de libertad que promovemos son esenciales para construir un Chile más justo y con oportunidades para todos, debemos cambiar nuestra manera de hacer política y no nuestras convicciones. Eso implica que en vez de leer las redes sociales y las encuestas para decidir qué conviene pensar, defender o votar, habrá que seguir trabajando, sin descanso, por convertir en populares nuestras ideas.

Debemos estar dispuestos y decididos a dar la batalla cultural y a promover nuestras convicciones en todos los espacios que tengamos. En cada debate, entrevista, seminario, votación, elección...

Y también, como lo hace Luis Larraín, en un libro como éste: necesario y valiente.

Marcela Cubillos Sigall
Directora Ejecutiva de LyD

Introducción

En septiembre del año 2019 los chilenos disfrutaron de un prolongado fin de semana de descanso celebrando las Fiestas Patrias asistiendo a las tradicionales fondas donde se come y se toma en abundancia, se baila y se conversa hasta altas horas de la madrugada. Este ánimo festivo favoreció las ventas del comercio, que registraron un alza de 6,5% respecto al año anterior. Las cosas parecían ir bien, y quizás el Presidente Piñera confiaba en que la economía repuntaría y ello le permitiría mejorar el apoyo de la ciudadanía a su gobierno. Éste venía bajando y sólo un tercio de los chilenos manifestaba su adhesión a la forma en que Piñera conducía el país, según la encuesta CADEM de septiembre. Estos aires primaverales explicarían sus optimistas declaraciones del día 8 de octubre, cuando señaló que Chile era un oasis en una América Latina convulsionada, aludiendo a desórdenes en Ecuador, Bolivia, Puerto Rico y Honduras. Diez días después, el viernes 18 de octubre, con inusitada violencia, veinte estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas en una acción coordinada de grupos violentistas. Otras cuarenta y una estaciones sufrieron daños de diversa consideración.

Una semana antes había comenzado en Santiago una protesta por el alza de 30 pesos (3,7%) en la tarifa base del Metro, eje del sistema de transporte público de la ciudad. Se hicieron llamados a evadir el pago del servicio por grupos de estudiantes que irrumpieron en distintas estaciones, destrozando los torniquetes de control o simplemente pasando por encima de ellos. Las manifestaciones contra el Metro continuaron después del 18 de octubre y se agregaron ataques incendiarios y saqueos a supermercados de gran violencia y alcance. Sorprendiendo a todo el mundo político por su rápida reacción a estos hechos, el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, pidió públicamente la renuncia del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El viernes siguiente se convocó a un acto masivo en la Plaza Italia por parte de varias organizaciones, la mayoría controladas por el Partido Comunista, agrupadas en una plataforma que llamaron "unidad social" que incluía asociaciones de empleados públicos, estudiantes, movimientos feministas y a la que se sumaron incluso barras bravas de equipos de fútbol. La concentración convocó a una inmensa multitud, se habla de cerca de un millón de personas. Si bien las razones para marchar ese día pueden haber sido muchas, quienes la convocaron se las arreglaron para instalar como demandas fundamentales y urgentes, el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y una nueva Constitución. El alza de pasajes del Metro ya había sido anulada y pasó al olvido, las Fuerzas Armadas estaban en las calles en virtud del Estado de Emergencia declarado por el gobierno ante los saqueos y desórdenes que siguieron al ataque del 18 de octubre en varias ciudades del país. El cambio en la Constitución era, hasta ahí, una baja prioridad en las demandas ciudadanas según las encuestas, pero los dirigentes sociales que alentaban la protesta empezaron a nombrarla cada vez más como un objetivo de la movilización.

Los canales de televisión abierta, a través de sus principales periodistas y conductores, parecían recoger sin matices las versiones de la izquierda acerca de las demandas de la gente y apoyaban abiertamente las protestas, que ellos, en general, denominaban "pacíficas", así se estuviera incendiando un edificio o una estación del Metro. La televisión tuvo también un rol fundamental en instalar la idea, esgrimida por los convocantes a las protestas, que la razón del evidente descontento que se manifestaba en las calles era la excesiva desigualdad que había en Chile (pese a que menos de dos años antes, siendo la desigualdad prácticamente igual, la mayoría eligió Presidente a Sebastián Piñera). ¿Qué había cambiado desde la elección del 17 de diciembre de 2017? Lo que siguió fue que algún creativo de la publicidad acuñó la frase "no son treinta pesos, son treinta años", queriendo significar que la que hasta ahora era calificada como una transición ejemplar y exitosa a la democracia en Chile no era tal y por lo tanto, de lo que se trataba era de un cambio del "modelo".

Las semanas que siguieron fueron de una violencia nunca vista en las calles de las distintas ciudades de Chile. El gobierno fue desbordado en su

intento de resguardar el orden público y careció también de una respuesta política que le permitiera retomar la iniciativa. El país parecía entregado a hordas de manifestantes, entre los cuales se mezclaban delincuentes y terroristas. La oposición, en los inicios del movimiento, tampoco fue capaz de articular una respuesta, con la excepción del Partido Comunista. Esa era la situación del país a mediados de noviembre, hasta que ocurrió un hecho de una gravedad mayor.

No podría expresarlo mejor que Lucía Santa Cruz en su columna en El Mercurio, así es que la cito: "el evento más importante, más radical y sustantivo de la crisis ocurrió el 12 de noviembre, el día más violento hasta hoy. Esa mañana, todos los partidos de oposición, desde el Comunista a la Democracia Cristiana, habían firmado una declaración pública a favor de una Asamblea Constituyente, afirmando que la "ciudadanía movilizada", la calle (no los electores que conforman la ciudadanía tradicional), "había corrido el cerco de lo posible" y que requeríamos una nueva Constitución "emanada" de esa misma "ciudadanía movilizada" para "establecer un nuevo modelo político, económico y social" y que "el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos". En suma, la soberanía popular ya no residía en la Nación, sino en aquellos que se movilizan violentamente, y los problemas no se resuelven por medio de la deliberación democrática, sino por la vía de los hechos consumados[1]".

Así nació el Proceso Constituyente que, con una importante probabilidad, puede culminar en una nueva Constitución para Chile. Ese día, por lo tanto, se consagró en nuestro país el ejercicio de la fuerza como método de acción política aceptado en la democracia en que vivíamos a contar del 11 de marzo de 1990, y los firmantes de esa declaración tendrán que responder ante la historia por ese acto, que significó transformar las estructuras de poder establecidas en nuestra institucionalidad y marcó el abandono, por parte de los partidos que tenían mayoría en el Congreso, de su responsabilidad constituyente a manos de los manifestantes de la calle.

1 Lucía Santa Cruz, "12 de noviembre de 2019" Columna en El Mercurio, 14 de febrero de 2020.

Lo que sigue es conocido. La madrugada del 15 de noviembre de 2019 dirigentes de los partidos con representación parlamentaria, exceptuando al Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, firmaron un Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, donde se comprometían a aprobar una reforma constitucional que hiciera posible elaborar la nueva carta fundamental luego de un proceso y procedimiento distinto al que establecía la propia Constitución. Este proceso, en síntesis, contemplaba un plebiscito con votación universal para definir si habría o no una nueva Constitución y para determinar también, en caso que la opción del Apruebo ganara, si ella debiera elaborarse por una Convención elegida especialmente para ese efecto (Convención Constituyente, un nombre menos amenazante que Asamblea Constituyente), o bien, si una Convención Mixta, integrada por parlamentarios y personas elegidas para ser convencionales, era la encargada de redactar la nueva Constitución, cuyas normas debían aprobarse por dos tercios de los integrantes.

48 horas

Antes de la firma de ese acuerdo tuve la oportunidad de conversar con varios diputados y senadores que concurrieron a él. Se trabajó con gran celeridad en convenir este trascendental cambio a nuestra institucionalidad. Tanto en parlamentarios de gobierno, como de oposición, se instaló la idea que luego de la declaración del 12 de noviembre había un plazo que no iba más allá de 48 horas para lograr un acuerdo, ya que de lo contrario, la violencia continuaría. Sin que el mensaje tuviera un emisor claro, parecía que desde La Moneda se alentaba esta salida y de hecho, el ministro del Interior en esos momentos, Gonzalo Blumel, mantuvo permanente contacto con parlamentarios de gobierno y oposición durante la frenética negociación de esos días.

Entre las especulaciones que se han tejido para explicar por qué el Presidente Sebastián Piñera decidió entregar el crucial tema constitucional, cediendo frente a la oposición, se ha señalado que la apreciación del gobierno era que no se podía garantizar el orden público y el fin de la violencia generalizada en nuestras ciudades sin la presencia de militares en

las calles, lo que significaba volver a declarar el Estado de Emergencia y eventualmente el Estado de Sitio, aunque éste último requería la aprobación del Congreso. Hay que señalar, para entender mejor este punto, que durante las manifestaciones violentas que se iniciaron el 18 de octubre sectores de la oposición política y organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos denunciaron una serie de actuaciones de la policía, especialmente Carabineros de Chile, como atentatorias a los derechos humanos de los manifestantes. Más adelante nos referiremos con más detalle a este punto. De hecho, varias de estas denuncias resultaron falsas y en general, los organismos de Derechos Humanos evitaron referirse a violaciones sistemáticas a los DDHH.

Es interesante mencionarlo aquí por la incidencia que pudo tener en el surgimiento de este plazo no explicado, las misteriosas 48 horas. Puede especularse que la apreciación desde el gobierno, las policías y las Fuerzas Armadas, de la capacidad de controlar efectivamente la violencia en distintos escenarios de estados de excepción constitucional fue lo que llevó a forzar un acuerdo político. También serán importantes las consideraciones anteriores para determinar cuál es la calificación más propia para estos hechos, que comúnmente se han denominado "estallido social", pero que indudablemente tienen varios componentes de mayor complejidad. Sin toda la información necesaria resulta difícil juzgar la actuación del gobierno en esos días y horas. Será la historia la que definitivamente entregue sus versiones acerca de ello y probablemente habrá quienes valoren el intento por mantener la paz social en momentos en que efectivamente ésta no existía, y otros serán críticos de la incapacidad de las autoridades de gobierno para mantener el orden público, labor irrenunciable según su mandato constitucional.

Tratar de entender a cabalidad este proceso no es fácil. Parece evidente que lo que ocurrió en Chile es un fenómeno multicausal y no puede recurrirse a una única explicación para él. Lo que sí podemos hacer es aproximarnos a los motivos de una convulsión tan importante en la vida de los chilenos, con consecuencias aún desconocidas, desde distintas vertientes y disciplinas. Para formarse convicciones, o al menos hipótesis plausibles

acerca de lo que ha estado ocurriendo en Chile, me ha parecido honesto examinar distintas opiniones, ideas e investigaciones. Los sucesivos capítulos que siguen intentan hacerlo desde diferentes perspectivas. El capítulo uno, **La economía, la desigualdad y "el modelo",** lo hace desde la economía, disciplina en la que me siento más cómodo. En él hablaremos de crecimiento, distribución del ingreso, desigualdad y movilidad social, entre otras cosas.

En el capítulo dos, **Expectativas y Brechas,** reconociendo que la economía no nos basta para entender a cabalidad lo que ha ocurrido en Chile, hablaremos de las expectativas de la gente y de las brechas entre éstas y la realidad a la que han podido acceder. Además de estudios cuantitativos, como la encuesta Bicentenario UC de la Pontificia Universidad Católica, que son parte de los antecedentes analizados en el capítulo uno, examinamos estudios cualitativos realizados principalmente por sociólogos. Una de las fuentes más interesantes para realizar este análisis ha sido el contenido en la publicación *Hilos Tensados: para leer el octubre chileno*[2], coordinado por la socióloga Kathya Araujo, de la Universidad de Santiago.

El capítulo tres, **Del malestar a la violencia política,** hace un intento por ensamblar algunos de los materiales contenidos en el capítulo uno, la realidad económica, con los del capítulo dos, la percepción social. Para ello se vale de un análisis de la vasta clase media chilena, que se ha transformado en el grupo socioeconómico más numeroso en nuestro país. Pero esta clase media resulta ser de una gran heterogeneidad interior, pues en ella conviven sectores emergentes y pujantes con otros vulnerables y precarios. Nuestra impresión es que ciertas características ambivalentes de esta clase media chilena son importantes para explicar la masividad de la protesta social y encontrar así, varias interpretaciones plausibles de los hechos que han ocurrido en Chile y motivan la escritura de este libro. Pero luego, siempre en el intento de encontrar explicaciones a los sucesos de octubre, abandonamos temporalmente la economía y la sociología testi-

2 Kathya Araujo, Editora "Hilos Tensados: Para leer el octubre chileno" Editorial USACH, diciembre de 2019.

monial, para adentrarnos en terrenos farragosos, pero fructíferos, donde la filosofía, la historia, la sociología y la política tienen interesantes cosas que decirnos a través de destacados intelectuales chilenos que han analizado estos hechos, publicado libros y artículos y dictado conferencias sobre la materia. Ello nos permite dar mayor densidad al análisis de los orígenes y causas del movimiento de octubre, al recurrir a personas como Carlos Peña, Lucía Santa Cruz o Arturo Fontaine, quienes con su formación intelectual son capaces de seguir pistas que nos permitan comprender mejor lo que ha ocurrido en nuestro país.

El capítulo cuatro, **Insurgencia: de la primera línea al cambio de la Constitución,** se refiere a las innegables relaciones entre la protesta y manifestaciones sociales que fueron mayoritarias durante el llamado estallido social y la violencia insurgente, incluso terrorista, que acompañó al movimiento social durante todo el período en que éste se desarrolló. Ya algo de esto se adelanta en el capítulo dos, cuando hablamos de expectativas y brechas y constatamos la extendida red de activistas políticos que se mueve entre varios grupos de jóvenes, pero en este capítulo se hace una reseña más pormenorizada del maridaje entre violencia y protesta social. No es que se trate de un intento de criminalizar el movimiento social, como dice la consigna, sino de identificar conductas criminales que se desarrollan en paralelo a la protesta y que son funcionales a ésta. Los antecedentes son numerosos y varios de ellos se investigan por parte del Ministerio Público.

En este análisis tiene importancia la presencia de acusaciones de violaciones a los derechos humanos al gobierno y en particular, a Carabineros de Chile, en su intento por reprimir los actos de violencia que vivía el país. Es un aspecto que no es posible ignorar a la hora de tratar de entender la eficacia, o falta de ella, en la acción gubernamental y el alcance que, en definitiva, tuvo el movimiento insurgente en la política chilena.

Luego, derivamos hacia la forma en que el malestar y la movilización entroncan con el objetivo político de cambiar la Constitución, anhelo largamente esperado por la izquierda y que finalmente se materializa con la

mediación de la política; una política, que como decíamos al principio, renunció a buena parte de sus fueros y se subyugó a la violencia de la calle.

El capítulo cinco, **La argamasa de la asonada,** se detiene en aquellos elementos que contribuyeron a que los malestares, frustraciones y brechas que siempre conviven en una sociedad, se hayan transformado en hechos tan violentos y masivos. Juegan un rol en esa interfaz los contenidos difundidos por los medios de comunicación, pero también otros fenómenos como el surgimiento de las redes sociales y su uso masivo por parte de la población joven.

Nos acercaremos también a tendencias de los jóvenes en Chile y el mundo, que los hacen ver la realidad, el poder y su propio rol en la sociedad de una manera particular, que no siempre los mayores hemos comprendido. Así, veremos cómo los sentimientos compiten y dominan las más de las veces, a la razón como formas de aproximarse a la política. También conoceremos de tendencias en el mundo de las universidades que acotan el mundo de lo aceptable para los jóvenes, y van determinando una mentalidad que no comulga precisamente con la libertad de opinión y de expresión, sino que pretende establecer ciertas hegemonías en el pensamiento y el significado que definen las formas "aceptables" y "correctas" de pensar, que luego habrán de imponerse a toda la sociedad como lo "políticamente correcto". Entender estas tendencias es importante para comprender por qué algunos grupos han llegado a aceptar el uso de la violencia y valerse de ella incluso, para lograr transformar la sociedad a una que responda a sus valores y sus creencias, que serían las únicas aceptables.

Una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta en este ámbito es que es particularmente dañino para la paz social que se afirme que las palabras son violentas. Si tú participas en un diálogo de ideas pacífico y eso es considerado violento, quiere decir que el término "violento" está alcanzando nuevos significados, distintos al de la violencia física, que son completamente subjetivos. Si hay completa subjetividad acerca de lo que es violento, entonces todo está permitido, pues si yo considero que lo que

dices o escribes es violento, entonces tengo derecho a desquitarme violentamente. Se comprenderá hacia dónde puede llevarnos esta espiral.

El capítulo termina con una cruda descripción de la forma en que las redes sociales fueron utilizadas para potenciar las protestas, tanto pacíficas como violentas. Cómo las denuncias, muchas veces falsas, fueron minando la credibilidad de Carabineros y su efectividad para mantener el orden público y relatamos cómo el ministro del Interior y el propio Presidente de la República fueron objeto de acusaciones constitucionales cuya finalidad era destituirlos del cargo. Algo completamente impensado hace un tiempo atrás y que ha cambiado radicalmente la política chilena.

El capítulo seis, **Las instituciones y el contexto global,** aborda un fenómeno que la mayoría de los analistas viene describiendo desde hace un tiempo y que, si bien es una tendencia a nivel mundial, se ha manifestado con especial fuerza en nuestro país: la desconfianza en la autoridad. En los últimos años, en nuestro país los niveles de desprestigio de cualquiera que sea calificado como autoridad son realmente impresionantes. A menudo en las respuestas a las interrogantes acerca de la rabia que se vio en las manifestaciones de octubre y los meses siguientes, se reveló una sensación de abuso de las personas que ejercen el poder en distintos ámbitos así como también de injusticia, porque las tribulaciones que sufre la mayoría de los chilenos no alcanzan a ciertos grupos de la sociedad chilena.

El capítulo siete, **El futuro después de la asonada,** por último, se pone la difícil tarea de intentar mirar hacia el futuro; dilucidar de qué manera las brechas entre las expectativas y anhelos de la mayoría y su vivencia cotidiana pueden irse cerrando; y proponer algunas líneas de conversación en nuestra sociedad, que exploren los ámbitos de convergencia que hay en ella; pero que al mismo tiempo busquen los límites del disenso, porque de eso, en definitiva, se trata la política. Ello, si aceptamos que habrá diferencias en las soluciones que distintas personas propondrán para resolver los problemas de la sociedad. Resulta también inevitable, aunque no sea el objeto de esta publicación, referirse brevemente a las nuevas condiciones que impone a nuestro país la pandemia que azotó a Chile y el mundo

durante el año 2020. Mayor pobreza, brechas también más amplias entre la realidad cotidiana y las expectativas hacen aún más duro el desafío que tenemos. Si nuestras diferencias no se encausan de una manera pacífica, no hay manera de aliviar los dolores que se han manifestado en nuestro país. Sin paz social no puede haber progreso y si ello ocurre, significará un gran fracaso de la política chilena. Un requisito indispensable para que ese diálogo sea fructífero es que la derecha tenga su propio diagnóstico de lo que ha ocurrido en Chile y a partir de ello, elabore sus propias propuestas, reivindique sus ideas y actúe con prestancia en la política.

Termino esta introducción advirtiendo que el orden que he elegido para estructurar este libro refleja el proceso mental que durante estos meses he seguido en esta indagación sobre los orígenes y causas del octubre chileno. Por ello, puede para algunos resultar algo desordenado, pues hay avances y vueltas atrás; interrogantes que se responden de una manera y luego, más adelante, se complementan a la vista de otros antecedentes, o incluso, tienen una explicación un poco distinta. Por supuesto empecé con un plan para su escritura, pero luego lo modifiqué un tanto a la luz de una nueva lectura, o de un dato que me pareció especialmente pertinente.

Un ejemplo de este método está dado por el camino para llegar a encontrar un título para el libro. Partí sin un título en mente y recién en los últimos capítulos me bajó, como diría un personaje de Orhan Pamuk, el que mejor representaba los resultados de mi indagación. ***El Otro Golpe: 18 de octubre de 2019***, nos habla de un golpe de Estado distinto, de liberación prolongada como algunos fármacos, pero un golpe al fin, en cuanto despoja del poder a la autoridad legítima. Es provocativo, lo reconozco, y los lectores podrán juzgar luego de terminar de leer el libro si es acertado o no.

Pensándolo bien, esta forma de estructurar el libro no es tan ajena al género de ensayo político en que podríamos clasificarlo. Si se ha perdido con ello una presentación más estructurada, pienso que se ha ganado en espontaneidad y honestidad intelectual; pues, de verdad, he intentado aquí verter todas las ideas que se me han venido a la cabeza, luego de un arduo trabajo de investigación, para explicar, sinceramente, lo que creo pasó en Chile después del 18 de octubre de 2019.

Capítulo 1

La economía, la desigualdad y "el modelo"

" … el yugo es más insoportable mientras más liviano".
Alexis de Tocqueville

Capítulo 1:

La economía, la desigualdad y "el modelo"

No podría decir que lo que ocurrió el 18 de octubre y los días posteriores no fue algo sorpresivo para mí. Si bien siempre pueden esperarse manifestaciones de descontento en una sociedad -y 2019 fue un año en que en diversos lugares del mundo ellas ocurrieron, llevando incluso a la caída de varios gobiernos-, la masividad y la violencia en Chile fueron características inesperadas. Como director de un centro de estudios de políticas públicas presente por muchos años en nuestro país, la reacción espontánea fue la de estudiar en profundidad lo que ocurrió y tratar de entenderlo.

El sesgo profesional, en mi calidad de economista, me llevaba naturalmente a buscar explicaciones en la evolución de variables económicas durante el último tiempo. Sin embargo, como creía estar bastante informado en términos generales de la evolución de la economía, mi sospecha fue que tenía que buscar más allá para encontrar explicaciones. Era mi disposición también, pues siempre he entendido que fenómenos de esta naturaleza no tienen causas únicas ni tampoco hay una sola forma de abordar su análisis. La sorpresa por lo ocurrido y la gravedad de los hechos sugerían también una dosis de humildad.

No obstante, habría ido contra mi naturaleza no empezar la búsqueda por la economía. Afortunadamente, contaba con la amplia experiencia de nuestro centro de estudios y la mía propia en el estudio de políticas sociales. Después del 18 de octubre me reuní con la economista María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, para discutir sobre la forma de hacer ese análisis. Concluímos que lo primero era hacer una exhaustiva revisión de la evolución de diversas variables económicas y sociales en los últimos treinta años. Contábamos para eso con mucha información, en particular la que entrega la encuesta CASEN.

Esta encuesta de hogares, diseñada a fines de los años ochenta en un proyecto de ODEPLAN con el Departamento de Economía de la Universidad de Chile[1], es hasta hoy la encuesta más grande que se realiza en el país. Su propósito era obtener una muestra suficientemente amplia para que sus resultados tuviesen significación estadística a nivel de cada una de las regiones, lo que explica el número de hogares encuestados. La CASEN habría de transformarse en la fuente de información más fidedigna para diseñar políticas sociales efectivas de ayuda a la población más necesitada. Pero esta encuesta, al entregar además información estadísticamente significativa, permite calcular las tasas de pobreza, la distribución del ingreso y muchos otros indicadores de gran utilidad para la política social.

El fruto del análisis exhaustivo de variables económicas y sociales durante ese período se recoge en la publicación de Libertad y Desarrollo denominada **"Ni 30 pesos ni tampoco 30 años"**[2] de María Paz Arzola, publicada en abril del presente año. En el transcurso de este capítulo comentaremos frecuentemente sus resultados.

Pobreza

Para comenzar hay que tener claro que la tasa de pobreza por ingresos en el país se ha reducido sostenidamente desde el año 1990 y lo ha hecho a un ritmo poco visto en el mundo. De acuerdo a la metodología vigente de medición de la pobreza, en 1990 la proporción de personas viviendo en situación de pobreza era casi 7 veces mayor que en 2017. La última medición disponible, correspondiente al año 2017, contabiliza más de 1,5 millones de personas en situación de pobreza en el país (8,6% de la población). De éstas, 412 mil se encontraban en pobreza extrema (2,3%), mientras que los restantes 1,1 millones estaban en pobreza no extrema (6,3%). Desgraciadamente la CASEN 2019 debía tomarse en noviembre de ese año y no se pudo realizar por la violencia que asolaba al país.

1 Budinich, Ema; Haindl, Erik; Irarrázaval, Ignacio. 1987 "Gasto Social Efectivo". ODEPLAN, Facultad de Economía Universidad de Chile.
2 Arzola, María Paz. 2020 "Ni 30 pesos ni tampoco 30 años". Serie Informe Social N°183, Libertad y Desarrollo.

La línea de pobreza se define como el ingreso mínimo necesario para que un hogar pueda satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de sus miembros. La línea de pobreza extrema corresponde a un valor que es 2/3 de la línea de pobreza. A julio de 2019, la línea de pobreza por persona equivalente era de $164.605 mensuales. Durante varios años desde el inicio de la CASEN, el Ministerio de Desarrollo Social ha contado con la colaboración de la CEPAL para definir la línea de pobreza. Con el tiempo, se han incorporado a otras entidades tales como el OPHI que es la iniciativa sobre pobreza y desarrollo humano de la Universidad de Oxford, y también el PNUD, además de un panel de expertos nacionales.

Este somero examen nos dice que para Chile sigue siendo una tarea importante la erradicación de la pobreza, pero los notables progresos aconsejan construir sobre las políticas seguidas todos estos años.

Desigualdad

Si bien el progreso de Chile en la reducción de la pobreza no se discute y es conocido y analizado en el mundo, suele afirmarse que la desigualdad es excesiva e incluso, señalan algunos, una de las más altas del mundo, cuestión que repiten sin fundamento muchos políticos y personas del mundo intelectual. Eso no es así: todos los indicadores de desigualdad en nuestro país muestran una evolución favorable, aunque menos pronunciada que la reducción de la pobreza. El coeficiente Gini es el indicador universalmente utilizado para medir desigualdad y toma valores extremos de 1 (máxima desigualdad) y 0 (igualdad total). Su evolución indica una reducción sostenida, aunque gradual, desde el valor 0,522 a 0,488 entre 1990 y 2017. Cabe mencionar que, por construcción, el Gini no suele mostrar oscilaciones demasiado grandes en el tiempo, pues es poco sensible a cambios en los extremos y se modifica principalmente por variaciones en la parte media de la distribución de ingresos. Es por ello que para medir desigualdad se utiliza también la evolución del índice 20/20, que mide la relación entre los ingresos totales del 20% más alto y el 20% de más bajos ingresos de la población. Al igual que el Gini, el índice 20/20 fue cayendo

en Chile desde 1994, en que alcanzó el valor 12,1, hasta marcar un valor de 8,9 en 2017, año en que se produjo una alza pequeña. Sin embargo, a falta de datos posteriores, aún no sabemos si esta alza marca el inicio de un cambio de tendencia o bien, si desde una perspectiva de largo plazo, habrá sido un caso puntual y será revertido. En definitiva, lo que nos está indicando es que, en promedio, el 20% más rico de los chilenos tiene ingresos que son 9 veces mayores que el promedio del 20% más pobre.

De acuerdo a la medición del Gini, en términos comparativos, Chile está en la mediana de los países en Latinoamérica. Esto significa que en la región hay tantos países más desiguales, como países con mayor igualdad que Chile, lo que da cuenta del despropósito que significa afirmar que Chile es el país más desigual del mundo.

La desigualdad puede ser un detonante de masivas protestas sociales, sin embargo la evidencia respecto a su evolución no permite afirmar que ella sea la causante del llamado estallido social en Chile, dado que durante los últimos treinta años ha estado disminuyendo constantemente. La cita de Alexis de Tocqueville en ***El Antiguo Régimen y La Revolución*** que encabeza este capítulo, no obstante, nos recuerda que progresos en materia de igualdad pueden llevar a mayor descontento y está allí para recordarnos aquello y motivarnos a buscar explicaciones a los sucesos de octubre en otros ámbitos.

Para efectos de comparaciones internacionales, hay que consignar que la medición del Gini no incorpora los subsidios en especies, que en el caso de Chile existen en educación y salud. Como en nuestro país esas ayudas del Estado no llegan a toda la población, sino que están focalizados en los grupos de ingresos relativamente más bajos, si le asignáramos un valor y lo sumamos a los ingresos monetarios, el coeficiente de Gini mejoraría, pues esta corrección metodológica mostraría mayor ingreso de quienes están entre la población de menos ingresos que el promedio. Esto no ocurre en países en que estos subsidios se entregan a toda la población y nos permite afirmar que en comparaciones internacionales, Chile está en un lugar mejor que el que muestran algunos indicadores.

Por último, respecto a desigualdad, hay que decir que la afirmación tan común entre políticos de que en Chile el modelo neoliberal ha hecho que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres es completamente falsa. La encuesta CASEN muestra que los ingresos del 10% más pobre han crecido consistentemente más que los del 10% más rico durante estos treinta años. Como lo consigna el Informe sobre Desigualdad del PNUD, a modo de ejemplo, entre 2000 y 2015 el ingreso del decil más pobre se incrementó en un 145%, mientras que en el decil más rico el aumento fue del 30%.

Movilidad Social

Las medidas tradicionales de pobreza y desigualdad de ingresos corresponden a una foto en un momento del tiempo y su comparación interanual nos puede mostrar tendencias, pero no permite conocer con más profundidad la dinámica de cada uno de esos fenómenos, esto es, la existencia de movilidad de las personas entre los distintos grupos. Así, tenemos que es muy distinto si quienes se ubican por debajo de la línea de la pobreza -o bien en el tramo más bajo de la distribución de ingresos- son siempre los mismos, o si en cambio, hay poca inercia y las personas y familias logran ir alterando su condición período a período. En el primer caso, se trataría de una pobreza o precariedad con componentes estructurales o de largo plazo, que ameritará una política social mucho más permanente; mientras que en el segundo caso, la política social debe ir renovándose y actualizándose para poder alcanzar mejor a quienes van requiriéndola, en la medida que no serán siempre los mismos. Por otra parte, en el ideal meritocrático está siempre presente la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida como producto del esfuerzo, por lo que un país con mayor movilidad social es deseable desde esa perspectiva.

Un estudio que utiliza matrices de transición para la población de América Latina y también para el caso de Chile, elaborado para el Banco Mundial

por Francisco Ferreira et al. en el año 2012[3], analiza la movilidad de cada grupo durante el período. Así, por ejemplo, en el caso de América Latina en su conjunto, se determina que en el año 1995, 45,7% de la población se encontraba en situación de pobreza y que en 2010, 22,5% se mantuvo en esa posición, mientras que el 21% ascendió al nivel de vulnerabilidad y el 2,2% pasó a formar parte de la clase media.

En el caso de Chile, la movilidad ascendente que reporta el análisis de Ferreira es superior a la de América Latina. Sólo un 11,6% de la población se mantuvo en condición de pobreza durante todo el período, mientras que 27,3% pasó a la categoría de vulnerable y 1,9% a la clase media. De igual forma, hay un 31,4% de la población que se encontraba en situación de vulnerabilidad en 1995 y que en 2010 pasó a formar parte de la clase media. Por último, hay un 19,8% de la población que tanto en 1995 como en 2010 se mantuvo dentro de este último grupo, que al final del análisis reunió, según esa medición, al 53,1% del país.

Otra forma de medir la existencia de movilidad social tiene que ver con la inercia que existe entre la situación socioeconómica de los padres y la de los hijos. Cuando es frecuente que el hijo de un padre de bajos ingresos sea capaz de superar su condición y ubicarse en una mejor posición que él, entonces decimos que la movilidad social es elevada y ascendente. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que un hijo se mantenga o incluso vea un empeoramiento de su situación en comparación con sus padres, lo que denotaría una movilidad nula o bien descendente.

Un estudio de la OCDE publicado en 2018[4] nos revela que al examinar la correlación entre la posición económica de padres pertenecientes al 25% más pobre y sus hijos dentro de los países pertenecientes a la OCDE, se constata que Chile se ubica entre los países con una baja inercia en el primer cuartil, vale decir, un porcentaje menor al promedio de la OCDE permanece entre los más pobres en la nueva generación. En cambio, nuestro país muestra una

3 Ferreira, Francisco et al. (2012). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Banco Mundial.

4 OECD(2018) "A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility".

mayor movilidad ascendente hacia el cuarto cuartil; en otras palabras, en Chile hay más porcentaje de personas que en el promedio de países de la OCDE logran ascender al 25% más rico desde los cuartiles más pobres.

Clase media y movilidad social

Producto del crecimiento en los ingresos de la población, así como la elevada movilidad social ascendente que presenta nuestro país y la reducción en los niveles de pobreza, en Chile se produjo un proceso gradual de incremento en la proporción de hogares que forman parte de la clase media. A diferencia de la medida de pobreza, que se realiza sobre la base de una línea calculada por el Ministerio de Desarrollo Social a partir de los estándares definidos con la CEPAL, no existe en el país un umbral oficial que permita definir a partir de qué nivel de ingresos una familia pertenece a la clase media.

Es por ello que sobre la base de la definición que utiliza el Banco Mundial, un estudio de Libertad y Desarrollo realizado el año 2018[5] propuso una definición que permite distribuir a la población en distintos niveles socioeconómicos. Ahí se constata que, junto con la sostenida reducción de la pobreza, en los últimos años también se ha ido reduciendo la población calificada como vulnerable, mientras se ha incrementado el grupo correspondiente a la clase media y al nivel de ingresos altos. Ello ha llevado a que desde el año 2011, la población de clase media haya superado la proporción de personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Desde ahí en adelante y particularmente en el último registro disponible para 2017, se ve con claridad que la clase media se ha posicionado como el grupo más extenso del país, con el 65,4% del total de la población. El segundo grupo más numeroso sería el de la población vulnerable, con un 15,9% del total, luego los de altos ingresos con un 10,1% y por último, los pobres, con un 8,6%.

Estos avances, tanto en reducción de la pobreza, como en la movilidad social, son positivos y destacables y sugieren que el país camina progresi-

5 Arzola, María Paz. y Larraín, Catalina (2018). Hacia una definición y caracterización de la clase media en Chile. Serie Informe Social N° 176, Libertad y Desarrollo.

vamente hacia mejores condiciones de vida para todos. Pero ello también plantea nuevos desafíos. El crecimiento de la clase media y las mayores oportunidades que ésta ha sabido aprovechar, pueden ser inestables en muchos casos y verse amenazados por la ocurrencia de eventos inesperados. Es fácil entenderlo en momentos como el actual, con la economía frenada por la pandemia producto del Covid-19. Pero en tiempos de normalidad, pueden ocurrir eventos como la pérdida del empleo sin protección frente a ello, la jubilación sin suficientes ahorros para la vejez, la ocurrencia de enfermedades de alto costo u otras contingencias que pueden llegar a amenazar los logros de la clase media, especialmente aquella que exhibe una baja escolaridad o bien, que depende de fuentes de ingresos más bien informales y tiene poca cobertura de seguros sociales.

El estudio de la OCDE sobre movilidad social que habíamos mencionado calcula que en Chile la probabilidad que una persona perteneciente a los quintiles 2, 3 y 4 de ingresos sufra una caída que la lleve al primer quintil, es decir, hacia el 20% de menores recursos del país, es alta comparada con los países pertenecientes a este grupo, por lo que el riesgo existe y es importante que la política pública lo incorpore y enfrente. Esto nos levanta una alerta sobre el objetivo de este libro: la movilidad social, siendo un atributo en general bien valorado, cuando es descendente introduce una alta inseguridad en una parte importante de la población. Esta sensación de inseguridad, si se une a otros elementos presentes en la sociedad en un momento determinado (como un estancamiento de la economía), puede ocasionar un gran descontento.

Lo paradojal es que el programa de gobierno de Sebastián Piñera había detectado este problema y se hacía cargo de él, aunque quizá en forma insuficiente o tardía y las respuestas que proponía el programa Clase Media protegida eran mecanismos amortiguadores y de seguros, que hicieran soportable esa situación. Pero la lentitud del trámite legislativo, que en alguna medida respondió a una actitud obstruccionista de la oposición, conspiró contra una atención más oportuna de estos problemas. El seguro catastrófico de Fonasa, por ejemplo, no ha avanzado lo suficiente en el

Congreso y no es una realidad que esté hoy ayudando a la gente en esas contingencias.

Esta vulnerabilidad nace después que los sectores medios han mejorado claramente su calidad de vida. El problema es que la inseguridad puede dar origen a lo que en el poema y la canción **Valparaíso** sus autores llaman "un miedo inconcebible a la pobreza" o en palabras del gran Alexis de Tocqueville, un yugo más liviano que, no obstante, se hace más insoportable.

En efecto, junto con el incremento en los ingresos de los hogares y la consecutiva reducción de la pobreza por ingresos, los chilenos fueron accediendo gradualmente a mejores condiciones de vida en ámbitos como la salud, la vivienda y la educación en los últimos treinta años. Todo esto se constata con la evolución de diversos indicadores que dan cuenta que, con el paso del tiempo, incluso la población más desaventajada se ha ido incorporando al progreso exhibido por el país. Varios de estos indicadores se recogen en el índice de Pobreza Multidimensional que se aplica en nuestro país desde hace algunos años y que también sirve para orientarnos respecto a cuáles son las áreas en que persisten las mayores carencias. De igual forma, los avances del país se reflejan en una mejora continua en el Índice de Desarrollo Humano que construye el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que hoy nos ubica entre los países con un nivel de desarrollo humano muy alto, liderando entre los países de la región.

Crecimiento en el acceso a la vivienda y servicios básicos

De acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se ha producido un importante aumento en el acceso de los hogares del país a servicios sanitarios que hoy tienen una cobertura prácticamente universal llegando a 99,9% en agua potable urbana y 97,2% en alcantarillado urbano. También hay un mayor acceso a la vivienda, que ha permitido reducir el hacinamiento desde un 32,6% el año 1990 a 6,5% el 2017, de acuerdo a la encuesta CASEN. En el último período medido, sin embargo, se observa que el ritmo de la caída en este indicador se redujo, lo que

tiene relación con dos cuestiones: el fuerte incremento de la inmigración, y el encarecimiento del precio de los terrenos producto de restricciones a la constructibilidad y límites al radio urbano, aspectos a los que nos referiremos más adelante, pues pueden tener incidencia en el descontento de una parte de la población, lo que levanta otra de nuestras alertas.

Por otra parte, el criterio de habitabilidad de la vivienda incluye el hacinamiento, pero también mide el estado de la vivienda. El mal estado se define en función del nivel de conservación de muros, techos o suelos o de si la vivienda es de tipo precario, incluyendo mediaguas o mejoras. Éste, a diferencia del hacinamiento, no ha mostrado un comportamiento continuo a la baja y en la última medición alcanzaba al 18,8% de los hogares, de manera que es uno de los aspectos en los cuales ha habido pocos avances desde el año 2000 y plantea un desafío a futuro.

Otros Indicadores

Por otra parte, en todos estos años se produjo un importante aumento en el acceso de la población del país a diversos bienes y servicios, que no sólo inciden directamente en la calidad y condiciones de vida de las personas, sino que también tienen el potencial de mejorar su inserción en distintos ámbitos, tales como la educación y el trabajo. Así por ejemplo, según CASEN, el acceso a energía eléctrica llega al 100% en 2015, en circunstancias que el 2006 era del 90% y el 2000 alcanzaba al 75%. Los vehículos por cada 100 habitantes llegaron a 27 el año 2015, cuando eran sólo 9 el 2006. El acceso a internet era de 16,6% el año 2000, 34,6% el 2006 y 64,3% el 2015. Por último, las personas con celular llegaron a 89,3% el 2015, cuando eran el 53,8% el 2006 y sólo el 18,5% el 2000.

Aumento en atenciones de salud y mayor esperanza de vida

En cuanto a los servicios de salud a los que tiene acceso la población, desde 1990 ha habido una reducción en la brecha de atención que existe entre los hogares de mayores y menores ingresos del país. La cobertura para quienes hoy presentan un problema de salud es superior al 90% en

todos los quintiles de ingresos y,aunque persiste una brecha entre el nivel más alto y el más bajo, ésta se redujo considerablemente en el tiempo. Es posible incluso pensar en que este avance haya tenido un efecto positivo en la evolución de dos variables que internacionalmente se consideran como las más importantes a la hora de evaluar el progreso en la salud de la población: una reducción en la mortalidad infantil y un alza en la esperanza de vida al nacer.

En lo que dice relación con la calidad de la atención de salud, el estudio **"Ni 30 pesos ni tampoco 30 años"** nos revela que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington construye un índice de acceso y calidad que muestra que entre 1990 y 2016 Chile avanzó desde 56,5 a 77,9 puntos (de un máximo de 100). Esto nos sitúa dentro del 25% de los países con mejores resultados (entre 195 naciones) y primero en Latinoamérica (Global Burden of Disease Collaborative Network, 2018). Con todo, y aunque los datos presentados no permiten inferirlo directamente, hay otros antecedentes -como las listas de espera- que sugieren que los tiempos de espera en la salud pública, así como la calidad de ésta, se constituyen como los principales desafíos que aún siguen pendientes en esta materia.

La educación

En materia de educación, en estas décadas Chile muestra un importante aumento en el acceso en aquellos niveles donde estábamos más retrasados, esto es, en educación parvularia y enseñanza media.

En educación superior, por su parte, el aumento en cobertura experimentado por nuestro país es bastante inédito en el mundo y hoy nos sitúa al nivel de países desarrollados, posición que ya habíamos alcanzado antes de la introducción de la gratuidad en este nivel educativo. Es así como Ricardo Paredes, en el año 2014[6] ya planteaba que **"el crecimiento de la**

6 Paredes, Ricardo. (2014). Reflexiones para la educación superior en Chile sobre las propuestas de gratuidad. Centro de Políticas Públicas UC. Temas de la Agenda Pública N° 69, Año 9.

matrícula en los últimos 15 años en Chile no tiene precedente alguno en países desarrollados con sistemas gratuitos o fuertemente subsidiados". Es importante recalcar que el mayor acceso a este nivel educativo se ha concentrado en instituciones acreditadas por el Estado, de manera que en la actualidad 9 de cada 10 estudiantes asisten a una institución que cumple con dicha certificación.

Índice de Desarrollo Humano

Los avances del país se reflejan también en un mejoramiento constante en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que hoy nos ubica entre los países con un nivel de desarrollo humano muy alto, liderando entre los países de la región. Esto es importante porque este indicador responde al concepto de que el PIB no recoge completamente el nivel de bienestar de un país, de modo que habría que complementarlo con mediciones de otras condiciones sociales, que es lo que desde hace tiempo viene haciendo el PNUD con la medición de un indicador de desarrollo humano.

Desde 1990, Chile ha avanzado sostenidamente en el IDH, como resultado de un progreso constante en cada una de las dimensiones que lo componen: la esperanza de vida al nacer, la escolaridad esperada de los niños, la escolaridad media de los adultos y el PIB per cápita medido según paridad de poder de compra. Así, mientras en 1990 obtuvimos un puntaje de 0,703, en 2018 llegamos a 0,847 (20,5% más). Entre los países de desarrollo humano muy alto, Chile es el 12° con el mayor avance desde el año 1990 y está entre los 5 que más aumentos exhiben desde el año 2010.

En relación a la expectativa de vida, Chile se ubica muy por encima de la mayor parte de los países examinados y en la mediana de aquellos con desarrollo muy alto. Sin embargo, en escolaridad media de la población adulta, estamos en la mitad baja de este grupo y similar a varios países ubicados en niveles de desarrollo humano más bajos que el nuestro. Ello da cuenta de una falencia que también se observa en otras mediciones, como la pobreza multidimensional, y que se explica porque una parte de

los adultos de clase media en Chile presentan carencias importantes en términos educativos, lo que a su vez es posible que afecte su capacidad para generar ingresos y para enfrentar adecuadamente dificultades en materia de salud, trabajo, así como gastos inesperados. Sin embargo, es un indicador difícil de mejorar en la medida que los adultos carentes de educación no muestren disposición a estudiar. Por último, Chile posee el octavo menor PIB per cápita entre los 62 países de desarrollo muy alto, lo que si bien nos muestra un aspecto en que estamos atrasados, por otro lado significa que con menos recursos que los países desarrollados hemos podido obtener logros concretos en salud y educación que hoy nos posicionan en niveles de desarrollo humano comparables. Estos resultados se levantan sólidamente frente a la caricatura que se trata de hacer del modelo de desarrollo actual de Chile, en el que se privilegiaría el crecimiento económico por sobre toda otra consideración, en circunstancias que el Índice de Desarrollo Humano nos dice justamente lo contrario: estamos mejor en los indicadores sociales que en los económicos.

Pobreza multidimensional

Desde el año 2014, la pobreza multidimensional[7] se incorporó a las cifras oficiales que construye regularmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con la ***Poverty & Human Development Initiative*** de la Universidad de Oxford. Una comisión nombrada por el Presidente Piñera -que me tocó integrar y que presidió el ingeniero Rodrigo Jordán-, elaboró un informe recomendando las dimensiones e indicadores que este concepto debía incluir. Este es un indicador que busca dar una mirada alternativa a la medición tradicional de pobreza y recoger ciertas expresiones que ésta podría estar pasando por alto, pues exceden lo estrictamente económico. Para ello, identifica a quienes sufren de privaciones o carencias en distintos ámbitos, independiente de su nivel de ingresos, lo que se mide a través de 15 indicadores agrupados en 5 dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. De acuerdo a la metodología vigente, se considera que un hogar

7 Informe Final Comisión para la Medición de la Pobreza, enero 2014.

se encuentra en pobreza multidimensional cuando acumula un 22,5% o más de carencias, considerando todas estas dimensiones e indicadores. Según dicho criterio, en 2017 se contabilizaron 2,9 millones de personas en el país en situación de pobreza multidimensional (935 mil hogares). De éstas, 2 de cada 10 eran, además, pobres por ingresos. El resto son personas que, sin ser pobres por ingresos, enfrentan carencias en alguna de las dimensiones medidas.

Para estudiar la evolución de este indicador en el tiempo, tenemos la restricción de que no existen datos para calcular todas las dimensiones hacia atrás. Si se consideran sólo aquellas dimensiones para las cuales sí existen datos y medimos el porcentaje de hogares que presentaban al menos tres carencias en alguna de las áreas disponibles, constatamos que en 1990 estos llegaban al 34,7% mientras que en 2017 alcanzaron sólo al 7,4%. De esta forma, es posible comprobar que la reducción en la incidencia de las diferentes carencias ha sido sostenida y significativa desde 1990.

Si consideramos, por último, el porcentaje de hogares con carencias por dimensión e indicador en el año 2017, las áreas donde persisten los mayores desafíos son escolaridad, seguridad social y habitabilidad de la vivienda. El indicador de escolaridad está muy influido por la escolaridad media de adultos y siendo importante, resulta difícil de mejorar en el mediano plazo por la dificultad de implementar programas masivos para ese efecto. La calificación en materia de habitabilidad de la vivienda, como decíamos antes en este mismo capítulo, debe estar fuertemente influido por el mal estado de la vivienda, que se define por el nivel de conservación de muros, techos o suelos o de si la vivienda es de tipo precario, incluyendo mediaguas o mejoras. Este indicador, a diferencia del hacinamiento, no ha mostrado un comportamiento continuo a la baja en los años considerados e impone también una tarea a futuro.

Seguridad social

Por último, en el indicador de seguridad social se identifica como carentes a los hogares que tienen al menos un ocupado que no cotiza en el sistema

previsional y que no es trabajador independiente con educación superior completa. Cabe indicar que antes de 2009 la Encuesta CASEN preguntaba por el estado de cotización actual, mientras que desde el 2009 consulta por el último mes.

Es posible que de todos los indicadores que hemos revisado a lo largo del documento, éste sea el que registra la peor evolución durante el período, manteniéndose en torno al 30% (baja de 34,7% en 1990 a 28,9% el 2017). El resultado da la razón a quienes han estudiado en profundidad el tema de las pensiones en Chile, para concluir que su principal carencia se relaciona con nuestro mercado laboral.

Este resultado es, a su vez, consistente con las cifras de empleo informal que contabiliza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que sugiere que uno de cada tres trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad laboral. En 2019 comenzó a regir la normativa que establece la obligatoriedad de realizar cotizaciones por parte de trabajadores a honorarios, lo que busca favorecer su incorporación al sistema previsional. Es de esperar que este cambio normativo tenga un efecto sobre esta carencia. Sin embargo, considerando que no aplicará para hombres que en ese momento hayan sido mayores de 55 años y mujeres mayores de 50, aún persistirá una proporción importante de trabajadores que no contarán con cotizaciones para sus pensiones de vejez. Se constata aquí una materia en la que se requiere tomar con premura acciones de política pública, tanto para fomentar la formalidad laboral y a partir de ello, el pago de cotizaciones, como para enfrentar el inminente aumento en el número de adultos mayores con insuficientes ahorros y, por lo tanto, insuficiente jubilación.

Para los propósitos de este libro, de progresar en el entendimiento de las causas que originaron los sucesos que comenzaron el 18 de octubre, estos últimos antecedentes nos levantan una nueva alerta, relacionada justamente con el mercado laboral. Más adelante, en este capítulo dedicaremos un espacio a recoger interesantes aportes que surgen de estudios realizados recientemente sobre la evolución del empleo, la desocupación y la fuerza laboral en Chile en los últimos años.

Crecimiento Económico

De acuerdo a una estimación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2019) sobre la base de la información que proporciona la Encuesta CASEN, el peso que ha tenido el crecimiento en la caída que experimentó la tasa de pobreza entre 1990 y 2017 es de 91,9%, mientras que la parte que se explica por el componente redistributivo es de sólo 8,1%. Esto quiere decir que, durante las últimas décadas, un elemento clave para el mejoramiento del ingreso de los más pobres y la sostenida reducción de la pobreza que el país ha logrado es, precisamente, el crecimiento económico.

Similar conclusión obtiene el ex ministro Rodrigo Valdés[8] de un análisis que determina que las ganancias producto de la redistribución de ingresos entre 1990 y 2015 representan apenas una pequeña fracción del aumento total experimentado por los ingresos de las personas. Para la clase media, por ejemplo (entendida en este caso como quienes pertenecen al tercer quintil), el efecto del crecimiento representa más de 10 veces lo ganado producto de la redistribución. Y en el caso de las personas pertenecientes al 20% más pobre, en que los efectos de la redistribución son más relevantes, el crecimiento sigue siendo ampliamente dominante a la hora de explicar el aumento en sus ingresos: éste explica seis veces más que la redistribución.

Lo anterior da cuenta de la importancia que tiene el desempeño de la economía sobre los ingresos y los avances sociales que ha obtenido el país. O mejor dicho, que ambos resultados van de la mano y son las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, en los últimos años la tasa de crecimiento del PIB presenta un preocupante debilitamiento.

Una serie de la tasa de crecimiento anual del PIB a precios encadenados desde 1990 elaborada para la publicación **"Ni 30 pesos ni 30 años"**, permite constatar que desde 2014 la variación anual del producto estuvo muy

8 Valdés, Rodrigo. (2018). Shifting Winds in Latin America. Latin America Policy Journal, Seventh Edition, 28-34.

por debajo de las décadas anteriores. Mientras en los '90 la tasa de crecimiento promedio de la economía superó el 6% anual y en la década siguiente estuvo sobre el 4%, en los últimos 6 años el crecimiento apenas ha oscilado entre 1% y 2%, con excepción de un mejoramiento transitorio durante 2018, año en que se llegó al 4%. En 2019, de hecho, fueron las mismas movilizaciones - o mejor dicho la violencia asociada a éstas- lo que gatilló una caída en el producto durante el último trimestre del año.

Si a lo anterior sumamos las negativas proyecciones para este 2020 producto de la pandemia, tenemos como resultado un escenario tremendamente difícil. Tras casi tres décadas de crecimiento y avances sostenidos, es posible que muchos de los progresos que creíamos consolidados, hoy se vuelvan a ver amenazados.

Para los efectos que nos propusimos al iniciar este libro, la disminución en el ritmo de crecimiento de la economía, hasta llegar a un incremento per cápita prácticamente igual a cero, ciertamente podría representar un antecedente muy relevante. Si bien no podemos hablar de una acumulación de frustraciones durante 30 años, que es lo que se ha intentado presentar por quienes no comparten las políticas de libre mercado, sí podemos concordar en que la interrupción abrupta de una larga trayectoria de aumento de los ingresos y del consumo sí puede causar descontento, desesperanza y malestar.

¿Qué pasó en el mercado laboral?

En lo que sigue del capítulo presentaremos un análisis muy interesante acerca de los efectos sobre el mercado laboral y el consumo de esta caída en el ritmo de crecimiento, elaborado por el economista Álvaro Donoso en una publicación[9] editada por el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo.

---

9 Donoso, Alvaro. "Estallido Social ¿Hastío con el Modelo o estrechez en el mercado laboral?" Serie Debates Públicos N°11, Junio 2020, Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, Universidad del Desarrollo.

Donoso comienza su estudio analizando un cambio metodológico en la definición de la tasa de desocupación, ocurrida el año 2010. La Nueva Encuesta Nacional del Empleo (NENE) del INE, siguiendo criterios de la OCDE, introdujo ese cambio al considerar como **ocupados** a todos aquellos que declaraban haber trabajado una hora la semana anterior. La encuesta previa permitía a personas que trabajaron una hora a la semana declararse **desocupados** si el trabajo que estaban desarrollando era, a su juicio, de poco valor o inferior a sus capacidades.

El efecto práctico es que de allí en adelante la tasa de desocupación, el indicador que resumía la fortaleza del mercado de trabajo, empezó a mostrar un valor inferior al que se hubiera obtenido de haberse mantenido la definición anterior. Esto oscureció el hecho que desde 2014 en adelante se inició un período de deterioro sistemático de las posibilidades de aumento de la remuneración real que ofrece el mercado laboral.

Por eso, con una tasa de desocupación nacional promedio de 6,6% durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la impresión dominante en la opinión pública fue que, aun con crecimiento bajo, no llegaron a producirse problemas laborales de gravedad. Más adelante, a pesar que la tasa de desocupación desde el comienzo del actual gobierno y hasta avanzado 2019 subió hasta un promedio de 7,3% -un número aún distante de los observados en crisis previas significativas-, no se consideró la posibilidad de que el "estallido social" respondiera a un insuficiente crecimiento económico, sino más bien a otras razones como la desigualdad o la injusticia.

En agosto del 2019, el INE publicó un estudio donde a partir de este cambio metodológico definió indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo en que se daba un tratamiento distinto a los ocupados que tenían disposición a trabajar más horas a la semana o en trabajos de mayor calificación. Esto permitió a Donoso calcular una Remuneración Laboral de Equilibrio y posteriormente descubrir que el crecimiento de ésta había caído desde 2,9% en el período (2000-2013) a 0 en el año 2019 y no desde 3,1% a 1,5%, como indicaban las cifras anteriores.

El autor atribuye una buena parte de este efecto a la inmigración masiva que se produjo entre 2015 y 2019, que según sus cálculos habría duplicado el deterioro en las condiciones del mercado laboral para los trabajadores chilenos. Esta tendencia se validó con antecedentes de la división de estudios del Ministerio del Trabajo, que indican que la necesidad de un contrato de trabajo formal para poder obtener una visa llevó a inmigrantes a ofrecer servicios a salarios menores y en posiciones de menor calificación a la que poseían. Esto ocurrió hasta tal punto, que casi la totalidad del crecimiento de contratos formales en el período 2016-2019 habría sido absorbida por trabajadores migrantes, mientras los chilenos, por su parte, coparon mayoritariamente la categoría de trabajadores por cuenta propia. Enseguida, Álvaro Donoso aporta más antecedentes que podrían explicar la presencia de factores económicos en el malestar que se expresó a contar del 18 de octubre, basado en teorías del consumidor. Así, parte de la base que el consumo a lo largo de la vida de un grupo familiar debe ajustarse a sus posibilidades económicas y, por lo tanto, al valor esperado de los ingresos que generará en su vida el titular del grupo familiar.

A partir de allí, Donoso calcula que el ajuste en el consumo que deben realizar las personas cuya remuneración se ha ajustado a la baja en dos puntos porcentuales por año es considerable, especialmente si es una persona joven, llegando a valores de entre 20 y 40%.

Este último estudio, entonces, estaría entregando una explicación económica al enorme malestar que se expresó del 18 de octubre en adelante.

La tesis central de la investigación de Álvaro Donoso se ve corroborada por el análisis que realizan Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Gonzalo Valdés, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello en el libro ***Gestión de la Migración en el siglo XXI: El caso de Chile***[10] editado por El Mercurio en el mes de agosto. Los autores señalan que el ingreso de extranjeros, si bien

10 Bellolio Álvaro, Valdés Gonzalo. "Gestión de la Migración en el siglo XXI: El caso de Chile". El Mercurio 2020.

ayuda a rejuvenecer la fuerza laboral del país, trae consigo costos cuando se experimenta una desaceleración económica. Ante una desaceleración económica, el mercado es incapaz de crear empleos suficientes para nacionales y extranjeros que están llegando en gran número durante el mismo período de tiempo, deteriorando en algunos casos la relación entre chilenos y migrantes, especialmente en los sectores de bajos ingresos. El libro examina los datos del INE y del Ministerio del Trabajo para consignar que si el año 2014 un 21% de la creación de puestos de trabajo fue tomado por migrantes, en 2016 la cifra creció hasta llegar al 98%. Desde mediados del 2015 la fuerza laboral migrante se volcó a buscar empleos y en 2016 buena parte de ellos alcanzó empleos formales como señalábamos recién. Esto afectó especialmente a chilenos sin estudios superiores que en los años 2017 y 2018 vieron caer los empleos en 158.350 personas y 76.760 personas, respectivamente, mientras los extranjeros de ese mismo segmento aumentaban los empleos en 125.710 personas y 69.470 personas, respectivamente. Este fenómeno no ha ocurrido para empleos de mayor calificación. Sólo el 37,8% de los migrantes con educación superior accedieron a un empleo entre 2015 y 2019, mientras que un 63,3% de los nacionales pudo obtener un trabajo en este segmento. Esta información es plenamente concordante con el análisis que hace Álvaro Donoso, quien en su estudio recurre a las mismas fuentes.

A lo largo de este capítulo, buscando explicaciones fundamentalmente económicas a la gran convulsión que vivió Chile a fines del año pasado, concluímos que aquí no hay una acumulación de frustraciones por carencias económicas o por un aumento de las desigualdades -cuestiones que por lo demás, no han ocurrido- sino más bien es todo lo contrario, aunque sí levantamos algunas alertas. Ellas se relacionan más bien con la interrupción del ritmo de crecimiento y las dificultades para ajustar el consumo, sus efectos en los ingresos y el mercado laboral y particularmente, el surgimiento de vulnerabilidad en los sectores medios, que con mucha facilidad llegan a situaciones precarias, así como también, el empeoramiento de la habitabilidad de las viviendas en que viven.

Una forma sencilla de resumir nuestra indagación acerca de la incidencia de la evolución de la economía en los sucesos de octubre del 2019 está contenida en la frase que el abogado y filósofo, José Miguel Aldunate, dijo en una reunión en LyD: **"podría decirse entonces que el modelo funciona bien en quinta velocidad".**

Con todo, no nos dejaremos seducir completamente por la economía, abandonando nuestra promesa de recurrir a otras disciplinas para intentar explicar lo que ocurrió en Chile. Es evidente que la sociología puede entregarnos algunas respuestas y fundamentalmente nos abocaremos a ello en el capítulo que sigue, pues es interesante el aporte que de allí podría venir para analizar las brechas entre las expectativas y la realidad.

Capítulo 2

Expectativas y brechas

"Nosotros estudiábamos para ser sociólogos, pero en realidad estudiábamos para ser socialistas".
Fernando Henrique Cardoso

Capítulo 2:

Expectativas y brechas

Los contenidos del capítulo anterior, en que con herramientas tradicionales de la economía fuimos incapaces de encontrar a cabalidad una explicación a los sucesos de octubre de 2019, nos conducen a otros caminos. Esto no quiere decir que renunciemos a lo que nos dice la economía; de hecho, las indagaciones acerca de la evolución de la actividad productiva, la distribución de los ingresos y la desigualdad en Chile entregan algunos indicios para continuar esta investigación. Es evidente que la ralentización del crecimiento económico produjo una brecha entre expectativas y realidad. El ciclo *mejoramiento de la economía e ingresos/aumento del consumo y acceso a nuevos bienes y servicio/encarecimiento de la vida e incremento de los gastos endeudamiento/estancamiento de los ingresos*, se traduce para una parte muy importante de la clase media en esa realidad indeseable que se puede resumir con la frase: "no alcanza la plata para llegar a fin de mes".

En este capítulo intentaremos acercarnos al efecto que esa brecha entre expectativas y realidad produce en las personas. De los muchos documentos, artículos y libros que hemos consultado, el que más nos ha aportado para entender la subjetividad que hay tras un fenómeno como éste es el libro ***Hilos Tensados, para entender el octubre chileno*** cuya editora es Kathya Araujo, Socióloga de la USACH.

Hilos Tensados

Su lectura es extraordinariamente útil para entender cómo una brecha entre expectativas y realidad puede tensionar a las personas en un ciclo que la autora denomina: desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos. En palabras de Kathya Araujo: "lo que se desplegó en estas décadas ha sido una suerte de circuito de retroalimentación continua, que

conectó la vivencia de la *desmesura* (de las exigencias de la vida social; de las desigualdades en las interacciones; o en el uso del poder) con el *desencanto* de las promesas sociales no cumplidas, tanto económicas como normativas y por cierto, también respecto de aquellos que han sido o tendrían que haber sido sus garantes principales. De allí, en un paso, se genera la *irritación*. Finalmente, todo lo anterior aportó, en medidas y grados distintos, al incremento del *desapego* respecto de muchos de los principios, valores y normas que regulan la vida en común."

A continuación, la autora agrega que contribuyó a este ciclo el que la sociedad chilena contara con individuos más fuertes; con mayores expectativas de horizontalidad; con la convicción de poder actuar sin las instituciones; con expectativas más altas sobre el mínimo vital digno y una gran sensibilidad frente al abuso y la falta de respeto.

El libro recoge los aportes de 21 autores que ayudan a configurar el cuadro que la editora describe en el artículo que hemos citado recién. Hay que decirlo, no todos los autores logran la claridad de conceptos de la editora y algunos de ellos dejan ver, sin complejos, posiciones de extrema izquierda y/o afirmaciones que se alejan de un trabajo que pretenda sujetarse a metodologías de las ciencias y someterse a una mínima rigurosidad intelectual. Veremos algunos ejemplos de ello. Con todo, la inteligencia de la editora es tal que, pese a estas deficiencias de algunos de los escritos, logra que el conjunto del libro se transforme en una ayuda para entender mejor los hechos ocurridos en octubre de 2019; sin que por hacer este reconocimiento renunciemos al reproche al tratamiento de ciertas conductas violentas que en los textos se describen de manera neutra o derechamente se aplauden. El libro se divide en dos partes, la primera pretende, en palabras de su editora, "presentar todo lo que sabemos acerca de los hilos que venían tensados en la sociedad chilena" observando al máximo las reglas de la comunicación científica.

La segunda parte, en cambio, "está atravesada por lecturas sobre el acontecimiento mismo que son de una enorme cercanía temporal, subjetiva y espacial". La editora reconoce que en esta segunda parte no se cumple la

distancia visual y temporal propia de los instrumentos de las ciencias sociales. Esta declaración, necesaria, me parece aún muy complaciente con el equipo. Para alguien que no comparte las ideas políticas de izquierda de, supongo, todos los autores según se desprende de sus escritos, la segunda parte del libro es una suerte de manifiesto de apoyo a las protestas de octubre, incluidas las violentas. Si bien constatarlo estremece y preocupa, por el grado de compromiso que se advierte entre estos intelectuales y los grupos más extremos de la sociedad chilena, su lectura también es esclarecedora de la naturaleza del fenómeno que vive Chile y del trabajo de mucho tiempo que se viene haciendo en nuestro país por parte de intelectuales y profesionales de las ciencias sociales para proveer de sustento conceptual a la izquierda.

A continuación voy a ahondar en algunos contenidos de la primera parte del libro que sirven para construir hipótesis acerca de qué pasó en octubre en Chile. Aludiré también, brevemente, a otros artículos que no ayudan a ese objetivo y más bien se inscriben en un intento, a veces burdo, por desprestigiar las ideas de libre mercado sin la evidencia que debiera corresponder. En esta primera parte, ***Hilos Tensados*** contiene artículos acerca de la situación laboral, el consumo y endeudamiento, la vivienda y el espacio público, los jóvenes, el orden público y las policías y las pensiones. Como puede anticiparse de esta enumeración, estos trabajos tienen el potencial de entregar valiosos antecedentes acerca de las motivaciones que pudo haber para la protesta social de octubre y en particular, las manifestaciones de violencia extrema que vivió Chile esos días.

Kathya Araujo nos dice en su trabajo que las desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos que tanto tienen que ver con la explicación del 18 de octubre son producto de la instalación de "un modelo llamado neoliberal", que es "el nombre con el que ha sido denominado por los individuos este modelo". Primero hay que reconocer el pudor intelectual que tiene para definirlo así, pues es sabido que no hay una corriente propiamente tal de pensamiento que se pueda calificar de neoliberalismo, si atendemos a los cánones para definir lo que es una doctrina o una ideología. La prueba de ello es que no hay autores que se denominen neoliberales, sino más

bien esta expresión se usa como "un mono de paja", algo que se construye según el antojo del crítico para después dispararle, ejercicio mal visto entre intelectuales. El que ella diga que neoliberalismo es el nombre con que ha sido denominado por los individuos este modelo es honesto, aunque le falte decir que los individuos han adoptado esa terminología a partir del intento sistemático de la izquierda que actúa en el campo intelectual por construir ese mono de paja.

Uno de los problemas que tiene usar estas categorías sin rigor es que las conclusiones que se obtienen están llenas de imprecisiones. La misma editora dice, siguiendo a varios autores que cita, que como consecuencia de la aplicación de ese modelo "se restringieron los servicios públicos a los cuales los ciudadanos pueden acceder". Eso es inexacto, con la sola excepción de la previsión, donde efectivamente a contar del año 1981 se terminó con el ingreso de trabajadores a las cajas de previsión estatales sin que ello haya redundado en beneficios menores para la gran mayoría. En los demás servicios sociales la presencia estatal siguió creciendo. Hoy tenemos una salud pública más robusta que a principios de los 70 (así lo demuestran todos nuestros indicadores sanitarios), una educación pública también más extendida, especialmente en los niveles medio y superior. Es cierto que porcentualmente la población cubierta por el sector privado ha crecido significativamente, hasta llegar al 20% en salud y más de 50% en educación. Pero un número muy reducido de personas podría decir que se les restringieron los servicios públicos, pues la verdad es que antes no accedían a ellos. Sólo el 4% de la población cursaba estudios superiores, por ejemplo, y ahora lo hace el 50%. La historia que le gusta contar a la izquierda es más bien un cuento que no tiene asidero en la realidad. Hay más opciones privadas para proveer esos servicios, es cierto, pero no es que los ciudadanos hayan quedado huérfanos de cobertura estatal.

Este error, porque lo es, se repite más adelante en el libro cuando se habla de políticas de vivienda. No puede presentarse como una pérdida lo que no lo es, pues ello distorsiona la comparación objetiva de la situación de las personas entre distintos períodos. Lo que sí es cierto es que para explicar una brecha de expectativas, a veces las subjetividades suelen ser

más importante que las realidades objetivas. Ello es relevante para la tesis general que presenta el libro, pero éste habría quedado mejor si se excluyeran las constantes omisiones, olvidos y a veces, simplemente distorsiones sobre lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas. Porque al no hacerlo, resulta inexplicable no sólo el evidente progreso económico del país en los últimos treinta años, sino la reducción de la pobreza, de la desigualdad y sobre todo, el lugar privilegiado que ocupa Chile en el Índice de Desarrollo Humano que elabora el PNUD, todo ello documentado en el capítulo uno de este libro.

Lo mismo puede decirse de artículos como el de Antonio Stecher y Vicente Sisto, que hablan de la precarización del empleo durante las últimas décadas, sin mencionar el importante aumento de los salarios reales en el período, y atribuyen al "sufrimiento social vinculado a la precarización laboral", entre otros factores, una parte del horizonte de sentido del movimiento social de octubre de 2019. El artículo cuyo título es "Trabajo y precarización laboral en el Chile Neoliberal" tiene un problema si quiere explicar los sucesos de octubre de 2019 a partir de allí, si a esa fecha había más trabajo y menor precariedad que antes de las reformas "neoliberales". Distinto es que en los últimos cuatro años se haya producido un estancamiento en el crecimiento de los salarios reales, como de hecho ocurrió y tuvo consecuencias importantes, lo que se explica en el capítulo anterior que entrega antecedentes acerca de la precarización del mercado laboral durante el gobierno de Michelle Bachelet, que sufrió el doble golpe de la ralentización de la actividad productiva y el crecimiento de la fuerza de trabajo inmigrante que ocupó casi la totalidad de las plazas de trabajo disponibles en el período. Que se diga en este artículo que la precarización se explica también desde la percepción de una alta injusticia, dadas las altas tasas de crecimiento económico y de producción de riqueza y beneficios acumulados por una élite, es también inexacto, pues si bien la percepción de injusticia puede existir, es aventurado y forzado relacionarla con la precarización laboral, si sistemáticamente los ingresos de los trabajadores de menores salarios han crecido más que los de los de altos ingresos, como se señala en el capítulo uno en base a la encuesta CASEN.

Otros antecedentes, como la Encuesta Bicentenario UC-Adimark, también entregan datos acerca de la calidad de los empleos que llevan a concluir que no cabe hablar de precarización en el campo laboral. Nos extenderemos más en ello cuando hablemos de las percepciones de la clase media en el capítulo siguiente.

Respecto al artículo de ***Hilos Tensados*** que se refiere al endeudamiento, de Lorena Pérez Roa, cabe decir que éste explica bastante bien el proceso de endeudamiento creciente de un número importante de chilenos asociado a expectativas de mejoramiento de calidad de vida en consumo, acceso a servicios y a bienes tan preciados como la educación. Lo que no menciona, una omisión importante, es que el creciente atraso en el pago de cuotas hacia fines del período analizado se debe, en una proporción significativa, a una interrupción del aumento de los ingresos que venían experimentando los chilenos en estas décadas de "neoliberalismo", estancamiento que se produjo fundamentalmente en el segundo período de gobierno de Michelle Bachelet, en que el ingreso de los chilenos bajó su crecimiento hasta llegar al mismo ritmo de expansión de la población. Constatar y reconocer esto podría haber llevado a una interesante reflexión sobre el rol de los ciclos económicos en la política.

El artículo dedicado a Vivienda, escrito por Alejandra Rasse, desperdicia la oportunidad de referirse a un problema que objetivamente enfrenta la población chilena en los últimos años, en particular los jóvenes: el encarecimiento del precio de la vivienda. De leer el texto pareciera que la intención de la autora es simplemente atacar las políticas de mercado. No reconoce el rol que tuvo el mercado en el mayor acceso a la vivienda de los chilenos, especialmente de clase media, ni la alta proporción de propietarios que muestra Chile según cánones internacionales. Atribuye al mercado, en cambio, todos los problemas, como la tendencia de los últimos años al aumento del precio de las viviendas. La autora no menciona que las restricciones a la constructibilidad y la existencia de límites urbanos (vale decir, regulaciones que evitan que funcione libremente el mercado) son los mayores causantes de ese aumento de precio, como se reconoce hoy en

el amplio debate que hay a nivel mundial sobre esta materia, una muestra de lo cual puede leerse en la revista The Economist[1].

Su mayor preocupación pareciera ser la de una política de vivienda con subsidios a la demanda y amplio acceso al crédito que desalienta la formación de movimientos de pobladores y la autogestión en la construcción de viviendas. La autora recuerda, con nostalgia en algún sentido, las grandes erradicaciones o tomas de terreno que dieron origen a esos movimientos de pobladores, organizaciones que parecen ser su auténtico objeto de preocupación en lugar de la vivienda.

Distinto es el caso del artículo referido a espacios públicos, escrito por Elke Schlack, que plantea una interesante discusión acerca de la aspiración de propietarios y arrendatarios de viviendas de sectores medios y bajos de contar con espacios públicos que contribuyan a una mejor calidad de vida, especialmente atendiendo a la falta de espacio interior de muchas de sus viviendas. Es indudable que esa percepción de falta de respuesta a una legítima demanda para que los recursos públicos no sean asignados de forma desigual, contribuye a explicar el malestar y debiera formar parte de una agenda que pretenda disminuir las desigualdades en nuestro país y contribuya a una mejor percepción de la ciudadanía de la acción del Estado.

El artículo de Camila Andrade, "¿Cuánto más soporta el Pilar Solidario? La experiencia de la vejez en el Chile actual", es un honesto aporte a la comprensión del impacto que tiene sobre el grupo familiar la obtención de bajas pensiones por parte de los adultos mayores. Este enfoque ayuda a comprender la masividad de las demandas sobre cambios al sistema, en la medida que las carencias de ingreso de los adultos mayores repercuten, en definitiva, en el uso de los ingresos de sus hijos, que deben auxiliarlos económicamente. La autora es prudente y renuncia a plantear soluciones al tema de las pensiones, campo que probablemente intuye que está fuera de su especialidad, lo que no le impide mostrar asertivamente el impacto de las bajas pensiones en las familias chilenas.

---

1 The Economist, "The horrible housing blunder", January 18th 2020.

El gran reproche que, en definitiva, puede hacerse a la publicación ***Hilos Tensados,*** en su parte primera, es que su tesis de acumulación de tensiones "durante estas décadas", como lo dicen varios de sus autores, es oportunista e induce a error, pues se aprovecha de hechos, cuestiones y sensaciones que efectivamente ocurrieron en los últimos cuatro o cinco años, para extenderlos hacia todo el período de treinta años sin ningún elemento de prueba, ni hipótesis relativamente plausible que lo justifique. Eso constituye una impostura y una distorsión de la realidad, pues si ocurrieron fue, entre otras cosas, porque las políticas que se aplicaron en los últimos años son completamente opuestas a lo que aquí se denomina "políticas neoliberales". Fueron las alzas de impuestos y el desproporcionado aumento del gasto público, entre otros, los que llevaron a perder grados de inversión, los que deterioraron el crecimiento de la economía chilena y lesionaron los ingresos de las familias, causando frustraciones, tensiones y altas brechas entre las expectativas, generadas por la trayectoria que traía el consumo, y la realidad determinada por el paupérrimo crecimiento de la economía chilena.

Esta publicación se inscribe entonces en un gran esfuerzo de resignificación de lo que ha ocurrido en los últimos treinta años en Chile, esfuerzo que, digámoslo, ha sido exitoso, pero no por ello ajustado a la verdad.

Hay un par de aportes más a la comprensión de octubre en el texto. Lucía Dammert se refiere a la crisis de Carabineros, aportando datos de estudios de opinión que muestran una cierta degradación en la percepción de los ciudadanos sobre la policía luego de varios casos que contribuyeron a ello; Pablo Neut, en su artículo sobre enseñanza, afirma que en la práctica, en materia educacional el ejercicio tradicional de la autoridad es recalificado bajo el rótulo de autoritarismo y que en el ejercicio de la práctica se configura una suerte de "currículum oculto" en torno al aprendizaje de la desobediencia. Es interesante este artículo, en cuanto anticipa razones para explicar el rol protagónico que grupos de estudiantes han tenido en las manifestaciones violentas. Por último, en el artículo sobre lo que los autores llaman las subjetividades neoliberales, que cierra la primera parte, Álvaro Soto y Carla Fardella afirman que "el sujeto

colectivo que interpela al sujeto canónigo neoliberal se despliega incipientemente en un plano afectivo". Desde las esferas afectivas, afirman los autores, es desde donde se elabora la incomodidad frente al sistema. Esta suerte de conclusión alimenta toda la Parte II de ***Hilos Tensados***, como veremos enseguida.

Esta dimensión afectiva y su irrupción en la política habían captado mi atención hace un tiempo. De hecho, en marzo del año 2018 publiqué en Libertad y Desarrollo el documento **"Política y Sentimientos"**[2], que hace una revisión bibliográfica de la creciente importancia de las emociones y la consecuente caída del razonamiento en la formación de opinión de las personas, en particular los jóvenes. Siguiendo esa tendencia, el individuo racional y soberano, hijo de la Ilustración e implícito en el liberalismo clásico, está amenazado hoy por la invasión de los sentimientos en la política. Mi artículo reconoce el desafío y señala que constituiría, entonces, un formidable desafío lograr que, atendiendo a esta dimensión sentimental que se impone en estos días, el hombre conserve en la esencia la autonomía de la voluntad que apreciamos en el pensamiento liberal. Más adelante volveremos sobre el tema de los sentimientos en la política.

El Manifiesto de octubre

Como les anticipé al comenzar este capítulo, ***Hilos Tensados: para leer el octubre chileno*** nos ilumina también en un orden completamente distinto, que es la forma en que nos muestra el compromiso de los autores y su entorno intelectual con las demandas de quienes protestaron en nuestro país en octubre. Ese compromiso incluye, a veces, una abierta justificación del uso de la violencia, cuando no una apología de ésta. Revisaremos a continuación algunas muestras de la entrega que hay en la Parte II que se ha denominado, **"Acontecimientos e irrupciones".**

Rosario Fernández y Claudia Moreno comienzan su artículo "Feminismos en las revueltas" con la frase: "Octubre de 2019 y Chile se sorprende a sí

2 Larraín, Luis, "Política y Sentimientos: respuesta liberal al populismo". Serie Informe Sociedad y Política 163, Marzo 2018, Libertad y Desarrollo.

mismo en el despertar de lo que parecía un largo mal sueño de sometimientos a abusos, promesas incumplidas y frustraciones". Se refieren así al período de mayor prosperidad, reducción de la pobreza y crecimiento del bienestar de la clase media chilena que se haya visto en la historia de Chile.

Las autoras relatan la forma en que manifestaciones feministas en mayo de 2018, incluyendo tomas de diversas sedes universitarias, fueron preparando el terreno para octubre de 2019. También incluyen, acríticamente, afirmaciones de instituciones como Amnistía Internacional Chile sobre violaciones a los derechos humanos, omitiendo mencionar que entre las organizaciones que convocan a las manifestaciones agrupadas en la denominada Unidad Social estaba Amnistía Internacional Chile, que entonces actuaba como juez y parte (luego que esto se hiciera ver públicamente, Unidad Social cambió la mención en la página web y desde allí en adelante figuró: funcionarios de Amnistía Internacional Chile, como si eso hiciera una diferencia importante).

En el artículo hay un extenso elogio a la *performance* del grupo Las Tesis y una descripción de los rayados en las calles de nuestras ciudades, incluyendo algunas como: "Ni machos, ni pacos ni fachos", "Ni tuya ni Yuta", "Yo abortaría por si se hace policía", "Aborta un Paco", que se acercan a una banalización de la violencia criminal. Hay también una suerte de amnesia respecto al nulo avance de la manifestación feminista durante el gobierno de Michelle Bachelet y se concluye diciendo que "desde los feminismos se ha impulsado a resistir y desarticular los discursos y prácticas neoliberales que contribuyen a la precarización de la vida", renunciando a cualquier análisis serio acerca del efecto de políticas económicas liberales en la condición de la mujer, que es lo que uno esperaría de un grupo que, se supone, busca mejorar la posición de las suyas en la sociedad.

En el artículo "Hasta que (la plaza) de la Dignidad se haga costumbre", Tai Lin hace un pormenorizado relato del estallido de violencia del 18 de octubre incluyendo las barricadas en las calles, la quema de un bus del Transantiago y el incendio del edificio de la empresa eléctrica Enel. Refiere

el autor, enseguida, a la salida de militares a las calles el 19 de octubre y advierte que frente a ellos no hubo miedo y como consecuencia "la protesta en Chile renovó su repertorio de acción". Con una frialdad que parece propia de un experto en guerrilla urbana, el autor nos cuenta cómo la tradicional protesta desde lo local con barricadas en los barrios, interrumpiendo el transporte, tenía por objeto interrumpir la normalidad de la vida cotidiana, pero sin enfrentarse a las fuerzas de orden en el centro de Santiago. "El día 19 de octubre, bajo la custodia militar de la ciudad, las barricadas se instalaron con un alcance metropolitano. La veintena de estaciones del Metro quemadas y los semáforos apagados aseguraban el desplome de la cotidianeidad a escala metropolitana". Luego describe la aparición de tipos disfrazados de superhéroes y la aparición de "imágenes de un perrito negro llamado matapacos" y la participación de barras bravas de equipos de fútbol. Relata que "emergió una primera línea de manifestantes que, en puntos estratégicos y con escudos cada vez menos improvisados, se enfrentaban a Carabineros, manteniéndolos a distancia de la manifestación". Termina su alegoría relatando la toma de control de la Plaza Baquedano, que él llama Plaza de la Dignidad.

El artículo "La marcha más grande de Chile", de Mariana Valenzuela, es valioso para los efectos de mostrar cómo se concibe desde algunos de estos investigadores su rol en las Ciencias Sociales. Es un relato donde ella es parte de la multitud que confluye hacia la Plaza Italia. Me limitaré a transcribir textualmente su frase final:

"Horas después, ante la marcha más masiva que hayamos tenido en democracia, el Presidente escribió en Twitter: [la multitudinaria, alegre y pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Con unidad y la ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos.] **Al leerlo inmediatamente se me vino la imagen del muñeco que lo representaba y que iba atado a un palo, posiblemente para ser quemado mientras la multitud eufórica garabateaba su nombre. Al parecer no entendió el mensaje."**

Alejandra Rasse, que ya había participado de este libro en un artículo sobre vivienda, se inscribe también entusiastamente en la segunda parte con un artículo denominado "Lo Hermida: botar el muro y abrir el imaginario". Es una suerte de alegoría, que a veces recurre a lenguaje poético a partir de la figura de un muro que divide a los pobladores de Peñalolén, y en particular de Lo Hermida, de la tradicional Viña Cousiño Macul. La autora nos dice que "la viña es parte de la identidad de Lo Hermida. No es extraño entonces que algunos de sus habitantes piensen que la proyección natural de Lo Hermida es hacia los terrenos de la viña". Luego nos cuenta que el 26 de octubre, después de una marcha de comités de allegados de Peñalolén, dirigentes de algunos comités decidieron tomarse los terrenos de la viña, para "visibilizar" su demanda que podía resumirse en el lema "la viña Cousiño Macul para viviendas sociales en Peñalolén".

El intento de toma fue reprimido por Carabineros, que lanzaron bombas lacrimógenas y lograron evitar que las 200 personas que se hallaban en el lugar lo abandonaran. La autora nos cuenta que vecinos del sector "bajaron a encarar a Carabineros" por el efecto de las bombas lacrimógenas, su forma de decir que atacaron la Subcomisaría, luego de la cual varios de los asaltantes fueron detenidos. Se relata cómo los incidentes continuaron durante toda la noche y en un momento, incluso, "se produjo" la quema y desplazamiento en llamas de un automóvil hacia el interior de la Subcomisaría. El artículo continúa diciendo que finalmente, al terminar ese día, liberaron a los detenidos salvo a tres personas y que los liberados salieron junto a representantes de derechos humanos de la Asamblea Territorial de Lo Hermida y fueron recibidos por la llamada "primera línea" de los manifestantes, quienes los cubrieron entre escudos improvisados y preguntaron: "Hermanita, ¿cómo está la mano para quemar esta hueá?".

Los incidentes en Lo Hermida continuaron con gran violencia durante varias semanas provocando grandes destrozos y haciendo intransitable algunos lugares. Las viviendas más cercanas a la unidad policial de este sector sufrieron permanentemente el efecto de las bombas lacrimógenas durante ese período. El 24 de noviembre, la junta de vecinos N°18

emitió un comunicado en redes sociales, instando a dejar de convocar a manifestaciones frente a la Subcomisaría con el fin de resguardar la salud de los vecinos. Esto hizo bajar la violencia, sin que ella terminara, ya que en diciembre, según señala la autora del artículo, continuaban las manifestaciones en el frontis de la unidad de Carabineros, aunque éstas eran más esporádicas. Se menciona también que algunos vecinos, especialmente de mayor edad, vieron en la toma de la viña el origen de la violencia desatada en Lo Hermida e incluso comenzaron a retirar las barricadas nocturnas y permitir el paso de la locomoción colectiva.

Alejandra Rasse termina su artículo diciendo que producto de la destrucción del muro, Lo Hermida tiene ahora vista a la viña y que ella sentía que el muro era violento. Pero ahora, considera que es más violento ver la amplitud verde de la viña justo en frente de la alta densidad y hacinamiento de Lo Hermida.

Por supuesto, esta peculiar concepción de la violencia hace muy difícil la convivencia pacífica entre chilenos y explica por qué la Subcomisaría de Peñalolén es la más atacada del país en los incidentes que comenzaron el 18 de octubre.

Según se informa en **El Mercurio** del 28 de julio de 2020, seis meses después de los últimos hechos narrados, y luego de una jornada de violencia que dejó 15 detenidos, Carabineros reporta que esta unidad ha sido atacada en 157 ocasiones, lo que ha dejado un total de 121 carabineros heridos de diversa consideración, incluyendo uno que perdió la visión de un ojo por efecto de un perdigón disparado por uno de los asaltantes. El Comisario de la Prefectura Oriente señala que estos ataques son realizados por jóvenes encapuchados, que emplean para ello bombas molotov, piedras, palos, resorteras y hondas; y en los casos más graves armas de fuego, incluyendo escopetas artesanales, armas cortas como pistolas, todo lo cual está registrado en cámaras de vigilancia. Habitualmente se trata de un grupo de entre 200 a 300 sujetos jóvenes que, periódicamente, intentan dañar la unidad. Carabineros ha realizado un total de 127 denuncias en la Fiscalía correspondiente.

Quiero terminar esta larga incursión por el libro ***Hilos Tensados*** con una breve mención al capítulo "¿La encarnación de una exigencia contradictoria? Algunas reflexiones en torno a la violencia policial". Me parece importante hacerlo porque aquí está la defensa más elaborada del uso de la violencia en política. El autor, Nelson Beyer, parte con una afirmación provocadora cuando dice que los calificativos de "abusivo", "excesivo" o "extremo" sólo tienen sentido si se les contrasta con un pretendido criterio de normalidad relativo al uso de la fuerza. Un uso normalizado gracias a las cortapisas que implicaría el apego a la ley, pero que ese criterio de normalidad aplicado a la policía se muestra inadecuado. En pocas palabras, le niega a la policía el ejercicio legítimo de la fuerza.

El autor hace un largo recorrido para llegar a esa conclusión. Parte con Raymond Aron señalando que lo característico de los regímenes políticos occidentales -es decir democráticos- era la competencia pacífica por el ejercicio del poder y que, en general, el respeto a las reglas constitucionales mantenía controlada la tentación de acudir a métodos violentos para conseguir objetivos políticos. Pero enseguida cuestiona este sentido común, siguiendo a Norbert Elias, diciendo que está encuadrado en una lógica antinómica (política de un lado, violencia del otro y desde allí la composición de distribuciones binarias: ley/transgresión; guerra/paz, etc.) que ha sido el efecto de un largo trabajo represivo por parte del Estado en el proceso de convertirse en un actor que goza de un acceso exclusivo al uso de la fuerza.

Con estos argumentos, Beyer afirma que la representación antinómica entre política y violencia está desafiada. Agrega que se supone un régimen de reciprocidad entre el ciudadano y el Leviatán "renuncia a la violencia y yo te protegeré". Y aquí lo cito: "sin embargo, el gran problema político al que debemos enfrentarnos es que este régimen de reciprocidad no deja de ser constantemente interrumpido por un régimen de usurpación, es decir, por una concentración de la fuerza que no se acompaña por una compensación de justicia. **En este sentido, se vuelve urgente repensar las relaciones entre política y violencia, avanzar más allá de un abordaje puramente moral de ella y, sobre todo, evitar la tentación de sumarse al**

coro monocorde que invita a condenar los hechos de violencia vengan de donde vengan".

Como lo señala el sociólogo José Joaquín Brünner en una columna en el diario electrónico El Líbero[3] de noviembre del 2019: "en la sociedad contemporánea uno de los medios más eficaces para debilitar, trabar y eventualmente paralizar la acción represiva y preventiva de los destacamentos "especiales" de hombres armados es el despliegue de un dispositivo discursivo que equipara dicha acción del Estado con la violencia proveniente de la organización armada espontánea de la población. Dicha equiparación sugiere que la violencia dirigida contra el Estado y la que éste usa en su defensa serían igualmente ilegítimas, similarmente destructivas, parejamente condenables". Más adelante agrega Brünner: "la perversa lógica de esta operación discursiva y sus implicancias comunicacionales, ideológicas, políticas y culturales no pueden pasarse por alto".

Lo que hemos revisado en este capítulo es fundamental para entender lo que pasó en octubre del año 2019, pero también, como sugiere José Joaquín Brünner, es muy importante para elucubrar cómo salimos de aquí.

3 Brunner José Joaquín, "Violencia. El desquiciamiento de la sociedad", Columna El Líbero 27 de noviembre de 2019.

Capítulo 3

Del malestar a la violencia política

"Porque su origen (malestar) es una vieja pretensión de los seres humanos: la de que uno puede llevar la parte buena de las cosas, desechando la mala".
Carlos Peña

Capítulo 3:

Del malestar a la violencia política

Los dos primeros capítulos del libro han ahondado en cifras en torno a la evolución del bienestar entre los chilenos en los últimos años, su consumo, sus ingresos, la desigualdad de estos (primer capítulo); y acerca de las frustraciones que la brecha entre el logro de sus anhelos y la realidad les provocan (segundo capítulo). En este tercer capítulo intentamos adentrarnos en el farragoso mundo de la mente de las personas y sus interacciones en la sociedad para tratar de entender mejor los sucesos de octubre. Tarea difícil y que, por supuesto, nos supera. Como decíamos al comenzar el libro, nos falta la distancia que da la historia y a lo que verdaderamente podemos aspirar quienes escribimos sobre estos hechos hoy, es que alguna de las cuestiones que planteamos resista bien el paso del tiempo. Agrego ahora que, en mi caso, carezco de suficiente conocimiento sistemático en algunas áreas que es insoslayable abordar para lograr el objetivo. Persisto en esta tarea, no obstante, porque algunas de las mentes más preclaras de nuestro país, conmovidas por lo que ha ocurrido en Chile, han escrito interesantes textos, participado de varios foros y, en un par de casos, han estado generosamente dispuestos a intercambiar con el autor opiniones, intuiciones e ideas sobre el tema que nos preocupa.

Esta búsqueda de los orígenes y las causas del malestar se inicia a partir de ciertas inquietudes y trata, al mismo tiempo, de someter a comprobación algunas intuiciones del autor luego de la simple observación de los hechos, desde un lugar donde se estudian las políticas públicas. La primera inquietud personal es la masividad de las acciones de protesta que tuvieron lugar durante octubre de 2019 y su intensidad, que realmente fueron una sorpresa para mí y probablemente para la mayoría de los chilenos. En el capítulo anterior encontramos varios indicios, principalmente cualitativos, acerca de causas de malestar entre los chilenos; pero la masividad e intensidad de la protesta, a mi juicio, no son suficientemente explicadas y

por lo tanto, necesitamos otras formas de abordar el tema. Una intuición, o una constatación a estas alturas, es que la fuerza e intensidad de este movimiento es claramente mayor entre los más jóvenes y que entre estos, hay motivos, razones y sentimientos propios de ellos. Es entre amplios grupos de la sociedad, como son la clase media y los jóvenes donde hay que ir a buscar respuestas a estas inquietudes.

Veintidós meses antes de octubre de 2019, la mayoría de quienes fueron a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile le dieron una clara ventaja a Sebastián Piñera sobre su rival, el candidato de la centroizquierda, senador Alejandro Guillier. ¿Qué pasó en menos de dos años que justificara tan claras manifestaciones de descontento de un número tan importante de personas? Uno de los factores que hay que mirar para buscar una respuesta a esa pregunta es el porcentaje de personas que fueron a votar en esa elección, pues eso podría explicar parte de la masividad de las movilizaciones de octubre, ya que presumiblemente muchos de los que protestaron podrían estar entre los que simplemente no votaron en las elecciones presidenciales. Al mirar los antecedentes de esas elecciones se concluye que la participación electoral en la segunda vuelta presidencial en que fue electo Piñera fue de un 49%, lo que no difiere significativamente de elecciones anteriores comparables: de hecho, Michelle Bachelet en la segunda vuelta ganó con un porcentaje mayor que Piñera (62% vs 55%) pero la abstención fue mucho más alta (59%), probablemente por la predictibilidad del resultado. Pero, en definitiva, Sebastián Piñera, con más de 3.796.000 votos, recibió el apoyo explícito de más gente que Michelle Bachelet, que sacó algo más de 3.470.000 votos en la segunda vuelta presidencial celebrada en diciembre de 2013.

La baja participación electoral es un fenómeno propio de países con sistemas electorales de inscripción automática y voto voluntario y si bien puede decirnos algo acerca del grado de compromiso con la política que tienen los ciudadanos, no es un factor capaz de explicar lo que buscamos, atendida la abstención que hubo en las elecciones que llevaron al poder a Sebastián Piñera en marzo del 2018 y a Michelle Bachelet el 2014.

La serie de Encuestas Bicentenario que realiza la Universidad Católica de Chile con la empresa ADIMARK desde el año 2006, da una buena perspectiva dinámica de la evolución de las opiniones de los chilenos acerca de su propia vida y de la sociedad. En la última versión disponible[1] que fue tomada entre julio y septiembre de 2019 y dada a conocer en enero del 2020, si bien se nota una mayor adhesión a políticas que propician la intervención del Estado en la solución de los problemas y también mayor conflictividad social y menos esperanza de progreso económico, no se aprecia un cambio tan dramático que pudiera explicar la intensidad y masividad de las protestas de octubre.

Entre las respuestas de la Encuesta Bicentenario que vale la pena mencionar para buscar evidencias de un período previo a un estallido social, están aquellas que demuestran una baja en las expectativas de progreso de las personas en el año 2019. Es cierto que hay una fuerte caída en la percepción acerca de la posibilidad que cualquier trabajador pueda comprar una vivienda nueva (21% versus 36% en 2018 y 34% en 2017), pero ello puede estar dando cuenta del rápido encarecimiento del precio de las viviendas en los últimos años, que ya habíamos mencionado en el capítulo anterior. También en esa categoría puede inscribirse la pregunta acerca de si una persona de clase media puede llegar a tener una muy buena situación económica, cuya respuesta afirmativa baja de 33% el 2017 a 29% el 2018 y 24% el año 2019. Más que acumulación de tensiones sociales por 30 años, este resultado podría estar indicando el efecto sobre las ilusiones de una gran cantidad de chilenos de la interrupción del crecimiento de la economía chilena que comentábamos en el capítulo uno.

La otra respuesta interesante, y que abonaría a la tesis de un rápido deterioro de la cohesión social en el país, es el aumento en la percepción de un conflicto entre ricos y pobres, que sube de un 48% en 2018 a un 67% en 2019. Este salto, que sí es muy abrupto, más que responder a un deterioro de la distribución del ingreso que no pudo ocurrir en un lapso tan breve, podría responder a otro tipo de factores, de carácter más político. Más adelan-

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Encuesta Nacional Bicentenario 2019.

te en este capítulo volveremos a una interesante discusión sobre este punto acudiendo a las opiniones de destacados intelectuales chilenos.

Clase Media

Si hablamos de masividad en Chile, estamos hablando de la clase media. Como habíamos mencionado en el capítulo uno, un trabajo publicado por Libertad y Desarrollo y denominado **"Hacia una definición y caracterización de la clase media en Chile",** escrito el año 2018, hace un interesante esfuerzo por actualizar la definición de clase media en Chile, según metodologías del Banco Mundial e información de la encuesta CASEN. Allí se demuestra que, junto con la sostenida reducción de la pobreza en nuestro país, en las últimas décadas también se ha ido reduciendo la población calificada como vulnerable, mientras se incrementa el grupo correspondiente a la clase media y al nivel de ingresos altos. Ello ha llevado a que desde el año 2011, la población de clase media haya superado la proporción de personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad. A partir de ahí y especialmente en el último registro disponible para el año 2017, se observa con claridad que la clase media se ha posicionado como el grupo más extenso del país, con el 65,4% del total de la población. El mismo estudio demuestra, no obstante, que hay una gran heterogeneidad en esta definición de clase media, pues hay un grupo muy grande de personas a las cuales un evento no previsto en materia de salud o de tipo laboral transforma inmediatamente en vulnerable, cuando no en pobre. Para analizar la distribución de la clase media, en ese estudio se dividió a los hogares que pertenecen a ella en tres subgrupos de acuerdo a sus ingresos el año 2017: (i) clase media baja, quienes se encuentran entre 1,5 y 3 veces la Línea de Pobreza ; (ii) clase media, desde 3 a 4,5 veces la Línea de Pobreza; y (iii) clase media alta, desde 4,5 a 6 veces la Línea de Pobreza. Vale decir, en la clase media al año 2017 había hogares desde $626.000 mensuales a $1.878.000 mensuales, un rango muy amplio que da cuenta de situaciones muy diversas. Además, la mayor parte de los integrantes de esta amplia clase media pertenecen a la que se clasificó como clase media baja (63% del total de la clase media) y por lo tanto, muchos de ellos están en el límite de la vulnerabilidad.

La Encuesta Bicentenario del año 2019, que citábamos antes, muestra que un 58% de los chilenos se clasifica a sí mismo como clase media. Mencionemos también, en abono a la tesis de que la frase "no son los treinta pesos, son treinta años" es por sobre, todo una buena pieza publicitaria, que la misma encuesta, tomada meses antes del llamado "estallido social", tiene otras respuestas que no son consistentes con esa suerte de acumulación permanente de malestar que habría "estallado" el 18 de octubre, como se sugiere en la publicación ***Hilos Tensados: para leer el octubre chileno*** aludida en el capítulo dos. Un 62% de los encuestados en todo el país señala que su situación es mejor o mucho mejor que la que tenían sus padres. Un 65% afirma que vive en una casa mejor o mucho mejor que la de sus padres (sólo un 8% afirma que es peor o mucho peor). Un 59% afirma que tiene un trabajo mejor o mucho mejor que el que tenían sus padres (sólo un 16% afirma que es peor o mucho peor). Treinta años es, aproximadamente, el tiempo que usamos para comparar una generación con otra y estas respuestas que la gente da a los encuestadores revelan un reconocimiento muy evidente de los progresos que las familias chilenas han tenido en estas tres décadas.

Sin embargo, es claro que la clase media participó masivamente en las protestas de octubre y noviembre de 2019. ¿Por qué lo hizo entonces?

Pensando el malestar

Carlos Peña, columnista de El Mercurio y Rector de la Universidad Diego Portales es, sin lugar a dudas, uno de los más respetados intelectuales chilenos. Autor de numerosas publicaciones, incluso escribió un libro[2] que intenta entregar luces sobre lo ocurrido recientemente en Chile. Antes y después de ello, a través de columnas y entrevistas, ha compartido sus visiones con los chilenos.

Peña ha afirmado que en el origen del malestar están las contradicciones propias de una sociedad que se moderniza y mejora el bienestar material,

2 Peña, Carlos. "Pensar el Malestar: La crisis de octubre y la cuestión Constitucional" Taurus 2020.

pero lo hace pagando el precio de una eficiencia más bien inhóspita, porque se debilitan los vínculos sociales y comunitarios que aligeran la vida y protegen en momentos de soledad. Señala al barrio, a la iglesia y a la familia entre los grupos que se debilitan. Agrega que la protesta brinda la satisfacción emocional de formar parte de un colectivo y se aventura a decir que, tal vez por eso, los movimientos de protesta usan formas escénicas altamente teatrales e incluso carnavalescas. El ejemplo más claro de lo anterior sería la canción del grupo Las Tesis y su reivindicación feminista. Podría creerse, a primera vista, que Peña coincide con algunos diagnósticos de la publicación ***Hilos Tensados*** que analizamos en el capítulo dos. Hay diferencias fundamentales, no obstante. Primero, Peña no desconoce ni minimiza los importantes beneficios que ha traído a los chilenos lo que él llama la modernización capitalista. Segundo, el rector condena, sin ambages, como veremos enseguida, la violencia que se ha usado en las manifestaciones, mientras algunos autores de ***Hilos Tensados*** la justifican, e incluso, hacen apología de ella.

De allí, en un artículo en el Diario El Mundo[3], Carlos Peña salta a decir que "las protestas meramente reivindicativas de índole material han cedido el paso a luchas por el significado".

Apoyado en las investigaciones del sociólogo italiano Alberto Melucci, el filósofo Jürgen Habermas y el sociólogo francés Alan Touraine, enfatiza la dimensión más cultural y menos material de los movimientos que manifiestan su descontento.

Es atractiva la línea de pensamiento de estos autores y la importancia que Peña, siguiéndolos, atribuye a la búsqueda de sentido. Ello es, a mi juicio, especialmente pertinente en los grupos más jóvenes, que claramente en sus manifestaciones dejan ver un marcado elemento generacional que apunta en esa dirección. No sabemos, en cambio, cómo compite esta explicación, especialmente en la clase media, con otra de índole más económica, como es la interrupción del crecimiento de los ingresos de los

3 Peña, Carlos. "El año del malestar" El Mundo, 7 de febrero del 2020.

chilenos como detonante del malestar, que de alguna manera dejamos entrever en el capítulo uno.

Carlos Peña es muy crítico de explicaciones simplistas que han abundado por estos días en el país, como "la desigualdad" o "la injusticia". Las ha calificado de "diagnósticos de matinal". En su crítica ha incluido a periodistas y ha apuntado también a la academia, lo que le ha valido ataques e incomodidades que no lo amilanan. También se rebela frente al buenismo de quienes han ignorado la *barbarie* y la violencia que se ve en las calles, la funa a los valores liberales, el desprecio por el bienestar que los grupos medios han alcanzado en Chile. Carlos Peña dice que se ha convivido sin ambages con la anomia casi total, prefiriendo ver en las manifestaciones un movimiento moral y político, sin atender a que en muchas ocasiones se ha manifestado de una manera bárbara. La anomia, definida como la ausencia total de reglas, es una cuestión que le preocupa profundamente. Afirma, siguiendo a Durkheim, que allí donde todo se percibe como posible, es la insatisfaccón permanente la que espera.

Considera que esta preocupación no está presente en muchos académicos e intelectuales que han caído en una suerte de histeria, definida a lo Lacan, que los lleva a vivir preguntándose ¿qué quiere el Otro de mí? ¿Qué espera de mí? Ese Otro serían las redes sociales, que constituirían una inquisición muda y la fuente de esa histeria.

Pese a estas críticas, no podemos decir que Carlos Peña tenga una visión autocomplaciente de lo que pasa en Chile. Cree que hay una crisis en la forma en que se legitiman las diferencias; que el ideal meritocrático no ha logrado hacerse plausible; que hay una nueva generación anómica como consecuencia del deterioro de los grupos primarios de pertenencia como la familia, la iglesia y el barrio; una pérdida de centralidad del Estado que ya no subordina a los sistemas sociales y denota una crisis de representación; un deterioro de los vínculos sociales; un proceso de subjetivización, especialmente en los jóvenes, que no sabe convivir con la tecnificación. En resumen, un repertorio de problemas que configuran una crisis de la modernización que nos acompañará todavía por un buen tiempo.

La aguda percepción del rector de la UDP proviene, entre otras cosas, del privilegiado escenario que su posición en el mundo universitario le revela. Los estudiantes universitarios han sido protagonistas de las revueltas que empezaron el 18 de octubre en Chile y su actitud, en palabras de Peña, roza en muchas oportunidades con la anomia. Esa reticencia a someterse a reglas de aplicación general, puede obedecer a una suerte de subjetivización absoluta y excesiva de las circunstancias que les toca vivir. Éste no es un fenómeno local: diversos autores nos han advertido acerca de la tendencia de las universidades norteamericanas a consentir a sus estudiantes demandas que abiertamente contradicen la libertad de opinión que debiera ser consustancial a la actividad universitaria. Autores como Greg Lukianoff y Jonathan Haidt han denunciado en el libro ***Malcriando a los jóvenes estadounidenses***[4] la verdadera dictadura del pensamiento que los estudiantes imponen en los campus universitarios con el pretexto de garantizar "espacios protegidos", donde sus sensibilidades no pueden ser "agredidas" por opiniones que no comparten acerca de diversos temas, entre los cuales las cuestiones de género, de raza (y cualquier otra que pueda ser catalogada como "políticamente correcta") ocupan un lugar principal. Los autores alegan que la sobreprotección que implica la aceptación de estas exigencias de los jóvenes, está creando una generación para el fracaso. Una de las alegaciones más importantes de Lukianoff y Haidt (sicólogo social y autor del excelente libro ***The Righteous Man: Why good people are divided by politics and religion***) es que es una muy mala idea decirles a los estudiantes que las palabras son violencia. La violencia es una cosa muy distinta y quienes atribuyen a las palabras u opiniones un carácter violento están cultivando una brutal intolerancia. De allí provienen muchas de las falacias que han llevado a la sobreprotección de los jóvenes y a la formación de una generación que se siente con el derecho a impedir, aun con la violencia, que otras personas tengan opiniones distintas a las de ellos. Esa manera de pensar y actuar es completa y radicalmente opuesta a la libertad de pensamiento y opinión y a la libertad de escoger

4 Lukianoff, Greg y Haidt, Jonathan "Malcriando a los jóvenes estadounidenses: cómo las buenas intenciones y las malas ideas están preparando a una generación para el fracaso" Fundación para el Progreso, 2019.

un proyecto de vida de acuerdo a las propias convicciones y preferencias. En definitiva, contraria a la democracia.

El libro ***Malcriando a los jóvenes estadounidenses*** nos ilustra, además, sobre otra cuestión que será relevante en el desarrollo futuro de nuestra reflexión sobre los hechos de octubre de 2019. Se trata de la invasión de los sentimientos en la política. Los autores nos hablan de una "falacia del razonamiento emocional" que lleva a las personas a confiar siempre en sus sentimientos. Siguiéndola, muchos jóvenes universitarios creen que si se sienten ofendidos, debe haber existido alguna ofensa contra ellos que merece ser castigada y están dispuestos a tomar la justicia con sus manos. Me parece un aporte interesante para entender por qué muchos jóvenes universitarios han decidido que pueden usar la violencia y arruinar la vida de los demás para deshacerse de un sistema "neoliberal" que no aprecian y tampoco comprenden.

La historia y la política

Dejemos por un momento a Carlos Peña y los indudables aportes que ha hecho a la discusión sobre los sucesos de octubre, a partir de contenidos de la sociología, de la sicología social y de filósofos contemporáneos como Jürgen Habermas, y también de su comprensión acerca de la manera de ver las cosas que tienen los jóvenes universitarios. Lo que sigue son visiones, muy lúcidas por cierto, de la historiadora, profesora de la Universidad Adolfo Ibañez y Consejera de Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz y el filósofo y escritor, Arturo Fontaine, quien dirigiera el Centro de Estudios Públicos (CEP) y también puede aportarnos ángulos interesantes sobre el tema a partir de su posición de profesor universitario de filosofía durante varios años.

Lucía es una de las cuatro personas que Andrea Fuchslocher, Ingeniera Comercial de la Universidad Chile, convocó para escribir el libro ***¿Pensamos tan Distinto?***[5] de reciente publicación. Los otros tres autores son el ex

5 Fuchslocher, Andrea, Editora. Ricardo Lagos E., Lucía Santa Cruz, Francisco Zúñiga, Víctor Manuel Avilés, autores "Pensamos tan distinto?" Uqbar, 2020.

Presidente Ricardo Lagos y los reconocidos abogados constitucionalistas Francisco Zúñiga y Víctor Manuel Avilés. El libro es un interesante aporte al debate y no se remite al diagnóstico de los sucesos de octubre, sino que además pretende, a través de los escritos de estos cuatro calificados autores, mostrar soluciones a los problemas que vive el país en distintos ámbitos, incluyendo el constitucional, dados los derroteros que tomó el llamado "estallido social" en el mes de noviembre.

Las ideas desarrolladas por Lucía Santa Cruz en este libro son muy clarividentes y tienen aspectos originales que no han sido suficientemente difundidos hasta ahora. Sus planteamientos, en general, me interpretan, de manera que haré una extensa exposición de ellos hacia el final de este capítulo. Antes de ello, me referiré a las opiniones que el profesor Arturo Fontaine ha expresado en relación a los sucesos de octubre.

Antes de discutir las ideas de Fontaine, aprovechando la mención que hemos hecho del libro ***¿Pensamos tan Distinto?,*** quiero referirme muy brevemente a una frase que usa el ex Presidente Ricardo Lagos al comenzar su explicación sobre lo que ocurrió en nuestro país. Dice que "el estallido social le tocó al Presidente Piñera, pero le pudo haber tocado a cualquiera". No es mi intención discutir los planteamientos del ex Presidente sino sólo esa frase, con ningún afán particular de contradecirlo, sino porque me sirve muy bien para expresar cierto vacío en lo que hemos dicho y visto hasta ahora acerca de los orígenes y causas del octubre chileno.

Incluso los interesantes y profundos análisis de Carlos Peña tienen, a mi juicio, cierta carencia en relación a este punto. Falta introducir un análisis más político, que diga por qué esto ocurrió precisamente durante el gobierno de Sebastián Piñera y no otro, en particular el gobierno de Michelle Bachelet. Si bien no pretendo endosar ni atribuir mis opiniones ni a Lucía Santa Cruz ni a Arturo Fontaine, creo que algunos de sus aportes a esta discusión se hacen cargo, más o menos explícitamente, justamente de este punto. **El estallido de octubre tiene, sin duda, algún componente social, pero es fundamentalmente, un estallido político detonado desde la izquierda.**

Arturo Fontaine es profesor de Filosofía en la Universidad de Chile, y como tal, en sus clases y conversaciones con sus alumnos ha tenido la oportunidad de tratar latamente cuestiones que son atingentes a lo que nos preocupa y tiene agudas percepciones acerca de las motivaciones de personas jóvenes que por autoselección (decidieron y pudieron estudiar Filosofía en la Universidad de Chile) están interesados en el devenir de la sociedad chilena y en la política. Por otra parte, fue durante 31 años Director del CEP, uno de los think tanks más prestigiados de nuestro país. En esa calidad le tocó participar en la gestación y desarrollo de la llamada Encuesta CEP, Estudio Nacional de Opinión Pública que lleva ya más de ochenta versiones consultando a los chilenos sobre diversos temas. Si bien la Encuesta CEP es más conocida popularmente por los estudios que miden la aprobación e intención de voto por candidatos frente a las elecciones presidenciales, contiene además numerosas preguntas acerca de variados aspectos de la sociedad. Es, por supuesto, un bagaje envidiable el que tiene Fontaine para analizar, con perspectiva, las opiniones y preferencias de los chilenos.

En relación a sus testimonios sobre los hechos de octubre hay uno imprescindible. Se trata de su artículo del 24 de octubre de 2019 en la Revista Letras Libres, que tituló **"Asonada en Chile"**[6]. Con los acontecimientos aún calientes, literalmente, Arturo se refiere con lucidez, pero también con la belleza en el uso de la palabra que puede alcanzar uno de los mejores novelistas chilenos, a lo que empezaba a ocurrir en Chile en esos días. Es breve y recomiendo encarecidamente su lectura.

Comienza diciendo: *"Escribo estas líneas tratando de comprender esta asonada que no comprendo del todo, y atribulado por el inmenso dolor causado a la población. La imagen que queda: el fuego. Las llamaradas devorando lo construido a través de muchas generaciones sucesivas, como si el mensaje fuera: quememos lo que existe"*. Se refiere luego a la destrucción del Instituto Nacional, antes de la asonada y después a la del Metro, la red subterránea de transporte de Santiago, que al igual que el Instituto Nacional, era un orgullo para el país.

---

6 Fontaine, Arturo. "Asonada en Chile" Letras Libres, 24 de octubre 2019.

Sigue Arturo Fontaine describiendo los hechos de octubre: *"Hay placer en la aniquilación. El poder desatado de las llamas encarna ese goce prohibido."* Para continuar afirmando: *"Este goce, en este caso, se legitima porque el objetivo es político. Los alumnos que se han consagrado al fuego han sido educados en el convencimiento de que lo que existe es malo desde su raíz y, por tanto, las llamas envuelven el mal".* Aquí está la tesis central de Fontaine sobre lo ocurrido en octubre de 2019, lo que ha repetido en otras oportunidades: este no es un estallido social, es un estallido político. Más adelante en el artículo recuerda que jóvenes violentos se sumaron con sus capuchas, barricadas y destrucción a las marchas estudiantiles de 2011 de las que surgieron los líderes del Frente Amplio (equivalente chileno de Podemos) y las nuevas generaciones del Partido Comunista en nuestro país.

El 2011 gobernaba, por primera vez, Sebastián Piñera, único presidente chileno de centroderecha desde la vuelta a la democracia en 1990. Aquí es donde yo fundo la discrepancia que les señalaba antes de la frase de Ricardo Lagos al iniciar el libro ***¿Pensamos tan distinto?*** No creo que esto le pudo pasar a cualquier presidente. El estallido no tuvo lugar durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que sucedió a Piñera. De hecho, las manifestaciones cesaron y "la calle" fue extraordinariamente condescendiente con un gobierno que bajó el crecimiento promedio a sólo un 1,7%, igual a lo que aumenta la población en un año. Esto significa que el ingreso per cápita se mantuvo estancado, mientras las deudas y las aspiraciones de gran parte de la población aumentaban. Lo que aquí hubo, a partir de octubre de 2019, es un intento de evitar que Sebastián Piñera siguiera gobernando, utilizando para ello la violencia política, no un estallido social que pudo haber ocurrido en cualquier gobierno. Más adelante veremos cómo Lucía Santa Cruz coincide en la naturaleza política de los sucesos de octubre, con un acabado análisis que los relaciona con la frustración que sintió la izquierda más extrema por los magros resultado obtenidos por la Nueva Mayoría, coalición que llevó al poder a Michelle Bachelet rompiendo con la antigua Concertación que había gobernado Chile con mucho éxito.

Arturo Fontaine continúa describiendo en su artículo en la revista Letras Libres, los saqueos e incendios de supermercados que siguieron a los ataques al Metro, a la incapacidad de la policía e incluso, de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Y después de eso, lo que él llama la tercera ola: "en ausencia de voceros y de petitorios, el Frente Amplio y el PC asumen de hecho la vocería de los jóvenes violentos. Dicen: condenamos la violencia pero ella se debe al malestar ciudadano general con el sistema económico. Dicen: es un estallido social. Piñera debe renunciar, afirma el PC. Las objeciones al sistema económico –que justificarían el estallido– son las de hoy, de ayer, de siempre. La violencia de un grupo que sembró el caos, les ha dado la razón. Es lo que sin decir, nos dicen".

Atribuye a Ernesto Laclau[7], sociólogo argentino, la inspiración estratégica que explica la operación: el proletariado ya no es protagonista de la revolución; el capitalismo lo enriqueció y aburguesó. El sujeto revolucionario se debe construir desde un discurso que logre reunir diversas clases descontentas. Una demanda particular, de pronto, se transforma gracias al discurso en una metáfora que aglutina una suma de demandas que, en su conjunto, tienen potencial revolucionario y movilizador.

Continúa Fontaine narrando cómo en Santiago de Chile el Frente Amplio y el Partido Comunista convocan a manifestaciones pacíficas y sus partidarios llenan alegremente la Plaza Italia, la Plaza Ñuñoa y otros lugares con aires carnavalescos, donde participan masivamente jóvenes contrarios al gobierno. "Es curioso, parece serles ajeno el dolor de las personas que llegan a fin de mes con angustia, trabajan duro y progresan poco a poco por su propio mérito, sin robar, saquear, incendiar, ni hacer barricadas y ahora llegan con mucha dificultad a sus trabajos, no encuentran comida en los supermercados quemados y de noche sienten los asaltos". Predomina el entusiasmo que les produce el presentimiento de que ahora viene el gran cambio, la hora del asalto al cielo.

---

7 Ernesto Laclau fue un filósofo posmarxista argentino. Falleció en 2014 y ha ejercido fuerte influencia en políticos chilenos del Frente Amplio ligados al Movimiento Autonomista.

Agrega Fontaine que a los jóvenes "se les suman periodistas y políticos desaprensivos, oportunistas o simplemente, asustadizos que repiten a coro el mismo diagnóstico". Termina el escritor y filósofo chileno señalando: "es imperativo, creo, deslegitimar de veras la violencia política y no validarla asumiendo el equívoco papel de intérpretes y voceros de ella".

Como esto se escribió el 24 de octubre, el autor no alcanzó a ver lo que quizás denominaría "la cuarta ola", que llevó a los políticos chilenos, con la anuencia del Presidente Piñera, presionados por la violencia, a acordar un cambio en el itinerario constitucional de Chile. De pronto, así como la desigualdad era la causa de todos los males, una nueva Constitución pasó a ser la solución de todo.

Tan lúcido y sentido escrito no pasó inadvertido. Como lo relata el profesor de literatura y analista político Sergio Muñoz Riveros, en su libro ***La democracia necesita defensores: Chile después del 18 de octubre***[8]. Letras Libres publicó una carta, que Muñoz califica de odiosa, donde 12 escritores chilenos, entre ellos Jorge Baradit, Nona Fernández, Alejandro Zambra y Alejandra Costamagna, descalificaron moral, intelectual y literariamente a Fontaine "por no ver al pueblo en el movimiento." Hasta le echaron en cara su árbol genealógico. O sea, funa clasista. Y cierta envidia, concluye Sergio Muñoz Riveros. Sospecho que el intelectual mexicano Director de Letras Libres, Enrique Krause, un liberal de tomo y lomo, debe haber fruncido la nariz con la carta estilo soviético-cubano de un puñado de escritores chilenos contra Fontaine.

El libro ***La democracia necesita defensores*** tiene varios aportes interesantes que hacer a la discusión que nos interesa. Más adelante nos referiremos con más detalle a él. Por ahora, destaco que por las mismas fechas en que Fontaine era atacado en Letras Libres, Muñoz Riveros nos llamaba la atención sobre una columna de Carlos Peña[9] donde afirma: "las nuevas

8 Muñoz Riveros, Sergio "La Democracia necesita defensores: Chile después del 18 de octubre" Ediciones El Líbero, 2020.

9 Peña Carlos, "El malestar en la cultura" Columna El Mercurio, 20 de octubre de 2019.

generaciones están huérfanas de orientación (aunque no de aplausos de algunos viejos que compensan así la deuda de su propio pasado). Y así, carentes de orientación ideológica, quedan presas de sus pulsiones. En vez de contar con una orientación ideológica, las nuevas generaciones están convencidas de que su subjetividad, el fervor con que abrazan una causa, la intensidad de sus creencias acerca de la injusticia del mundo, valida cualquier conducta, mirada que es siempre la fuente de los peores excesos. Sin un momento reflexivo entre el impulso y la conducta, cualquier cosa es posible".

Lucía Santa Cruz nos da una perspectiva con la distancia propia de los historiadores de lo ocurrido a contar del 18 de octubre de 2019. Ella dice en el libro ***¿Pensamos tan Distinto?*** que "estos sucesos tienen causas múltiples que incluyen aspectos institucionales, incluidos los constitucionales, políticos, culturales, sociales, demográficos, económicos y aquellos relacionados con la evolución de las ideas y de los climas de opinión". En su escrito en el libro que hemos citado se refiere, de alguna manera, a todos estos aspectos.

Nos recuerda que "las dos revoluciones más importantes de la modernidad, la francesa y la bolchevique, no ocurrieron como meras revueltas contra la miseria, sino que al igual como ha sucedido en Chile, fueron precedidas de grandes transformaciones, crecimiento económico y desarrollo, que cambiaron la estructura social. En ambos casos ello llevó al surgimiento de nuevas clases burguesas enriquecidas, pero privadas de los derechos y del trato que la nueva posición que habían adquirido les permite reclamar, y en consecuencia, a una gran falta de satisfacción con el orden existente y a un reclamo de igualdad ante la ley y en dignidad. En ambos casos el crecimiento fue frustrado por un súbito deterioro de la economía: en Francia por la reiterada falla en las cosechas, excesivo endeudamiento, entre otros, y en Rusia como resultado de la Primera Guerra Mundial".

Hace ver luego que en Chile la transformación de la economía dio lugar también a un ciclo que llevó a rangos de prosperidad sin precedentes. Pese a ello, los cambios positivos tienen también asociadas debilidades,

nos recuerda, y siempre hay consecuencias negativas propias de las modernizaciones incompletas y aparece la llamada trampa de los ingresos medios, que impide a los países seguir con el ciclo positivo cuando las expectativas de mayor bienestar van más rápido que la capacidad de crecimiento. En palabras de la autora: *"cuando el aumento de consumo se transforma de la mera satisfacción de necesidades a la búsqueda de diferenciación identitaria y, por lo tanto, no tiene límites"*.

Luego, la historiadora se refiere a algunos de los efectos de la globalización y la economía de la información y a algo que es particularmente significativo en Chile: grandes y nuevas disfunciones sociales. Sólo por citar un ejemplo: un 73% de los niños nace fuera del matrimonio, lo que da origen a una mono parentalidad, habitualmente ejercida por una mujer, que debe velar por la crianza y la subsistencia de sus hijos.

Y después de relevar estos elementos importantes, Lucía Santa Cruz se la juega con la siguiente tesis: **"El problema mayor y desencadenante de la crisis actual, más allá de todos aquellos factores que puedan responder a fenómenos globales, es que con la conformación de la Nueva Mayoría, que incluyó desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, se determinó que el país debía entrar en un nuevo ciclo económico y político cuyo núcleo central era la reconstrucción de la sociedad a partir de la idea única de la igualdad material de todos a ser impuesta desde el Estado en todos los ámbitos de la vida nacional".**

Esta es una tesis original que no está presente en la mayoría de los análisis que hemos escuchado y revisado hasta ahora que, con la excepción de Arturo Fontaine, pone énfasis en aspectos económicos y sociológicos más que políticos. Hace mucho sentido lo que nos dice Lucía, porque según hemos visto, todos los elementos que configuraron un ambiente propicio para que la violencia de octubre alcanzara los umbrales que alcanzó han contribuido a ese resultado, pero definitivamente éste no hubiera ocurrido, en la dimensión e intensidad con que se presentó, sin articulación política. Esto apunta al centro de lo que ha sido mi preocupación a lo largo de este libro: recoger aportes y visiones distintas sobre los orígenes de estos

sucesos, pero al mismo tiempo, intentar articularlas de una manera tal que conformen un todo creíble, convincente, que logre explicar por qué nos pasó esto en octubre de 2019. Siento que con esta tesis de Lucía Santa Cruz he avanzado un enorme trecho en ese camino. Aún no he llegado al final de él, falta mucho por decir, pero tengo la sensación de que, en esta bifurcación, al tomar el sendero que ha señalado Lucía, me encamino en la dirección correcta. Ya al leer el breve y bello texto de Arturo Fontaine había visto una luz, ahora estoy más confiado en que avanzo hacia una mayor comprensión de nuestro octubre. Falta, eso sí, fundamentar mejor esta intuición y para ello cuento con abundante material.

Lucía Santa Cruz fundamenta ampliamente su afirmación sobre la centralidad de la política en la explicación de los sucesos de octubre, entregando antecedentes sobre la incorporación del Partido Comunista en esta estrategia. Menciona el llamado a aumentar la movilización y la lucha social en el XXIV Congreso de ese partido el año 2011, "dinamizando y propiciando conflictos y rupturas sociales, estudiantiles y territoriales" e incluso señalando que "la profundización de lo militar como elemento componente de la política, es una contribución histórico-estratégica al desarrollo de la línea revolucionaria de los comunistas".

Recordemos que el Partido Comunista no formaba parte de la Concertación, coalición que gobernó Chile durante muchos años. Adicionalmente y en la práctica, pasaron a tener mucha influencia en la política chilena durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet algunos jóvenes, ex dirigentes estudiantiles que se habían destacado en las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2011 y que fueron elegidos diputados en la elección parlamentaria del año 2013, y no pertenecían al Partido Comunista. Es el caso, por ejemplo, de los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric. El año 2017 estos diputados junto a otros personeros formaron el Frente Amplio, coalición que obtuvo veinte diputados y un senador en la siguiente elección parlamentaria. Adicionalmente, personeros de Revolución Democrática, uno de los movimientos que conformaron el Frente Amplio y era liderado por Giorgio Jackson, tuvieron activa participación en el gobierno de Michelle Bachelet, en particular en el ministerio

de Educación. El Frente Amplio, con algunas excepciones, asume hoy en la política chilena frecuentemente posiciones de ultraizquierda.

Volviendo a lo señalado por Lucía Santa Cruz en el libro ***¿Pensamos tan distinto?***, esta nueva alianza, la Nueva Mayoría, que llegó al poder el año 2014 con Michelle Bachelet y que era distinta a la Concertación, decretó que el crecimiento económico no era lo principal, que la pobreza ya estaba controlada y que, por lo tanto, la agenda debía centrarse en la igualdad. En suma, se trató de imponer el igualitarismo ideológico por sobre cualquier otra aspiración que los ciudadanos puedan tener. Como una historiadora que siempre pone atención a las ideas en el devenir de una sociedad, Lucía complementa su análisis político con una descripción de cómo ciertas ideas fueron ganando terreno en la sociedad chilena en el último tiempo. Cito aquí lo que nos dice en el libro ***¿Pensamos tan distinto?:*** "todo cambio importante suele ser anticipado por la instalación de una idea fuerza que, si no es contrarrestada por un análisis crítico por parte de los intelectuales, se transforma en un eslogan con fuerza arrolladora. Y en Chile las universidades, los periodistas, las humanidades en general, lejos de cuestionar la idea, la promovieron y difundieron y no siempre con suficiente rigor u objetividad. Y aquí se instalaron dos ideas centrales: primero, que los pactos, acuerdos y consensos de la transición habían sido una trampa, porque no habían logrado desmantelar el modelo de desarrollo. Segundo, que la desigualdad era el principal problema del país, que ella se había originado como resultado del llamado "neoliberalismo" que aumentaba cada vez más; y que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las premisas fundamentales de este relato no tienen base factual alguna, sino por el contrario, pero en la era en que los datos importan poco, que lo fake es tan válido como lo verdadero, en que las percepciones subjetivas son tan ciertas como la realidad objetiva, en que importan más las emociones en política que la racionalidad, esta idea matriz se instaló con fuerza. La izquierda la promovió, pero un porcentaje importante de la derecha también la hizo suya".

Los efectos de este giro en las ideas fueron nefastos. Se tiñó la interpretación de nuestra historia reciente y se tuvo éxito en desprestigiar, aun entre

sus propios protagonistas, los logros de tres décadas de gobierno que consiguieron una transición a la democracia en forma pacífica con estabilidad política, crecimiento económico y bienestar social. Paralelamente, en el gobierno de la Nueva Mayoría, el crecimiento y el consumo per cápita disminuyeron drásticamente, afectando a una clase media frágil, vulnerable y llena de expectativas, pero con salarios promedio bajos que requerían el esfuerzo de varios miembros de la familia para sostener su nivel de vida. A lo anterior se sumó la inmigración masiva que duplicó en pocos años el número de extranjeros en nuestro país, que venían principalmente a buscar trabajo afectando el empleo y los salarios, como lo hemos documentado en el capítulo uno. El resultado fue una gran masa que mantenía expectativas de mejoría social y económica y no podía satisfacerlas y que además, siente que no es tratada con justicia y dignidad y se hace eco de la propaganda anti empresarial, anti sistema liberal, en contra del lucro y de los empresarios en general. La historiadora agrega a todos estos factores, ingredientes culturales y sociales para una tormenta: jóvenes con más años de educación que sus padres, lo que crea tensiones en la familia, brecha generacional y cuestionamiento de los valores y la autoridad de los mayores. Una meritocracia incompleta por educación pública de mala calidad y herida en su esencia por las desigualdades que son percibidas como el fruto de privilegios inmerecidos y a veces delictuales.

Complemento lo anterior con un dato: en la actualidad cerca del 70% de los alumnos de educación superior son la primera generación de sus familias con estudios superiores. Para estos jóvenes, una referencia muy importante son sus profesores, tanto en las cátedras universitarias, como los que tuvieron en la educación media. Ello ha contribuido a alentar entre ellos opciones políticas de izquierda, especialmente en quienes estudian ciencias sociales. La juventud chilena universitaria tiene así, en su mayoría, posiciones que son antisistema y ha participado, como lo veremos más adelante, en acciones de extrema violencia en octubre del 2019 y los meses posteriores.

Hay más cuestiones tratadas por Lucía Santa Cruz en el libro ***¿Pensamos tan distinto?*** que quisiera comentar e incorporar al análisis de los hechos

de octubre. En particular hay dos que me parecen importantes: el primero es la irrupción de los sentimientos en la política y cómo en el caso chileno esa tendencia ha tenido una influencia decisiva en el actuar de los jóvenes que han sido protagonistas. El segundo, en la idea de la articulación política que ha estado detrás de los sucesos de octubre, su análisis de cómo una nueva Constitución pasó a ser, en tan poco tiempo, la aparente solución para todos nuestros problemas. De ello nos ocuparemos en los capítulos que siguen.

Capítulo 4

Insurgencia, de la primera línea al cambio de la Constitución

"El problema constitucional tendrá que resolverse por las buenas o por las malas".
Fernando Atria

Capítulo 4:

Insurgencia, de la primera línea al cambio de la Constitución

A lo largo de estas páginas hemos venido haciendo un esfuerzo por explicar los extraordinarios sucesos que asolaron a nuestro país a contar del viernes 18 de octubre de 2019. Como hemos dicho, la explicación que algunos dirigentes sociales y políticos hicieron, en el sentido que las manifestaciones correspondían a un "estallido social" que se entiende por la excesiva desigualdad de nuestro país, no es para nada convincente atendidos los hechos y una mínima capacidad de razonamiento. Ello, pese a que esa idea contó con el respaldo acrítico e irreflexivo de los medios de comunicación masiva, en particular la televisión, e incluso fue sostenida en ambientes académicos.

Partimos nuestra indagatoria examinando en el capítulo uno los antecedentes acerca de la situación económica y social de los chilenos, sus ingresos, el acceso a diferentes prestaciones sociales y la desigualdad entre los distintos grupos de la población que estos datos mostraban. Y ellos nos decían que, sistemáticamente, a lo largo de 25 años, desde 1990 a 2014, la evidencia mostraba progresos en todos los grupos sociales. Desde 2015 en adelante, no obstante, el aumento de los ingresos no superó el incremento de la población y las promesas de niveles crecientes de bienestar se vieron frustradas en muchas familias chilenas que, además, tuvieron acceso a menos fuentes de trabajo que estaban siendo fuertemente demandadas por la población inmigrante. Ese proceso de frustración se describe en el capítulo dos que, además, nos muestra con crudeza el trabajo ideológico llevado a cabo por la izquierda entre grupos jóvenes de la población contra lo que se llamó el modelo "neoliberal", al que se culpaba de todos los males, sin reconocer el importante rol que las reformas de libre mercado tuvieron en el mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos, el principal de los cuales fue una drástica disminución de la pobreza.

Insatifechos con las explicaciones que teníamos hasta allí, en el capítulo tres recurrimos a algunos destacados intelectuales chilenos que, desde la filosofía, la sociología, la historia y la política entregaban sus visiones acerca de los orígenes y las causas de estos hechos en diversas publicaciones y entrevistas. Concordábamos, entre éstas, con aquellas visiones que asignaban una alta importancia a las razones políticas para explicar los hechos de octubre. Nos seducía, en particular, la idea de Lucía Santa Cruz, en el sentido que la frustrada experiencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en que gobernó la Nueva Mayoría, tuvo una incidencia decisiva en explicar el estallido de octubre. Ello, porque ese gobierno no tuvo buenos resultados y las fuerzas que lo integraron decidieron entrar, a partir de allí, a una nueva fase de su proyecto en que la movilización social, sin renunciar a la violencia como lo expresó explícitamente el Partido Comunista, habría de tener un rol preponderante.

Este capítulo pretende entregar antecedentes que nos den luz sobre los hechos de violencia desatados a partir del 18 de octubre. Varios de ellos contribuyen a avalar la tesis de la preponderancia de factores políticos en las movilizaciones y manifestaciones. Recurrimos a nuevas fuentes y documentos e intentamos, a través de una relación de hechos, mostrar el rol que esta nueva estrategia política tuvo en los sucesos de octubre. Sergio Muñoz Riveros, profesor de Literatura y analista político publicó en diciembre del 2019 el libro ***La democracia necesita defensores: Chile después del 18 de octubre.*** Allí afirma que: "la ofensiva de violencia y destrucción en gran escala que se puso en marcha el 18 de octubre de 2019 no tiene precedentes en la historia de Chile, y no pudo producirse sin planificación ni coordinación. Desde el primer momento, fue evidente el objetivo de causar el mayor daño posible a los bienes públicos y privados, entrabar la actividad económica y crear un clima de caos y desestabilización".

Sergio Muñoz militó en el Partido Comunista hasta mediados de los 80. Fue prisionero político entre 1975 y 1976 y desde ese año vivió exiliado en Holanda, volviendo a Chile en 1984. En 1993 entró a trabajar al diario La Nación. Es autor de numerosos libros y actualmente columnista del diario La Tercera y El Líbero.

Como lo recuerda el mismo Muñoz Riveros, Guillermo Piedrabuena, ex Fiscal Nacional, afirmó el 7 de noviembre en El Mercurio: "me he formado la convicción de que los actos de violencia ocurridos en el país en estos últimos quince días están precedidos por una planificación bastante estudiada y que no son espontáneos, aun cuando la motivación es el descontento social de vastos sectores (...) existe una planificación de los pasos que se siguen en forma diaria, es decir, las protestas no son espontáneas y tampoco los destrozos y los incendios provocados por algunos grupos ideologizados que tienen directivas y van ordenando los pasos a seguir en las distintas ciudades"[1].

Sergio Muñoz relata en su libro de manera suscinta los sucesos del 18 de octubre y días posteriores, pero se refiere también a algunos hechos previos. Nos recuerda una serie de rayados en los muros de la capital realizados por grupos anarquistas, donde proclamaban la lucha de clases, la guerra social e insultos a la policía; recuerda el atentado explosivo al Metro y al ex Presidente de Codelco, Oscar Landarretche. Luego nos cuenta: "en julio de 2019 un grupo anarquista denominado Cómplices sediciosos/Fracción por la venganza, se había adjudicado el envío de dos paquetes con artefactos explosivos". Uno de estos paquetes fue entregado por Correos de Chile en la 54ª Comisaría de Carabineros en la comuna de Huechuraba y explotó al ser manipulado por un funcionario; el otro fue entregado en la oficina del abogado Rodrigo Hinzpeter, ex Ministro del Interior y fue desactivado por un policía. Ambos tenían el suficiente poder explosivo como para provocar la muerte de varias personas.

Agrega el autor que en septiembre de 2019 aparecieron en las calles aledañas a la Universidad de Santiago carteles de gran tamaño con la hoz y el martillo y la consigna "La revolución comunista es imparable", firmados por la Organización Comunista Revolucionaria, una nueva fracción radical formada recién en septiembre y que se unió a otros grupos que hacían propaganda en los campus universitarios, como los Grupos de Acción Popular (GAP) y las Brigadas Territoriales. Estas organizaciones reivindican un

1 Guillermo Piedrabuena, ex Fiscal Nacional, El Mercurio 7 de noviembre de 2019.

anticapitalismo de choque y el rechazo a la democracia liberal. Más adelante, a fines de noviembre, en medio de las acciones violentas, un gran lienzo con la consigna "La revolución es imparable" se instaló a la entrada de la Casa Central de la USACH.

Sergio Muñoz Riveros cree que estas agrupaciones, actuando en conjunto, se preparaban para efectuar una ofensiva de gran violencia en los días de la Cumbre de APEC, que debía realizarse en Santiago el 16 y 17 de noviembre de 2019. Señala que un video en youtube del Movimiento Patriótico Manuel Rodriguez revela que el plan contra la reunión de APEC iba en serio. Recordemos que los gobernantes de Estados Unidos, China y Japón, entre muchos otros, habían confirmado en principio su asistencia a la reunión.

El autor de ***La democracia necesita defensores*** se refiere también a la existencia de una alianza, que el Ingeniero Mario Waissbluth en un artículo en El Mostrador[2] definiera como narco-anarquista, que habría actuado con gran intensidad en las acciones violentas desde el 18 de octubre.

Francisco Solar y Mónica Caballero en el estallido del 18 de octubre

Recién a fines de julio de 2020, nos enteramos de la formalización de Francisco Solar y Mónica Caballero, acusados de ser autores de los dos atentados realizados en julio de 2019 contra Rodrigo Hinzpeter y la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba y también de la colocación de una bomba en el edificio Tánica en la comuna de Vitacura en febrero de este año. Ambos tienen una larga historia relacionada al terrorismo. Varios años atrás, el Ministerio Público solicitó la detención de 11 personas, entre ellos Solar y Caballero, por la colocación de numerosos artefactos explosivos en la región Metropolitana entre 2006 y 2009. Luego de varios años de investigación se cierra el bullado **Caso Bombas 1**, cuando el tribunal de garantía absuelve a todos los acusados. Francisco Solar recibe $100

2 Mario Waissbluth, "Violencia y violentistas: al borde del precipicio" El Mostrador, 24 de noviembre de 2019.

millones de indemnización del Estado de Chile y Mónica Caballero $80 millones.

Con estupefacción, los chilenos nos informábamos poco tiempo después que el 2 de octubre de 2013, ambos colocaron una bomba en la Basílica del Pilar en Zaragoza y fueron detenidos por orden de un tribunal español el 13 de noviembre de ese año. Los ciudadanos chilenos son condenados a 12 años de prisión luego de un juicio. Cumplido un año de la sentencia, Solar y Caballero conmutaron el resto de su condena a cambio de la expulsión de España. Vuelven entonces a Chile el año 2017, para seguir desarrollando su actividad terrorista, que ahora sabemos, incluye al menos atentados explosivos durante los años 2019 y 2020.

En un artículo publicado el 26 de julio pasado por **El Líbero**[3], se da cuenta de la activa participación de Francisco Solar y Mónica Caballero en actividades que se inscriben en el estallido del 18 de octubre. Un organismo denominado **«Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre»**, publicó un comunicado en solidaridad con Solar y Caballero luego de su reciente detención en el mes de julio. La organización se dedica fundamentalmente a la defensa de los detenidos en las manifestaciones ocurridas del 18 de octubre en adelante. Adicionalmente, los abogados de Solar resultan ser los mismos que presentaron, en noviembre de 2019, una querella en contra del Presidente Piñera «por crímenes de lesa humanidad». Además, la pareja está vinculada con grupos anarquistas que han tenido desde hace algún tiempo al Metro de Santiago como objetivo de sus ataques.

Tras participar en una manifestación el 15 de mayo en las afueras del canal de televisión Mega, Francisco Solar fue detenido por Carabineros. El arresto se produjo por "desórdenes" durante una convocatoria de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre, organización que por esos días dirigía la campaña **"viernes de agitación"**

3 El Líbero 26 de julio de 2020. "Los vínculos de Francisco Solar y Mónica Caballero con el estallido del 18 de octubre".

en un intento por prolongar el clima de violencia vivido en el país a contar del 18 de octubre.

Según informó **El Líbero**, la **Fiscalía Metropolitana Sur** utilizó la oportunidad que daba esta detención para comparar el material genético del polerón que vestía Solar ese día con el de un gorro hallado en un basurero el mediodía del 28 de julio de 2019, que pertenecía a la persona que envió, a través de Correos de Chile, dos artefactos explosivos: uno dirigido a la oficina de Quiñenco del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el otro al mayor de Carabineros, Manuel Guzmán Hernández, en la 54ª Comisaría de Huechuraba.

La audiencia de formalización por estos hechos se llevó a cabo el 24 de julio, ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. La Jueza Mónica Vergara determinó ese día, luego de una larga sesión, la prisión preventiva de Francisco Solar y de Mónica Caballero, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de seis meses.

El apoyo legal a la insurgencia

Solar fue llevado a la 33ª Comisaría de Carabineros de Ñuñoa y lo acompañó en esa oportunidad el abogado Nicolás Toro, quien es parte del **Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo**, que integra la Coordinadora que mencionábamos antes. Este Comité se formó a finales de 2019 y congrega a familiares de presos encarcelados durante los hechos de violencia posteriores al 18 de octubre.

Nicolás Toro y Óscar Castro Vila fueron los abogados a cargo de la defensa de Solar durante la formalización del 24 de julio pasado. Toro ha sostenido que los detenidos en el contexto de las manifestaciones "son presos políticos, en primer término, porque generan acciones de rechazo al modelo neoliberal y que a raíz de lo mismo sufren la prisión".

El abogado también cuestionó en su oportunidad el **Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución** que firmaron la mayoría de las fuerzas políticas del país y ha afirmado que "el Poder Judicial está haciendo parte de la misma política represiva de las policías y del Estado en general frente a las protestas (...)".

La Coordinadora califica a todos los detenidos en los desórdenes que ocurrieron en el país tras el 18 de octubre como "presos políticos". Muchos de sus defendidos están detenidos por delitos comunes como homicidio frustrado, robo, porte ilegal de arma de fuego y municiones o microtráfico de drogas.

Sus abogados se encuentran en campaña por la libertad de todos estos detenidos, y se apoyan con abundante acción en redes sociales. "Desde hace 8 meses el estado de $hile tiene en prisión preventiva a muchxs compás que salieron a exigir dignidad. Se avecinan los juicios y no podemos dejarlxs solxs, quien se olvida de lxs presxs se olvida de la lucha!!!", dice la leyenda de un dibujo que publicaron en redes sociales en el que aparecen barricadas y personas encapuchadas.

Han llamado a la desobediencia y organización contra el toque de queda y manifestaron apoyo a los "presos políticos mapuche" y a la huelga de hambre que mantuvieron 27 presos de origen mapuche y el machi **Celestino Córdova,** condenado a 18 años de presidio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, ancianos que fueron quemados vivos en su vivienda en la región de La Araucanía.

La Coordinadora, al solidarizar con Francisco Solar y Mónica Caballero señaló: *"visibilizamos y repudiamos la persecución política permanente llevada a cabo hacia ambos por levantarse como luchadores sociales anti-autoritarios que, entre otros, hoy están siendo represaliados sistemáticamente de la misma forma que todos quienes desde el inicio de la revuelta se manifiestan en contra del aparato del poder en la lucha por la dignidad".*

En el pasado, la defensa de Francisco Solar y Mónica Caballero estuvo a cargo de abogados de la ONG **Defensoría Popular,** reconocida por tener

un historial en la defensa de personas acusadas de violar la Ley Antiterrorista, por ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos.

En 2015 esta organización sufrió una escisión, por lo que existen dos agrupaciones, una que usa el nombre **Defensoría Popular** y la otra **Defensa Popular.** Ese año los miembros fundadores expulsaron al abogado Rodrigo Román Andoñe, quien defiende al adolescente que fue el primer formalizado por incendiar el Metro de Santiago; y también ha tenido a su cargo la representación de Manuel Olate Céspedes, un militante comunista chileno requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC; a los comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay; y a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco.

El 12 de julio de 2020, el ala que se identifica como **Defensa Popular** declaraba: "Hoy más que nunca, ante el avance de las políticas represivas del Estado de Chile, es sumamente importante que los espacios de defensa popular se expandan, y que no cesen por falta de recursos o poco compromiso". Ambas organizaciones, entonces, tienen como objetivo primordial la defensa de los detenidos a raíz de los desórdenes en protestas o incidentes ocurridos tras el 18 de octubre.

Los abogados de la **Defensa Popular** también tienen a su cargo la defensa de Sergio Martín Olivares Urtubia, ex mirista que quedó en prisión preventiva después de disparar a sangre fría a un guardia de ServiEstado.

Anarquismo y los ataques al Metro

Cuando Solar fue detenido en la protesta llevada a cabo en el canal de televisión Mega, en el portal **Contrainfo** se publicó una nota titulada "Detuvieron al compañero anarquista Francisco Solar", agregando una consigna: **"saquen sus manos de nuestro compañero 'Cari', libertad ya!". Contrainfo** es el portal donde apareció, en su oportunidad, la adjudicación de los atentados contra Rodrigo Hinzpeter y el Mayor de Carabineros, Manuel Guzmán.

En ese comunicado, firmado por el grupo**"Cómplices Sediciosos/Fracción por la Venganza"**, acusan a Hinzpeter de "desatar la represión a comuni-

dades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera".

De Manuel Guzmán dicen que era el "encargado de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia Lopéz durante los enfrentamientos callejeros de septiembre", y apuntan que cualquier comisaría es un "objetivo válido". Agrega el texto: "la sociedad policiaca y carcelaria es una realidad. Cualquier acción en su contra es completamente válida".

En la formalización a Solar y a Caballero por la Fiscalía Metropolitana Sur, los fiscales señalan que las bombas "estaban diseñadas para implosionar con una diferencia horaria que permitiera que producida la primera detonación, una vez que concurriera el personal policial y estando ellos trabajando se produjera la detonación del segundo artefacto **y provocar así la muerte de algún funcionario policial".**

Una investigación realizada por **El Líbero** en octubre pasado, da cuenta de que el Metro de Santiago era un blanco para los grupos anarquistas o violentos, al menos desde el año 2014, pues las campañas en redes sociales para eludir el pago de la tarifa del transporte existen desde entonces. Además, destaca la explosión de un artefacto explosivo en el Subcentro de la estación Escuela Militar, ocurrido el 8 de septiembre de 2014.

"Evade", "okupa", "rompe el Metro", "daña", "saquea", "odia y viva la destrucción", son algunas de las expresiones violentas que aparecían rayadas en las paredes entre 2014 y 2018, así como la A anarquista, dibujada junto a la hoz y martillo comunista. En la misma página de **Contrainfo**, además de la adjudicación del atentado de Hinzpeter, hay un posteo del 7 de octubre de 2019 con la imagen de una micro envuelta por el fuego y el llamado a una semana de sabotaje y evasión del transporte público. **Contrainfo** publica abundante material llamando a atentar contra los principales medios de transporte de la región Metropolitana e incluso, adjudicándose ataques incendiarios contra el Metro y buses del Transantiago.

El 18 de octubre

La violencia desatada el 18 de octubre no tiene precedentes en nuestra historia, como señala Sergio Muñoz. Según información entregada en el libro ***Nuestro octubre rojo, orígenes de un estallido social,*** editado por El Líbero[4] el Metro fue el blanco principal el primer día. El domingo 20, la empresa reporta que 80 de las 136 estaciones presentan daños. El día 24 hay un balance más exhaustivo que revela la existencia de 118 estaciones dañadas y 35 incendiadas, de las cuales 7 están completamente destruidas. Sólo 18 estaciones no tienen perjuicios. Diez trenes presentan daños de consideración. El transporte sobre tierra no escapa a la furia de los violentos. A fines de octubre se reportan 2.049 buses vandalizados, 25 quemados, 12 terminales de buses con daños y 103 conductores heridos de diversa consideración.

Otro blanco preferente, con la clara intención de afectar la cadena de abastecimiento, fueron las cadenas de supermercados. SMU -propietario de la cadena Unimarc-, reportaba 150 locales afectados por incendios y saqueos. La cadena Líder informaba de 125 locales quemados o dañados. A la acción de los violentos se sumaron grupos de saqueadores que irrumpían en los supermercados atacados con el objeto de robar. Además de la probable presencia de los narco-anarquistas que denunciaba Waissbluth, la masividad de los saqueos lleva a pensar que grupos más amplios de la población se sumaron a estos. Personas que llegaban en automóviles de distintos precios, ingresaban a los locales y echaban en la maleta televisores y otros bienes de consumo durable llevaron a decir al Director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica, Eduardo Valenzuela, que eran chilenos medios los que estaban saqueando, corrigiendo así al periodista del diario La Segunda que le preguntaba por el lumpen que participaba en los saqueos.

Carabineros, por su parte, informaba de 947 funcionarios heridos al 31 de octubre y menos de un mes después, el 21 de noviembre, según lo

4 Cristián León, "Una Hidra de mil cabezas" en "Nuestro Octubre Rojo, Orígenes de un Estallido Social". Ediciones El Líbero, 2020.

informado a Radio Biobío por su General Director, Mario Rozas, la cifra superaba los 2.000, 52 de ellos impactados por balas, varios quemados con ácido y otros líquidos y muchos fracturados o policontusos. A la misma fecha, había 531 vehículos policiales y 125 cuarteles atacados. Además, se contabilizaban 229 edificios públicos dañados, 181 entidades bancarias, 30 estaciones de servicio y más de 600 locales comerciales de otros giros con daños de diversa consideración. Más tarde, en el mismo mes de noviembre, la institución informaba de 154 cuarteles atacados y 2.171 carabineros heridos.

Es evidente para cualquiera que vivió estos hechos en nuestro país, que el gobierno del Presidente Piñera no fue capaz de resguardar el orden público durante los dos meses que siguieron al 18 de octubre. Una de las razones para este fallo es que la estrategia de quienes se le enfrentaban fue mezclar las masivas manifestaciones de protesta, que comenzaban de manera pacífica e incluso con un ambiente festivo y carnavalesco, con la acción de grupos insurgentes que actuaban con mucha violencia y que tenían como objetivo impedir el normal funcionamiento de la ciudad. Un ejemplo característico de esta estrategia era la quema de buses y otros vehículos en arterias principales por donde debían transitar estas marchas y manifestaciones. Esta acción paralizaba el tránsito y obligaba a quienes se trasladaban hacia o desde sus lugares de trabajo a soportar larguísimas jornadas, en que debían esperar locomoción o incluso caminar largas horas para llegar a sus casas. Las grandes manifestaciones convocadas en la Plaza Italia y varias en la Plaza Ñuñoa, servían perfectamente a ese propósito. Un rol central en esta estrategia la tuvo la llamada Mesa de Unidad Social, compuesta principalmente por organizaciones dominadas por el Partido Comunista, encargada de convocar a movilizaciones y que coincidieron con los días de mayor violencia en distintas ciudades de nuestro país.

La Mesa estaba integrada, entre otras organizaciones, por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF; el Colegio de Profesores; la Confusam (trabajadores de la salud); No+AFP; y la Confech (estudiantes de educación superior). Convocó a paros o huelgas los días 12, 21 y 26 de noviembre, las dos últimas, después

de alcanzado el Acuerdo por la Paz Social, la Justicia y una Nueva Constitución, el cual fue rechazado por la Mesa. La dinámica de estas jornadas era similar. La convocatoria fracasaba en su intento de paralizar las actividades nacionales, dado que algunas de las entidades convocadas son organismos de fachada con pocos asociados, o bien sus afiliados, por distintas razones se pliegan sólo parcialmente al paro. En este último caso están los profesores y trabajadores de la salud, que acuden en gran número a trabajar y en otros casos organizan turnos éticos. No+AFP no es una organización de trabajadores, la CUT tiene escasos afiliados en el sector privado y sólo la ANEF logra paralizar a un número importante de personas. Aunque, con excepciones como el Registro Civil o los servicios de salud, la paralización de empleados públicos por un día no afecta de manera grave las actividades nacionales.

Las convocatorias a paro de la Mesa de Unidad Social fracasaban en su intento de paralizar el país. A modo de ejemplo, recuerdo lo que sucedió el martes 26 de noviembre en que asistí a una reunión en el centro. Santiago funcionó normalmente. A las cinco de la tarde, no obstante, empezaron a congregarse jóvenes en la Plaza Baquedano y hubo una marcha de empleados públicos que congregó a seis mil personas en la Alameda Bernardo O'Higgins.

El problema era lo que venía después: junto al atardecer empezaban violentas manifestaciones en diversas ciudades del país, incluyendo saqueos, barricadas, ataques a cuarteles policiales, destrucción de bienes públicos y privados. La Mesa de Unidad Social lograba, de esta manera, esconder su escasa capacidad para paralizar el país por la vía de manifestaciones pacíficas, creando el caos y el miedo generalizado y atribuyéndolas a la protesta social, cuando la verdad es que las convocatorias a movilizarse eran, en los hechos, llamados al vandalismo, la destrucción y la violencia y tenían como objetivo la desestabilización del gobierno legítimamente constituido. Los llamados de dirigentes del Partido Comunista, incluido su Presidente, Guillermo Teillier, a la renuncia del Presidente Piñera desde los primeros días de la movilización son una prueba más de que ésta era una estrategia de insurgencia.

En definitiva, más allá de la intención de los manifestantes, la violencia y la protesta social se nutrían la una de la otra y esa es la razón por la cual muchos políticos de izquierda fueron ambiguos en la condena de la violencia. Vieron, digámoslo, una oportunidad caída del cielo para debilitar al gobierno de Piñera hasta el límite, creyendo capitalizar en su favor el descontento.

Orden público y derechos humanos

Para muchos fue sorprendente la poca capacidad del gobierno para mantener el orden público. En su defensa hay que decir que las fuerzas policiales se encontraban cansadas y muy disminuidas en su capacidad de represión por diversas razones. Una era la magnitud de los ataques violentos, mezclada con lo masivo de las manifestaciones, todo lo cual dificultaba la labor policial, tal como lo hemos descrito más arriba. Pero otro factor que inhibía el actuar de Carabineros era la pérdida de prestigio de la institución, que se había visto envuelta desde hace un par de años en una serie de escándalos y actuaciones, incluso delictuales, de algunos de sus mandos. Uno fue un millonario fraude al Fisco que un grupo de oficiales realizó por el simple expediente de seguir entregando beneficios a personas fallecidas con pagos que eran cobrados por otras personas. Otro, la operación Huracán, donde altos oficiales falsificaron pruebas para inculpar a comuneros mapuche de atentados terroristas, y por último, el caso de Camilo Catrillanca, que fue baleado por la espalda por oficiales de la institución en un operativo para recuperar un vehículo robado. Todas estas acciones, en que el mando de Carabineros no entregó información oportuna e incluso la ocultó, terminó con la remoción de dos de sus Generales Directores y una baja considerable de la valoración de los chilenos por una institución que en el pasado contaba con alta aprobación, según puede verse en cualquier serie de encuestas.

En ese ambiente de desprestigio y llamado a usar la fuerza para mantener el orden público, Carabineros fue objeto de una implacable fiscalización de organismos de derechos humanos y de otros activistas disfrazados bajo ese manto que, según consta de varias imágenes y testimonios, formaban

parte de quienes agredían o insultaban a Carabineros para después presentarse como supuestos "observadores imparciales". A ello se agrega el hecho que periodistas de algunos medios de comunicación daban muchas veces una cobertura desmesurada al uso de violencia por parte de Carabineros, en relación a la cobertura de agresiones de manifestantes a estos, que causaron un gran número de víctimas a su personal, de acuerdo a los datos que hemos entregado antes en este capítulo.

Si bien siempre hay que estar atentos a las observaciones de organismos serios en materia de derechos humanos, pues su respeto es un imperativo en una democracia, también debe considerarse que el cuestionamiento permanente a la acción de la policía, sin atender a la proporción y magnitud de la fuerza que están enfrentando, lesiona su capacidad para resguardar el orden público.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dirigido por el abogado Sergio Micco, fue un actor importante en esos días. El INDH, desde su dirección superior, respondió al llamado del gobierno que lo convocó para que cumpliera su labor. Micco intentó una conducción leal de la institución: leal a su mandato de defender los derechos humanos y de hacerlo sin una intencionalidad política, considerando que el país es conducido por un gobierno democrático y decidido a respetar los derechos humanos. No siempre lo logró, dado el alto grado de politización de los funcionarios de ese organismo, apoyados por algunos de sus consejeros. Así, por ejemplo, el 3 de noviembre, Sergio Micco declaró en T13 que no habían existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno desde el 18 de octubre, aunque sí se habían producido violaciones a ellos en actuaciones de la policía. Esto provocó una reacción de funcionarios del servicio que lo acusaron de traición y un par de días después matizó sus dichos diciendo que sí había violaciones graves y que no se podía descartar que fueran sistemáticas. En un incidente con Carabineros, Jorge Ortiz Moraga, funcionario del INDH que cumplía funciones como observador, además de militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) -que practicó el terrorismo desde la década de los 60 en el país-, acusó haber sido baleado en sus piernas con balines, incluso

mostrando uno. Se le constataron lesiones leves y el balín que tenía en su mano, un balín de acero, no correspondía al utilizado por Carabineros. Varias fotos aparecidas en distintos medios han captado a manifestantes disparando balines, con hondas y escopetas. Ortiz es uno de los tantos funcionarios con militancia de izquierda que hay en el INDH. Imágenes de televisión mostraron durante las protestas cómo algunos de ellos, que usaban chalecos amarillos y distintivos del INDH, se sumaban a las protestas gritando insultos a Carabineros.

Otra situación controvertida fue la de lesiones oculares. Algunos manifestantes fueron heridos con perdigones antidisturbios disparados por Carabineros, varios otros sufrieron daños oculares de diversa consideración. De hecho, la prensa internacional informaba de varios cientos de heridos en los ojos, sin especificar de qué tipo de lesiones se trataba y mostrando imágenes de personas que habían perdido el ojo como consecuencia de un perdigón o balín. Una amplia acción de propaganda, con personas que se fotografiaban con una mano tapando un ojo, dio la impresión de que se trataba de una situación generalizada en que Carabineros disparaba balines a los ojos a los manifestantes. Ante la petición de un particular, efectuada de acuerdo a la Ley de Transparencia, el INDH debió informar en detalle sobre la materia por Oficio Ordinario 1014 del 2019. De acuerdo a ese informe, a fines de octubre se registraban 232 personas con lesiones oculares, de las cuales había 7 casos de pérdida ocular, 1 de ellos por acción de un perdigón. Al tener acceso a esta información la difundí por twitter. El twitter tuvo más de 200.000 visualizaciones y provocó gran polémica en redes sociales. Desde el interior del INDH y en la izquierda más radical se volvió a activar una campaña contra su Director, Sergio Micco, simplemente por decir la verdad. Tuve la oportunidad de conversar con él en esos días y me confirmó la información del oficio y los problemas que tuvo por la virulenta reacción en su contra. Más adelante, el INDH entregó información al 31 de diciembre de 2019 que daba cuenta de 359 lesiones oculares, de los cuales 21 habían tenido la consecuencia de estallido o pérdida de la visión. El resto de las lesiones eran de diversa consideración, incluyendo irritación de los ojos, cuestión a la que desgraciadamente los chilenos de muchas edades hemos estado expuestos por efecto de gases

lacrimógenos antidisturbios. No pretendo minimizar el drama de las personas que perdieron la visión, ni tampoco descarto actuaciones condenables de Carabineros, pero la situación fue muy distinta a la que la prensa internacional, y ciertos medios en Chile nos mostraban: más de 300 personas con pérdida de un ojo por perdigones disparados por Carabineros. Una completa falsedad.

Otra actuación cuestionable del INDH fue por su respaldo a diversas denuncias que resultaron falsas o no fueron comprobadas. Torturas en una comisaría en la estación Baquedano del Metro fueron descartadas por la justicia y motivaron el airado reclamo del Director de la Policía de Investigaciones de Chile contra el INDH. También se descartaron torturas y violaciones supuestamente efectuadas al interior de comisarías, que habían sido denunciadas en los medios de comunicación con amplia cobertura, ya que las cámaras de vigilancia demostraron que éstas no existieron y fueron un invento de los denunciantes.

Otro aspecto controvertido fueron los informes de las instituciones internacionales de derechos humanos. Entre ellas puede mencionarse a Human Rights Watch y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que dirige hoy Michelle Bachelet. Hay que señalar que el gobierno del Presidente Piñera entregó todas las facilidades del caso a estas instituciones. Ellas emitieron informes denunciando violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas de carácter grave. Sin embargo, fueron cautos en relación a su calificación de sistemáticas, quizás teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad de la fuerza empleada para reprimir acciones violentas, que comentamos más adelante. Ambas instituciones reconocieron la colaboración del gobierno, aunque fueron más críticos con Carabineros en relación a su lentitud para acoger sus recomendaciones.

El caso de Amnistía Internacional es distinto. Ésta ha ido evolucionando hacia un organismo de fachada del Partido Comunista y organizaciones de extrema izquierda, de manera que no tiene credibilidad. La Mesa de Unidad Social, convocante a las manifestaciones que desataron la violencia, tenía entre sus integrantes, según su página web, a Amnistía Internacio-

nal Chile. Luego que ello fue denunciado, cambiaron la información, para incluir a los Funcionarios de Amnistía Internacional Chile. Pretendían, así, erigirse como observadores del respeto a los derechos humanos de los manifestantes que atacaban con violencia a Carabineros.

Para terminar con este tema, tal como lo discutíamos en el capítulo dos, el reproche a la actuación de la fuerza policial, o derechamente la acusación de violaciones a los derechos humanos, debiera estar relacionado con el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza en su misión constitucional de mantener el orden público. Las estadísticas de ataques y lesiones sufridas por Carabineros durante los desórdenes ocurridos desde el 18 de octubre que entregamos antes, demuestran que estos fueron equivalentes, o incluso en ocasiones superiores, a las lesiones sufridas por civiles informadas por el propio INDH en sus informes oficiales.

La primera línea

La Plaza Baquedano y sus alrededores se convirtieron en un hito simbólico en la batalla por el control de la ciudad de Santiago. Como se relata en el capítulo dos, las fuerzas insurgentes se percataron, después del 18 de octubre, que existía la posibilidad de desafiar a la policía a una escala no vista hasta allí. Se pasó así desde los desórdenes y barricadas en un barrio para ir intentando paralizar con una estrategia de guerrillas en distintos lugares de la ciudad, a una nueva fase que consistía en disputarle derechamente a Carabineros el control del orden público en puntos neurálgicos.

Los encargados de esta misión fueron un grupo de jóvenes, la llamada primera línea, que muy pronto fueron idealizados por periodistas "progresistas" y la izquierda del barrio alto, que cultivaron y transmitieron una imagen romántica de quienes a piedrazos y palos impedían a sus compatriotas realizar sus actividades habituales, causándoles un inmenso daño. Como nos relataba Arturo Fontaine en su escrito en la revista Letras Libres, parecía haber total insensibilidad de estos jóvenes y de quienes los elogiaban, hacia quienes perdían sus fuentes de trabajo y sufrían graves perjuicios económicos por esas acciones que los ponían en situación muy

precaria, como los pequeños comerciantes de los alrededores de lo que se llamó la Zona Cero.

Hoy día sabemos algo más de quiénes son los integrantes de la llamada primera línea. Una encuesta realizada por estudiantes de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile los días 8, 18, 22 y 29 de noviembre, en la denominada Zona Cero[5], caracteriza a quienes cada viernes se tomaron la Plaza Baquedano, a la que han pretendido bautizar con el nombre de "Plaza de la Dignidad".

Se equivocan quienes creen que estos jóvenes eran en su mayoría personas de desmedrada posición social y económica, que claman por su desesperada situación. La Encuesta Zona Cero, del Núcleo de Sociología Contingente que mencionábamos recién, indica una cosa muy distinta. Las comunas de procedencia de quienes se manifiestan allí son mayoritariamente, en este orden: Santiago, Ñuñoa, Puente Alto, Maipú, La Florida y Providencia. Un 55% de ellos había cursado estudios superiores. Un 32% tiene educación superior completa e incluso, un 10,4% estudios de posgrado.

Esta composición, que parece bastante sorprendente a primera vista, nos dice que en los episodios de violencia de los días viernes en la Plaza Baquedano, los que se enfrentaban eran fundamentalmente jóvenes de clase media con formación universitaria, encapuchados, contra efectivos de Carabineros de Chile, la mayoría de ellos más modestos que sus contrincantes. Aunque no he examinado los aspectos metodológicos de la encuesta, como su representatividad, no creo que la realidad sea demasiado distinta a la que se muestra en este estudio.

Resulta, por lo mismo, impactante la forma en que muchos se refieren a Carabineros y el trato que se les da. Como sabemos, luego del 18 de octubre aparecieron rayados en todas las ciudades de Chile, donde concertadamente se les denigra e insulta y se llama directamente a matarlos. El uso de

5 "Encuesta da a conocer quiénes son y qué piensan los manifestantes de Plaza Baquedano" T13.cl 8 de enero de 2020.

expresiones que vienen de otros países para denostarlos, como ACAB o Yuta[6], demuestra también una acción planificada destinada a menoscabar la institución. Hay bastante irresponsabilidad, y también clasismo en la forma en que muchos se han referido a Carabineros a partir del 18 de octubre.

Más allá de situaciones en que se pueda haber utilizado fuerza desmedida o derechamente abuso, y que deben condenarse, la gran mayoría de los Carabineros cumple una labor encomiable, que tenemos que proteger de quienes intentan sacar dividendos políticos o de otra índole a costa de ellos, que arriesgan su vida por cumplir su misión de resguardar el orden público. Es evidente que la debilidad institucional, por las situaciones que hemos relatado, contribuye a que este injusto trato no sea rechazado con más decisión por la ciudadanía.

Termino este tema refiriéndome a una situación que claramente no es coincidencia. A contar del 18 de octubre los rayados en los muros e insultos callejeros tuvieron dos blancos preferentes y casi excluyentes: Carabineros y el Presidente Sebastián Piñera. Pareciera evidente que la asonada insurgente que se inició en Chile el 18 de octubre tenía por objeto debilitar, y en lo posible, deponer al Presidente Piñera. Para lograrlo era fundamental subvertir el orden público, y atacar a Carabineros era clave.

El renuncio de la política y proceso constituyente en tres pasos

Según relata Lucía Santa Cruz en el libro ***¿Pensamos tan distinto?*** como recordábamos en el capítulo anterior, el 12 de noviembre fue el día más violento desde el 18 de octubre. Esa mañana, todos los partidos de oposición, desde el Comunista a la Democracia Cristiana, firmaron una declaración pública a favor de una Asamblea Constituyente, afirmando que la "ciudadanía movilizada", la calle (no los electores que conforman la ciudadanía tradicional), "había corrido el cerco de lo posible" y que requeríamos una nueva Constitución "emanada" de esa misma "ciudada-

6 ACAB es un acrónimo de "All cops are bastard"; Yuta es utilizado en Argentina para nombrar una policía falluta, traidora, desleal.

nía movilizada" para "establecer un nuevo modelo político, económico y social y que "el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos". En suma, la soberanía popular ya no residía en la Nación, sino en aquellos que se movilizan violentamente, y los problemas no se resuelven por medio de la deliberación democrática, sino por la vía de los hechos consumados.

Esta declaración constituyó, a mi juicio, un verdadero golpe de Estado, pues los firmantes, amparados en la violencia en las calles que no lograba ser controlada por el gobierno, sometieron a la autoridad, que renunció a ejercer el poder del que estaba investido. El gobierno llamó a los partidos políticos a lograr en un máximo de 48 horas -sin dar mayores explicaciones de por qué ese plazo- un acuerdo político que incluía un proceso constituyente para elaborar una nueva Constitución. Vale decir, con algún rezago, se cumplía lo expresado por el abogado Fernando Atria, quien el año 2013 en una entrevista en el diario electrónico El Mostrador[7] había señalado que el problema constitucional tendría que resolverse por las buenas o por las malas.

Era la última fase de la asonada insurgente, que, si no lograba sacar de su cargo al Presidente Piñera utilizando para ello la fuerza, al menos lo vencería haciéndolo entregar la Constitución. Fue un renuncio de la política, del gobierno y de los partidos políticos representados en el Congreso, cuyos titulares ejercían hasta ese momento el poder constituyente. Unas pocas voces se levantaron para denunciar este intento de golpe, que evidenció la falta de convicción democrática de la centroizquierda chilena que, con poquísimas excepciones, estuvo dispuesta a colaborar para sacar de su puesto al Presidente elegido democráticamente hacía menos de dos años. Si no cayó Piñera fue por la vía de llamar a un acuerdo nacional, entregando la Constitución. Vale la pena mencionar aquí que los ex Presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos acudieron de inmediato al llamado que les hizo el Presidente Piñera para concurrir a La Moneda a los pocos días del

7 "El problema constitucional tendrá que resolverse por las buenas o por las malas" Entrevista a Fernando Atria de Alejandra Carmona. El Mostrador, 23 de abril de 2013.

estallido de la violencia. También que unos pocos políticos de oposición denunciaron el uso de la violencia para lograr objetivos políticos, entre los que recuerdo a Oscar Guillermo Garretón, a Jorge Burgos en su columna en La Tercera que tituló "Gobierno Legítimo", a Mariana Aylwin y Soledad Alvear en declaraciones a medios de comunicación, a Andrés Velasco en una columna en El Mercurio del 3 de noviembre que llevaba por título "Fin a la Violencia Ahora" y a Juan Gabriel Valdés, quien ante la posición ambigua frente a la violencia de la directiva del PS, publicó junto a 80 militantes de ese partido una carta condenando sin condiciones la violencia. Muchos fueron ambiguos o silentes frente al atentado a la democracia que se inició el 18 de octubre, de manera que hay que destacar a quienes levantaron su voz en esos días.

Creíamos que esto no podía suceder en Chile, pensando siempre en una suerte de excepcionalismo chileno en el continente, pero la historia reciente de Latinoamérica nos dice que cuando la izquierda está gobernando y pierde las elecciones, desconoce los resultados y se eterniza en el poder. Así lo hizo Chávez y luego Maduro en Venezuela y después, dos veces, Evo Morales en Bolivia: primero, el 21 de febrero de 2016 cuando perdió el plebiscito convocado para que la ciudadanía se pronunciara sobre un cambio a la Constitución y desconoció el veredicto popular apelando al Tribunal Constitucional por "una violación a su derecho humano a presentarse a la elección presidencial" y una segunda vez, cuando, computados un 90% de los votos de la elección que nunca debió realizarse, interrumpió el escrutinio porque no obtenía la ventaja de 10 puntos necesaria para ganar en primera vuelta. Al día siguiente apareció ganador por un margen ligeramente superior al 10%, evitando así ir a la segunda vuelta que, según todas las encuestas, perdía contra Carlos Mesa. Ningún pudor para robarse las elecciones. Sabemos que finalmente tuvo que dejar el poder afectado por una revuelta.

Esta mala práctica de la izquierda, desgraciadamente, se trasladó a Chile. La izquierda, amparada en las protestas y desórdenes en la ciudad a contar del 18 de octubre, apoyó un movimiento insurreccional. Este movimiento insurgente tuvo dos vertientes: la primera fue la dura, representada por el

Partido Comunista y la mayoría del Frente Amplio. La segunda vertiente consistía en derrotar a Piñera haciéndolo claudicar de su potestad presidencial, y es la que llevaron adelante los partidos de oposición.

Con un rezago de más de cinco años, finalmente se cumplió la máxima de Fernando Atria y se inició, por las malas, un proceso constituyente para cambiar la Constitución.

La estrategia para lograrlo puede resumirse en un tuit del abogado constitucionalista Jaime Bassa, uno de sus autores intelectuales. Bassa, que incluso intentó objetar mediante un recurso judicial las facultades del Presidente Piñera para decretar Estado de Emergencia en medio de la revuelta, revelaba en las redes sociales la estrategia para cambiar, por las malas, la Constitución que nos regía. ¿Qué decía su *tweet*?: **"propuesta de proceso constituyente en tres pasos: movilización social, plebiscito y asamblea constituyente".**

Examinemos ahora qué es exactamente lo que pretendía esta estrategia ya revelada por Bassa. El Capítulo 15 de la Constitución establece los mecanismos para reformarla, que, en lo sustancial, requerían dos tercios de los parlamentarios. Esta regla mayoritaria no es excepcional en materia constitucional a nivel mundial; la Constitución chilena, de acuerdo a estudios comparados realizados por Libertad y Desarrollo[8], no es de las consideradas pétreas, sino que admite un razonable grado de cambio. La prueba de ello es que ha tenido más de 200 modificaciones desde 1980.

Pues bien, lo que Bassa planteó y la oposición tomó, es un camino para eludir el capítulo 15 de la Constitución. La forma de hacerlo, como dice el tuit, era la "movilización social", que en este contexto es un eufemismo para decir violencia política hasta obligar al Presidente a enviar al Congreso un proyecto de ley que autorice un plebiscito que haga posible una Asamblea Constituyente. Eso se consumó en la madrugada del 15 de no-

8 "Asamblea Constituyente: ¿La salvación de Chile? Libertad y Desarrollo, 17 de diciembre 2012.

viembre en el Acuerdo por la Paz social, la Justicia y una Nueva Constitución, y si bien se ha alabado a quienes participaron en ese acuerdo por encontrar una salida política a la crisis que vivía el país -con lo que uno pudiera concordar o no con la información que tenía disponible-, no puede olvidarse que se hizo bajo la amenaza de la violencia.

Antes de concluir este capítulo, les cuento una anécdota que me relató el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia de Bolivia que obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones. Evo Morales logró torcer la mano al Congreso boliviano pasando por sobre los quórums requeridos para aprobar una reforma constitucional. Convocó a una masiva concentración en las afueras del Congreso, cerró por fuera con candados las puertas del edificio y a través de alto parlantes un locutor iba narrando a la multitud cómo votaban los parlamentarios. Estos escuchaban los griteríos de la multitud y también disparos, que sonaban cada cierto rato. Óscar Ortiz no cambió su voto, contrario a la iniciativa de Evo, pero otros senadores sí lo hicieron y el dictador boliviano logró su objetivo. Esa es una manera de entender la expresión "movilización popular" en el contexto de nuestro análisis.

En definitiva, si prospera la alternativa Apruebo en el plebiscito convocado después de los acuerdos del 15 de noviembre, nuestra clase política habrá reemplazado una Constitución que según muchos tiene un origen ilegítimo por no haberse elaborado en democracia, por una que nació bajo la amenaza de la violencia. Lo peor de todo es que se hará sobre la fachada de un "Acuerdo por la Paz". La legitimación de la violencia como instrumento de acción política es lo más grave de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos tiempos. La izquierda y la Democracia Cristiana tendrán que discutir alguna vez en sus instancias internas, el daño que sus decisiones u omisiones han causado a la democracia chilena.

Capítulo 5

La argamasa de la revuelta

"El espíritu revolucionario se nutre de la ignorancia del porvenir".
Raymond Aron

Capítulo 5:
La argamasa de la revuelta

En el capítulo anterior, **"De la primera línea a una nueva Constitución"**, narramos cómo fue la transición desde la asonada insurgente que se levantó en las principales ciudades de Chile a partir del 18 de octubre, hasta la decisión de la mayoría de los partidos políticos de nuestro país de elaborar una nueva Constitución, lo que se plasmó en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre. Consignamos la masividad de la movilización y la inusitada intensidad de la violencia ejercida contra bienes públicos y privados y también contra las fuerzas de orden. Ello nos llevó a analizar el tema de la represión y los derechos humanos, la pérdida de poder del gobierno y como consecuencia de todo ello, el fracaso de la política, que no fue capaz de conducir de manera pacífica el proceso y terminó cediendo a la amenaza de la violencia para culminar en el acuerdo que conduce a la elaboración de una nueva Constitución.

En poco menos de un mes, calificado por Sergio Muñoz Riveros como el período más violento de la historia moderna de Chile, se cumplió la advertencia del abogado Fernando Atria: el problema constitucional habría de resolverse por las buenas o por las malas. Fue por las malas.

Como lo hemos documentado en los capítulos previos, esto no fue un mero "estallido social", fue una asonada insurgente que se levantó contra los poderes legítimamente constituidos para despojarlos del poder. La política, más que la acumulación de tensiones sociales, fue lo que inclinó la balanza para que ocurriera lo que ocurrió. Sin embargo, por honestidad intelectual debemos convenir en que este movimiento contó con un apoyo masivo de la población, que no necesariamente estuvo de acuerdo, pero sí toleró el uso de la violencia para provocar cambios. Así lo revelan las encuestas realizadas con posterioridad, que muestran que una mayoría bastante clara apoyó, al principio, las demandas sociales y luego

el cambio de la Constitución. Reconocer esto último no significa, por nuestra parte, validar la asonada ni sus consecuencias, pues la democracia no puede aceptar, de buenas a primeras, que el gobernante legítimamente instituido sea despojado del poder antes de terminar su período, aunque la mayoría esté en su contra. La democracia tiene otros mecanismos, como elecciones parlamentarias y presidenciales que, en el caso de Chile, en poco más de dos años debían dirimir estas cuestiones.

Lo que pretendemos hacer en este capítulo es indagar por qué el Presidente Piñera fue perdiendo apoyo en la población hasta el punto que ésta, mayoritariamente, apoyara las manifestaciones, estuviera contenta con su resultado y quizás lo más importante, cómo es que un grupo minoritario pero significativo de los chilenos llegó a validar el uso de la violencia para lograr los cambios deseados.

Esta indagación no parte de cero. El capítulo uno abundó en el análisis de la realidad económica en los últimos treinta años y se detuvo en los últimos cinco para considerar el efecto del estancamiento de la actividad, la producción y los ingresos, especialmente aquellos provenientes del trabajo. El capítulo dos recogió ampliamente las percepciones de grupos postergados o insatisfechos, particularmente entre la juventud, que participaron activamente en las manifestaciones sociales y también en las acciones violentas posteriores al 18 de octubre. El capítulo tres, **"Del malestar a la violencia política"** se detuvo en el fenómeno de malestar que se instaló en amplios sectores de la sociedad chilena, en particular en la clase media, y recurrió a la opinión de varios intelectuales chilenos para tratar de entenderlo. Se analizaron opiniones que resaltaron la búsqueda de sentido de amplios grupos de una sociedad chilena que había experimentado grandes cambios a partir de la modernización capitalista, se mencionó en particular a los jóvenes y se convino, con algunos intelectuales como Arturo Fontaine y Lucía Santa Cruz, en que la política tenía mucho que ver con la asonada. Lucía en particular, la ligó con el fracaso político del gobierno de la Nueva Mayoría, que fue determinante en la frustración de muchos chilenos, pero también en un cambio en la estrategia política de una parte de la izquierda, que resultó fundamental en el curso que tomaron los

acontecimientos en nuestro país. Luego, el capítulo cuatro nos acompañó en la transición desde la llamada primera línea a un proceso para escribir una nueva Constitución.

No obstante, a mi juicio, todos estos antecedentes no alcanzan a explicar la magnitud e intensidad del movimiento de octubre. Lo que pretendo encontrar aquí es cuál es el pegamento, el cemento, la argamasa, que fue capaz de mantener unidos todos estos elementos, hasta darle la dureza y la consistencia suficientes para provocar lo que ocurrió en Chile a fines del año pasado. Estamos, entonces, en busca del encadenamiento de circunstancias que llevaron al 18 de octubre.

Por eso en este capítulo volveremos a hablar de los jóvenes y sus motivaciones y las tendencias de pensamiento acerca de la sociedad y la política que se han desarrollado últimamente y atraen su atención, especialmente en el ámbito universitario. También nos referiremos al rol de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales en este período y en el tiempo que le antecedió. En estos afanes, nos detendremos a examinar otro fenómeno creciente, que se presenta no sólo en Chile, sino en todo el mundo, cual es la creciente importancia de los sentimientos, a costa de la razón, en la formación de posiciones políticas de las personas.

Así, seremos fieles a nuestra creencia de que las ideas son importantes en el devenir de las sociedades y que los cambios en el sentido común, a la larga, tienen impacto en la política. Que el ejercicio del poder en una democracia debe estar revestido de legitimidad formal, pero que requiere, para conservarse, de ciertos consensos mínimos en la sociedad que parecieran haberse roto en los últimos años. Esto es cierto particularmente entre muchos jóvenes, que no se sentían parte de los acuerdos de la transición a partir de 1990, ni cómodos con la sociedad en que vivían. Su disposición a la ruptura era mucho mayor. Una encuesta del CEP tomada en diciembre de 2019, después de los principales hechos de violencia[1], hacía una pregunta interesante: "a partir

1 Encuesta CEP Diciembre 2019 "Estudio Nacional de Opinión Pública N° 84".

de la crisis que comenzó en octubre de 2019, ¿cuánta tensión se ha generado entre las personas mayores y las más jóvenes de su familia? Un 57% de las respuestas se agrupaban en las categorías Mucha, Bastante y Algo, mientras 39% contestaba que Poca o Nada. El 4% restante no contestó la pregunta.

Buena parte de la distinta actitud de los jóvenes hacia la sociedad y más concretamente hacia lo que se llamó el modelo "neoliberal", se cultivó en las universidades y entre los intelectuales, no sólo en Chile, sino en el mundo. Sol Serrano, Premio Nacional de Historia 2019, dice en una entrevista al diario La Tercera[2] que a su juicio ha faltado una mayor valoración de la cultura democrática de parte de los intelectuales, principalmente del posmodernismo y sus corrientes asociadas que son muy poderosas en las universidades e instalaron con mucho éxito la identificación de todo lenguaje como una forma de opresión. Afirma que con ello la investigación empírica quedó muy postergada, "porque si el conocimiento es un discurso de poder, lo que importa es deconstruirlo con otros discursos que vendrían a ser los de denuncia y liberación".

Sobre estos temas queremos ahondar en las líneas que siguen, pues el sustento intelectual a muchas de las acciones violentas, algo de lo cual vimos en el capítulo dos cuando nos referimos al uso de la fuerza por parte de las policías, proviene de corrientes que se han instalado desde hace tiempo en las universidades y la academia.

Luego de esta reflexión acerca del sustento intelectual que nutre a algunos grupos que han tenido participación protagónica en los hechos de octubre, volveremos hacia el final del capítulo a la cruda realidad del comportamiento de las redes sociales en Chile en ese período y también examinaremos el rol de la prensa, que es importante en el encadenamiento de circunstancias que llevaron a conmover a nuestro país a fines del año pasado.

2 Entrevista a Sol Serrano, Daniel Hopenhayn La Tercera, 27 de junio 2020.

Del posmodernismo a la crítica al "neoliberalismo"

Desde hace años que buena parte de los desarrollos de la filosofía contemporánea y las ciencias sociales reciben influencia de corrientes posmodernas originadas en Francia por Michel Foucault y otros pensadores en la segunda mitad del siglo 20. Algunas de sus ponencias se centran en la importancia de la experiencia vivida por sobre la evidencia empírica científica, por lo cual han sido calificados de relativistas. La realidad no existiría en forma independiente de las percepciones humanas y las personas se construirían a partir de su posición frente a las estructuras e ideas culturales y sociales dominantes, según la visión posmoderna. Esta corriente de pensamiento, cuyos orígenes se remontan principalmente a la creación artística, ha permeado con gran fuerza las facultades universitarias humanistas en todo el mundo.

En alguna medida, estas ideas entroncan con la de pensadores de la llamada Escuela de Frankfurt. Esta escuela, con raíces en el pensamiento de Marx, ponía atención, entre otras cosas, a la discusión crítica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de toda teoría. Esas condiciones sociales eran uno de sus objetos preferentes de análisis y de una manera u otra, se consideraba deseable la búsqueda de su cambio. Pese a que hay diferencias entre distintos autores de esa escuela (que cumplirá luego cien años) y vertientes que vamos a ignorar en esta mención muy simplificada y orientada a los objetivos de este libro, uno de los desarrollos postreros que han recibido más atención y nos interesa destacar es el de Jürgen Habermas, quien describió originalmente el concepto de la acción comunicativa, que tendría la propiedad de lograr una superación de las concepciones anteriores.

Varios autores del posmodernismo plantean que los fenómenos sociales no poseen un significado natural al que se puede acceder directamente, sino que depende de procesos sociales de comunicación y creación de sentido. El lingüista norteamericano George Lakoff, describe la existencia de un lenguaje metafórico que simultáneamente revela y oculta, que promueve una interpretación en detrimento de otra. Esta importancia del

lenguaje en "la construcción de realidad" ha llevado al sociólogo español, Manuel Castells, a afirmar que en los medios de comunicación es donde se crea poder. En ese sentido, la política vendría a ser una lucha por el control de los signos. Antonio Gramsci y su pensamiento siguen orientando la acción política en nuestros días.

La política ha sido tradicionalmente un campo donde juega un papel importante la ideología. La ideología es un conjunto de creencias sobre la realidad social que está dotada de coherencia interna y se expresa hacia el exterior como preferencias, de acuerdo a una definición relativamente clásica. Ese marco de referencia se ha visto modificado en el último tiempo, con especial fuerza a partir del año 2008 y la crisis de Wall Street, que llevó a una recesión mundial y a un cuestionamiento de la globalización. Las respuestas identitarias que siguieron dieron origen a líderes populistas que enfatizaron las identidades nacionales y cuestionaron las migraciones, transformando estas posturas en elementos claves de su acción política.

Desde la academia, pensadores como Ernesto Laclau y Slavoj Zizek[3] han desafiado esta definición de lo que es ideología que veíamos recién. Se percibe en sus ponencias el intento de llevar a un extremo la posibilidad de que las percepciones y emociones puedan moldearse a través de un proceso de "creación de sentido". Ellos afirman que las estructuras sociales son tomadas como naturales por quienes las viven, pero la política tiene la capacidad de revelar su contingencia, o sea, son de una manera, pero podrían ser de otra, por lo cual la política abre nuevas posibilidades de construcción de la sociedad.

Así, cuestiones que para nosotros son parte del paisaje de las sociedades modernas, como podrían ser la división de poderes, el libre mercado e incluso, el estado de bienestar, serían todas ideologías y las podemos cambiar mediante la política. De esta manera, llegamos a un estado de cosas en que las ideologías estarían entrelazadas con los sentimientos y las emociones.

3 Slavoj Zizek es un filósofo y sociólogo esloveno que ha estudiado el materialismo dialéctico, integrándolo con la cultura popular.

Estas tendencias de pensamiento y desarrollos conceptuales, a decir verdad, han tomado desprevenidos a muchos en la política y muy especialmente a aquellos que se identifican con posiciones más tradicionales. Constituyen un desafío a la sociedad capitalista que se ha desarrollado justamente en la confianza de la vigencia de conceptos como la división de poderes, el libre mercado y la importancia de las instituciones y las reglas del juego. Todo eso se pone en discusión por parte de estas ideas, que han ganado terreno en el mundo intelectual y universitario y plantean un desafío al capitalismo. Éste, no obstante, sigue campeando en el mundo de la producción de bienes y servicios, sin que se avizoren sistemas que puedan reemplazarlo con relativo éxito.

Como veremos más adelante, con este marco conceptual, Ernesto Laclau desarrolla una suerte de manual para la acción política, donde el populismo juega un rol fundamental.

Conviene mencionar aquí que, paralelamente, una serie de autores han elaborado teorías para concluir que en la sociedad capitalista vivimos en una modernidad extenuante, como dice Nikolas Kompridis, o que hay que desactivar la temporalidad moderna para empezar a vivir de otra manera, más pausada, según afirma el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

A estas alturas de la reflexión que hacemos acá, conviene recordar que el Romanticismo procura mantener siempre a la "verdadera" revolución como algo pendiente. Subestima la realidad y como siempre está aplazando la solución, alimenta su mitología transformadora. Por eso, Raymond Aron ha dicho: **"el espíritu revolucionario se nutre de la ignorancia del porvenir".** El historiador e intelectual francés, Pierre Rosanvallon, por su parte, al examinar las tendencias actuales de la comunicación y su incidencia en la política, ha dicho que vivimos en una "vetocracia", en que la negatividad tiene una ventaja estructural.

Tenemos entonces, en estas tendencias de pensamiento, el caldo de cultivo para un manejo emocional del individuo que derive en populismo. El populista, de cualquier signo, sea Trump o Chávez, siempre busca un an-

tagonista, necesita uno. Un "enemigo del pueblo" contra el cual dirigir los sentimientos de la gente. Plantea, entonces, el enfrentamiento moral entre una elite (corrupta) y el pueblo (puro). El líder populista encarna al pueblo. Parece, en cierto modo, el libreto para la acción política de algunos movimientos de los que hace unos años conformaron el Frente Amplio en nuestro país. Ese pensamiento ha penetrado en varios sectores de la sociedad chilena, especialmente en los jóvenes.

Sentimentalización, redes sociales y mundo digital

Ernesto Laclau nos dice que "el líder populista viene a recuperar para el pueblo un poder del que ha sido injustamente privado". Afirma que "el pueblo" se construye por medio de una operación de investidura que pertenece al orden afectivo. Busca la hegemonía por la vía de la generalización de un nuevo significado. El "nombrar" es entonces fundamental. Aquí aparece como clave el concepto de hegemonía y juega un rol fundamental el lenguaje. No hay afecto sin lenguaje, ni lenguaje sin afecto. El rasgo distintivo del populismo es que dibuja un pueblo virtuoso y homogéneo frente a un conjunto de elites y peligrosos "otros" representados conjuntamente como actores que privan al pueblo soberano de sus derechos, valores, propiedad, identidad y voz.

Sin embargo, la mayor novedad que nos presenta Ernesto Laclau[4] es su verdadero elogio del populismo, sin ya disfrazarlo, sino incluso reivindicando el término, hasta el punto de proclamar que el populismo no sólo es legítimo, sino que simplemente esa es la lógica de la política democrática hoy. La existencia de una prensa libre que adopta tintes populistas en su búsqueda sensacionalista de audiencia, tentación especialmente presente en la televisión cuando denuncia abusos de cualquier autoridad, refuerza esta tendencia y concede amplios espacios en los medios a quienes se erigen como representantes del pueblo. En términos de acción política, el populismo utiliza la protesta, la movilización, la polarización y las apelaciones afectivas. Parece una historia conocida para los chilenos.

4 Ernesto Laclau "La razón populista". Fondo de Cultura Económica, 2015.

Es interesante examinar cómo la dimensión emocional de la discusión pública se ve influenciada por las nuevas tecnologías. De alguna manera, el mundo digital es el ambiente en el que se da hoy buena parte de esta discusión, o para ser más directos, es el campo de batalla donde se da la lucha por las hegemonías. Es conocido que en esta democracia post-factual en que vivimos, muchas veces los hechos importan menos que las emociones. Se ha producido en nuestra sociedad un fenómeno de digitalización de la emoción pública. Los medios digitales, y en particular las redes sociales, provocan una fragmentación de la oferta informativa y los medios de comunicación convencionales no cumplen su tradicional función moderadora.

Así, asistimos a un mundo con mayor polarización política y "ruido" más que a uno con nueva información. Byung-Chul Han[5] ha acuñado en un interesante libro sobre redes sociales el concepto de "democracia de enjambres" donde muchedumbres reactivas se mueven a base de "flujos de halago o descalificación" que circulan por las redes sociales y donde se produce un verdadero *bullying* a través de las llamadas *shitstorms* y *shamestorms*. El respeto que requiere la discusión pública supone un *pathos* de la distancia que se ha perdido, según el filósofo coreano.

En definitiva, lo que ocurre es que el impacto de la digitalización ha sido fundamental para deslegitimar la mediación que tradicionalmente ejercían los medios de comunicación y mediante las redes digitales el ciudadano sentimental se ha convertido en una suerte de "público afectivo". Las redes sociales, donde hoy la mayor parte de los contenidos son videos, fotos o "memes", conviven con la TV y tienen en común las pantallas. El politólogo italiano Giovanni Sartori acuñó el concepto de videopolítica y según el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, nos han convertido en espectadores.

Los memes, tan populares entre los jóvenes, son replicadores culturales, análogos a lo que son los genes en la biología. Están relacionados con

---

5 Byung-Chul Han "En el Enjambre" Herder Editorial 2014.

la necesidad de aprobación que tienen los hombres y por ello, existe la imitación. El deseo mimético es parte también de la explicación para la envidia: imitamos, pero también comparamos. Otra de las consecuencias directas de esta forma de discusión sobre las cuestiones públicas es que el estilo gana importancia frente al contenido. El cientista político Jeffrey Green nos dice: "la voz del pueblo ha sido reemplazada por los ojos del pueblo". El problema es que esta "democracia ocular" es más bien plebiscitaria. No está diseñada para entrar a estudiar la complejidad de los problemas. Hay incluso quienes creen que las revoluciones en la sensibilidad estética son las que mayor potencial tienen para conducirnos a un cambio radical en el futuro. De allí la importancia del cine en nuestra vida. Una película puede ser un factor de cambio social muy rápido en nuestros días. Por otra parte, como ha sido destacado luego de la Primavera Árabe, el éxito de las coaliciones *ad-hoc* y protestas contra un gobierno se facilitan de manera muy importante por la caída en costos de transacción que significan los cambios en la tecnología y el acceso masivo a redes sociales.

Ese es el mundo en el que vive gran parte de nuestra juventud, el de la pantalla del celular o el computador. De esa manera se informa, así toma posición acerca de las cuestiones que suceden en la sociedad.

En este contexto, ¿cómo los liberales podemos hacernos cargo de los sentimientos? Creemos que una democracia funciona mejor con ciudadanos capaces de reflexionar y de limitar la sobredeterminación emocional de sus comportamientos, ¿cómo enfrentamos, entonces, la invasión de los sentimientos, sin al mismo tiempo rendirnos frente al populismo? Esta pregunta, que plantea el cientista político español Carlos Arias Maldonado en su excelente libro ***La Democracia Sentimental***[6]**,** es relevante y nada trivial.

Lucía Santa Cruz en el libro ***¿Pensamos tan Distinto?*** nos dice que no es posible separar lo que ocurre en Chile de un contexto global de fragilidad de la democracia representativa, asediada, entre otros, por fenómenos como el predominio de las emociones sobre la racionalidad, de las per-

6 Arias Maldonado, Manuel. "La Democracia Sentimental" Página Indómita, 2016.

cepciones por sobre la realidad. Agrega que la democracia se fundamenta en la posibilidad de entablar conversaciones racionales bajo el supuesto de la existencia de hechos que se pueden comprobar. En otras palabras, se requiere racionalidad y que los datos con que deliberamos, con los que pretendemos dirimir las diferencias, sean verídicos. Cabe preguntarse si acaso la democracia liberal representativa es compatible con la exaltación de los sentimientos sobre la razón y con el relativismo -no sólo ético, sino fáctico- del posmodernismo o con la irrupción de las *fake news*, termina señalando la historiadora.

Cuando en marzo de 2018 Libertad y Desarrollo publicó el documento de mi autoría **"Política y Sentimientos: respuesta Liberal al Populismo"**, tuve una interesante conversación con Lucía, en la que me pareció advertir cierta crítica suya al conformismo con el que yo parecía mirar la invasión de los sentimientos en la política.

De alguna manera, yo aparecía afirmando que si aceptamos que la competición por el control del lenguaje político va de la mano de la pugna por movilizar políticamente las emociones de los ciudadanos, no podemos quedarnos completamente afuera de esta área, como simples espectadores. Debíamos indagar en propuestas que trabajan sobre los afectos, sin intención de suprimirlos, como nos sugería Manuel Arias Maldonado. Vale decir, se trataría de postular una razón dispuesta a dejar espacio a los afectos, sin verse colonizada por ellos. Puede ser una concesión, espero no una rendición, a lo que Rosanvallon llama "la ventaja estructural de la negatividad". Resulta tanto más fácil hoy, con la falta de reflexión que prevalece, destruir y criticar que construir y proponer.

Autoras como Chantal Mouffe[7] han ido aún más allá en la invasión de los sentimientos, cuando promueven la recuperación de las pasiones como vía para revitalizar el ideal democrático. En ese sentido, conciben la política como un sentir antes que un pensar. Así, se postula que los debates

7 Chantal Mouffe es una filósofa y socióloga belga, posmarxista y seguidora de Antonio Gramsci.

nunca se clausuran, que el consenso está lleno de grietas, que el conflicto es la realidad insuperable de la vida política. Se trata de una contienda abierta con la democracia liberal y de hecho, Mouffe plantea superar la democracia liberal mediante la creación de una nueva hegemonía. Ella afirma que hay que usar las pasiones en política, canalizar pasiones "negativas" como el racismo o la xenofobia para sus fines. El activista social es un protagonista principal de la política. De hecho, esta autora belga es un referente intelectual de algunos de los grupos que conforman el Frente Amplio en nuestro país.

Frente a esto, los que creemos en una democracia liberal estamos, pensando en Raimond Aron y en Rosanvallón, en una suerte de desventaja propagandística y aparecemos como conformistas del estatus actual, frente a quienes siguen un ideal romántico. No tenemos, desgraciadamente, una respuesta satisfactoria a la pregunta sobre cómo los liberales podemos hacernos cargo de la irrupción de los sentimientos en política, pero yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo serio de investigación para intentar la integración de las emociones al ideal liberal de la autonomía. La respuesta pareciera ir, según mi intuición e incipiente conocimiento, por el lado de la perspectiva evolucionaria de las ciencias sociales, pero abundar en ello nos llevaría a digresiones que, por su extensión, podrían desviarnos del propósito principal de este libro.

Redes sociales en Chile durante la asonada

Las redes sociales tienen un gran potencial para intervenir en la política. Quienes las utilizan con gran oficio y soltura, recurren a las emociones para capturar las voluntades de partícipes que son, en una proporción muy importante, personas jóvenes. Son un espacio de poca reflexión, en el que resulta difícil, sino imposible, discutir con racionalidad. Los datos no importan; vale tanto una información seria como una noticia falsa, conocida popularmente como *fake new*. Las redes son un campo de batalla, donde se agrede y se recibe fuego. El desarrollo de la tecnología ha permitido amplificar con gran rapidez su alcance e influencia y hay toda una industria, comúnmente llamada de *big data*, que utiliza las

redes sociales con distintos fines: desde ganar dinero (sí, el modelo en eso es muy resiliente) hasta ganar una elección presidencial en otro país, sospecha que incluso se ha instalado respecto a la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos. Lo sorprendente es que la intervención puede hacerse desde cualquier parte del mundo, lo que da un giro impensado a la política. Rusia y China han sido señalados por algunos como naciones en que organizaciones relacionadas de alguna manera con el gobierno intervienen en otros países con motivos económicos o políticos.

En ese contexto, han florecido las empresas que se dedican a la analítica de datos. Esta es una herramienta que se vale del hecho que los algoritmos de búsqueda que operan tras las redes sociales refuerzan la tendencia de los usuarios a interactuar con las personas más afines, acercando a quienes comparten diversas afinidades y generando la ilusión de que la mayoría de los usuarios piensa en términos similares.

El diario español El Mundo, en un artículo titulado **"La mano negra tras las crisis de Chile y Colombia"** escrito por el periodista chileno John Müller, publicó en febrero de este año contenidos de un informe elaborado por la empresa de *big data*, Alto Analytics, acerca de redes sociales en Chile y Colombia durante el período de manifestaciones masivas y violencia en el año 2019. En una nota publicada en el diario electrónico[8] **Pauta.cl** entregó más antecedentes sobre este estudio.

El estudio de Alto Analytics (AA)[9] se refiere a campañas de desinformación digital y de influencia durante las protestas en Chile y Colombia y fue publicado el 13 de febrero de 2020. Analiza dos períodos: los 14 días siguientes al inicio de la crisis y luego, todo el lapso entre el comienzo de la crisis y el 25 de diciembre de 2019.

8 "El verdadero informe de big data de Alto Analytic sobre la crisis chilena" Pauta.cl, 16 de febrero de 2020.

9 "Protests in South America: an analysis of new trends in Digital Disinformation and Influence Campaigns" Alto-Analytics.com, february 13, 2020.

Es conveniente aclarar, y la empresa así lo señala en su informe, que no se trata de que las campañas de influencia o desinformación fueran el origen o causa de las movilizaciones. Esto es importante de consignar para alejarse de "teorías conspirativas" que en general tienen poco sustento. Esta confusión puede producirse porque en diciembre del año pasado el gobierno entregó al Ministerio Público un documento con información de redes sociales que apuntaba a influencia extranjera en la propagación de contenido dañino durante la crisis. Esto creó una controversia porque el Ministro del Interior calificó de "información sofisticada" la que se entregaba y la Fiscalía relativizó la importancia de lo que recibieron. Algunos criticaron al ministro por sus expresiones, aunque también fue llamativo lo que declaró el Fiscal, que no tenía por qué referirse al tema en esos términos. Que el Ministerio Público no haya considerado relevante la información para una investigación criminal, no significa que el contenido no sea interesante y muy relevante para analizar lo ocurrido en octubre en Chile.

Aunque las manifestaciones respondieron a factores como la erosión de la confianza en las instituciones o la desigualdad económica, en su origen también hubo motivos políticos como hemos señalado; todos ellos fueron elementos que contribuyeron a detonar las protestas. Sin embargo, el uso de las herramientas descritas en el Informe contribuyó a viralizar contenidos y también a desinformar. En otros casos, directamente se utilizaron estas herramientas para llamar a realizar más acciones violentas, prolongar su duración y aumentar su intensidad.

En ese sentido, las redes sociales, con activistas que utilizan estas técnicas, se despliegan y actúan como un efecto multiplicador y distorsionador de contenidos. Esto es relevante para los propósitos de este libro y en particular este capítulo, que pretende indagar cuál es el pegamento, la argamasa, que fue capaz de mantener unidos los elementos de descontento hasta darles la dureza y la consistencia suficientes para provocar hechos de la magnitud y relevancia de los que ocurrieron en Chile a contar del 18 de octubre de 2019.

Utilizando técnicas para el análisis de *big data*, el informe citado investiga lo que denomina "anomalías informativas". Califica de esa forma a co-

rrientes de datos generados en el "ecosistema digital" que por medio de distintas herramientas buscan la diseminación masiva de contenidos de un tema determinado en magnitudes que no son usuales. Utiliza el concepto de "desinformación", que define como "contenido malevolente, falso, incorrecto o manipulado con el objetivo deliberado o con la intención de confundir, sembrar discordia o provocar daño". También define el concepto "propaganda computacional" que vendría a ser "el uso de algoritmos, de bots automatizados o humanos, y de otras técnicas para distribuir masiva e intencionalmente información engañosa a través de plataformas digitales".

En los 14 días siguientes al inicio de la crisis en Chile, o sea entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre, el 0,5% de las cuentas, que corresponde a 9.827 identidades, produjo casi el 28% de las conversaciones en el debate digital. Eso constituye una anomalía informativa.

Un análisis más detallado de los usuarios que demostraron tasas de actividad extremadamente frecuentes, revela que destacan varias entidades anómalas por su excepcionalmente alto nivel de tráfico. Por ejemplo, 217 autores en Chile publicaron 714 mil posteos con un promedio de casi 3.300 posteos por identidad. Esto implica que estos posteadores hicieron más de 20 publicaciones por hora sin parar durante 14 días.

Al procesar un grupo más acotado, Alto Analytics identifica algunos usuarios con una actividad anómala, fuera de lo común, dada la extrema frecuencia de sus posteos y que actuaron tanto en Colombia como Chile: de aquellos autores, el 58% de quienes transparentaron su localización provenía de Venezuela.

Días antes, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, había denunciado la intervención de Venezuela y Cuba en la política de otros países de la región.

Tanto en Chile, como en Colombia, los mensajes que responsabilizan al Gobierno por atizar la violencia debido a sus decisiones policiales "desti-

nadas a generar pánico" están identificados entre los perfiles que apoyaban las manifestaciones.

Luego, se identifica a una serie de cuentas de alto nivel de influencia en Chile: PiensaPrensa, número 1 en influencia; ChileOkulto, número 3; Gamba, número 7; El Desconcierto, número 10; y se cuantifican sus interacciones con cuentas de comportamiento anómalo. Al hacer un análisis más detallado, se comprueba que usuarios identificados que demostraron una actividad inusualmente alta en el período son responsables de un 46,6% del total de la participación de Gamba en ese mismo período y de un 50,5% de El Desconcierto. Vale decir, estos medios fueron "activados" en el período de las protestas más violentas, presumiblemente para incitar a más acciones de ese tipo. ¿Por qué puede presumirse eso? Por el tipo de contenidos que difundía Piensa Prensa. Un ejemplo: **"Piñera tendrás que responder por cada una de las víctimas, serás recordado como un ASESINO, que todo el mundo lo vea. Difundan en las redes#chile".**

Sus colegas de Gamba, entretanto, tuiteaban: **"esto ya es una completa brutalidad. El cobarde de Piñera lleva 3 días escondido mientras Chile se está quemando y tanto Carabineros como los Militares están ASESINANDO PERSONAS. Y más encima siguen sin anunciar medidas concretas para frenar este Estallido Social. ¿En serio van a seguir permitiendo esta barbarie? ¿En serio nadie va a renunciar en este gobierno inepto? Piñera está completamente interdicto, además de renunciar debería estar preso."**

El estudio de AA revisa también con detención la influencia que han alcanzado algunos medios extranjeros, sobre todo aquellos auspiciados por los gobiernos de Rusia y Venezuela. En el caso de Russia Today, éste aparece como noveno en el ranking tanto de "influencia", como de "noticias compartidas" en Chile durante las dos semanas más intensas de la crisis. Por otra parte, el venezolano TeleSur alcanza los puestos 26° y 15° en ambas categorías.

Alto Analytics identifica, además, a algunos autores cuya resonancia le resulta anómala en el contexto de la crisis. Uno de ellos es el periodista

Marco Teruggi, corresponsal de medio venezolano TeleSur, quien aparece entre los 40 autores más influyentes tanto en Chile, como en Colombia, así como en discusiones políticas en Bolivia y Ecuador.

AA describe, además, que ciertos grupos durante la crisis aparecen "con un contenido de particular violencia explícita, tales como Archivando Chile, No Nos Callarán y Chile Despierta. Algunos de estos grupos publican y difunden mensajes que buscan acciones organizadas o coordinadas como bloqueo de calles, o la distracción y subversión de las fuerzas públicas de seguridad". Menciona ciertos emisores de contenido anarquista que han compartido datos privados de personal de Carabineros, y un grupo de más de 2.500 miembros que difunde contenido descargable para acciones anarquistas. En uno de los contenidos revelados por AA, por ejemplo, hay una ilustración que señala instrucciones para "neutralizar una tanqueta 'represora'".

Un apartado del informe de AA se dedica al creciente uso de las redes de mensajería instantánea de datos como **WhatsApp** y **Telegram**. Ese análisis se hizo para el período entre el 18 de octubre y el 25 de diciembre. En Chile y Colombia, señala Alto Analytics, hay grupos que han usado esas herramientas para diseminar imágenes, noticias y videos que "reflejan la violencia aplicada para lograr el cumplimiento de la ley en medio de las manifestaciones".

Como lo dijimos antes, es evidente el propósito entre quienes organizaban y promovían las manifestaciones de neutralizar la efectividad de la acción policial para reprimir las protestas. En ello actuaron grupos relacionados a los derechos humanos, lo que hemos documentado ampliamente en el capítulo cuatro; pero para ese objetivo estratégico se contó también con el importante aporte de las redes sociales, incluyendo lo que AA califica como "anomalías informativas", "desinformación" y "propaganda computacional". Era un objetivo estratégico privar al gobierno de Sebastián Piñera de su capacidad de mantener el orden público de manera de debilitarlo y lograr concesiones políticas, económicas e institucionales que podían llegar, incluso, a la claudicación.

Estas mismas tácticas se utilizaron no sólo para difundir información y propaganda, sino también selectivamente en la coordinación de actividades y protestas. En Chile, dice el informe, se identificaron 63 grupos de Telegram (41% geolocalizados en el exterior) y 61 grupos de WhatsApp (18% desde el exterior) vinculados directamente con la crisis. Entre el 18 de octubre y el 25 de diciembre hubo 135 eventos relacionados con "protestas en contra del gobierno de Piñera, del sistema neoliberal, o marchas por una revuelta ciudadana". Según el análisis de AA, de esos eventos, el 33% se orquestó desde el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y España. Esto indica que hubo una muy importante intervención de extranjeros en estas actividades (un tercio nada menos), lo que, por supuesto, no quiere decir que la asonada insurgente se haya dirigido desde fuera de Chile, pero sí que hay coordinación internacional de grupos de extrema izquierda ya que, recordemos, en el caso de Twitter un porcentaje muy importante del tráfico provenía de Venezuela.

Concertados para mentir

Pero el *big data* no es la única herramienta para intervenir mediante las redes sociales en política. Crecientemente, los medios tradicionales de la prensa escrita, radio y televisión han empezado a difundir noticias que provienen de redes sociales. Lo mismo hacen ciertos políticos, que las citan sin ningún pudor, independientemente de la credibilidad de la fuente. Esto es altamente cuestionable desde el punto de vista ético, pues uno de los roles de los medios es justamente la intermediación de información entre las fuentes y las audiencias. Lo que hemos visto es una suerte de ocaso de la función editorial que durante mucho tiempo cumplieron editores de medios que verificaban, filtraban y a veces modificaban los contenidos que se publicaban. Esta función se ha visto sobrepasada por las posibilidades que ofrecen internet, la telefonía celular y las redes sociales. Cada persona se convierte así en un emisor y reproductor de mensajes, textos e imágenes de todo tipo y si más encima un medio de comunicación tradicional acríticamente difunde una "noticia" que proviene de las redes sociales, está renunciando a su verdadero rol.

Esto ocurrió con frecuencia en los hechos de octubre. Contribuyó a ello el que varios periodistas tomaran partido, abiertamente o no, por apoyar las manifestaciones en la cobertura noticiosa. No informaron con objetividad, dejaban ver su simpatía por quienes se manifestaban y sus causas e incluso, en algunos casos, idealizaban a quienes ejercían extrema violencia en ese afán. La llamada "primera línea" y toda la historia romántica que se tejió en torno a quienes, a punta de palos y piedras, mantenían secuestrado uno de los espacios públicos más concurridos por los santiaguinos, fue un ejemplo de eso. Para la mayoría de los conductores de televisión la palabra "pacifica" parecía pegada al vocablo "manifestación"; aunque en ocasiones el televidente estuviese observando, en ese mismo momento en la pantalla, cómo se incendiaba un bus, se apedreaba un automóvil o se asaltaba un local comercial.

Este alineamiento político de muchos periodistas relajó también, como decíamos, sus cánones de control de las fuentes informativas. Una serie de cuentas de twitter y páginas web se atribuyeron la calidad de "medios de comunicación", como es el caso de PiensaPrensa, ChileOkulto, Gamba, El Desconcierto o Interferencia. En la realidad, unos más que otros, estos se dedican preferentemente a denostar a autoridades de gobierno, empezando por el Presidente de la República y su familia, y a diseminar contenidos contra cualquier político que no fuera de su agrado, sin ningún filtro.

Más grave aún fue que medios establecidos y con trayectoria citaran algunas de las "informaciones" que provenían de estos "medios", lo que se convirtió en una práctica, sino habitual, al menos utilizada por varios diarios, radios e incluso, canales de televisión. Este *modus operandis* le ha hecho un gran daño a la credibilidad de los medios de comunicación y tuvo, a mi juicio, un rol decisivo en diseminar el odio que se dejó ver en muchas de las manifestaciones que siguieron al 18 de octubre. En lo que sigue de este capítulo, entregaré algunos ejemplos de estos actos de desinformación, que tuvieron graves consecuencias políticas y contribuyeron decisivamente a transformar las manifestaciones de octubre en un eslabón de una cadena cuya función parecía ser despojar del poder a la coalición gobernante instalada legítimamente en él. Al mismo tiempo,

ciertos políticos, prácticamente todos pertenecientes al Partido Comunista o el Frente Amplio y algún parlamentario socialista, desde el 18 de octubre perdieron todo filtro en diseminar informaciones falsas, cuestión que documentaremos a continuación.

Denuncia sobre supuesto centro de tortura en Baquedano

La denuncia sobre la existencia de un centro de tortura en la estación Baquedano del Metro fue central en la estrategia para apoderarse de la Plaza Baquedano y mantener el caos en la ciudad de Santiago a partir de ese bastión simbólico. Como efecto colateral, contribuyó nada menos que a la remoción del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por parte del Senado.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó en el mes de junio el sobreseimiento definitivo en la investigación por el supuesto centro de torturas que habría existido al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente se informó que lograron "desacreditar versiones que daban cuenta de la existencia de amarras y de sangre en el interior del recinto". También subrayan que en los más de 200 días que estuvo abierto el caso, no hubo denuncias de víctimas en el tribunal. Sin embargo, a partir de estos eventos, como decíamos, dirigentes de la oposición asentaron las bases para las acusaciones constitucionales contra el ex ministro Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera.

Según ha informado el diario electrónico **El Líbero**, todo comenzó con un tuit que se publicó a las 2:29 am del 23 de octubre. Salió desde el perfil de @unafederik, quien se presenta como "periodista", sin especificar el medio para el que trabaja o su nombre completo. Esa madrugada subió unas fotos del juez Daniel Urrutia, acompañado de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes levantaban "evidencia por sesiones de torturas a Nicolás Lüer y otros detenidos". El mensaje tuvo 3.200 "me gusta" y casi 7.000 retuits.

Frente a preguntas de los usuarios de la red social, la tuitera respondía que las fotos habían sido tomadas por ella, que había estado en el sitio y

pedía "difundir" la información. Esa mañana, a las 10:18 am, el mensaje lo replicó la dirigente del Frente Amplio y ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez. "INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El Ministro del Interior Andrés Chadwick debe renunciar hoy", escribió. Más de 14 mil personas retuitearon.

Cuando se conoció el tuit de Beatriz Sánchez, en el Congreso ya había comenzado la sesión en la que comparecería el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien debía rendir cuentas sobre las decisiones que había tomado el Gobierno en materia de control del orden público durante las manifestaciones de esos días, período en el que, además, Piñera había decretado Estado de Emergencia.

Esa mañana la bancada del Partido Comunista anunció que estaban trabajando en una acusación constitucional contra el Presidente de la República. El presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, sostuvo: "nosotros pensamos no sólo una acusación contra el ministro Chadwick, sino incluso contra el Presidente de la República. Si lo pide la ciudadanía, nosotros los vamos a hacer".

Ese mismo día, desde las gradas del Congreso, asesores parlamentarios acusaban directamente a Chadwick por las presuntas agresiones a los DD.HH. que se habían cometido durante las protestas. "Tus manos tienen sangre", decía el cartel que enarbolaron en la gradería funcionarios pagados con recursos del Presupuesto Fiscal.

En esa sesión, las diputadas del Frente Amplio Camila Rojas, Gael Yeomans, Maite Orsini, Claudia Mix y Pamela Jiles se enfrentaron a las diputadas oficialistas Erika Olivera, Paulina Núñez y Marcela Sabat. Hubo un empujón de Jiles a Núñez y luego se unió Camila Flores, quien tomó uno de los carteles con los que las opositoras se habían acercado a la testera, lo rompió y lo lanzó al piso. Pamela Jiles alzaba frente a Chadwick otro cartel, pidiéndole la renuncia.

Pasaron 236 días desde esos incidentes hasta el 15 de junio. Ese día, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo en

la investigación por el supuesto centro de torturas que habría existido al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago durante el estallido social.

"Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar esos hechos, sino que muy por el contrario, se descartaron. En primer lugar, por la presencia de los mismos jueces que se constituyeron en el lugar, la Fiscalía también se constituyó en el lugar. Se logró desacreditar versiones que daban cuenta de la existencia de amarras y de sangre en el interior del recinto. Lo que, unido a una orden de investigar emanada de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, todo ello en su conjunto, así como también la inexistencia de denuncias de personas que hayan sido precisamente las víctimas, se logró totalmente desacreditar y descartar la existencia de este centro de tortura al interior de la 60ª comisaría de Carabineros en Metro Baquedano", declaró el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Álvaro Pérez.

De acuerdo con la información del caso disponible en el Poder Judicial, el 22 de octubre de 2019, a las 21:12 horas, el magistrado Urrutia recibió información sobre un recurso de amparo presentado por la abogada Myrna Villegas, quien señaló tener el relato del estudiante Nicolás Lüer Santis de 22 años, de haber sido golpeado por Carabineros y visto a funcionarios que mantenían amarrados de manos a "cabros" y les dispararon a quemarropa.

La denuncia de Lüer agregaba que había visto a "personas atadas, colgadas en el techo, siendo torturadas", y escuchó pedidos de auxilio al interior de la 60° Comisaría de Carabineros ubicada en la estación de Metro Baquedano. El relato se viralizó también en una cadena de Whatsapp: "cabros, con mucha tristeza les comento que supe de un centro de retención Estación Baquedano ("tiene comisaría interna"). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente. Supieron por el relato de un menor de edad. Encontraron evidencias y ahora Rafael Cavada lo está hablando en la Sonar. Confirmado por la Fiscalía (tiene a Macarena Cañas investigando esto) y por la PDI".

En el lugar, además de Daniel Urrutia, también se presentó el juez Darwin Bratti y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Ya en ese documento quedaba constancia que los magistrados "no encontraron ninguna persona detenida en las dependencias de la referida unidad policial". No obstante, en sus declaraciones televisivas, el Juez Urrutia dejó abierta la duda al afirmar que se encontraron en el lugar 7 cartuchos percutados y 2 amarras de plástico, que se utilizan como esposas.

Las sospechas fueron avivadas desde el INDH, que a las 10:48 am tuiteó: "El director del INDH, Sergio Micco, precisa que la @pdichile no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir". Micco se reunió con el Presidente Piñera ese mismo 23 de octubre y al salir de esa reunión fue insistente en señalar que se debían esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público. En un comunicado emitido al darse a conocer el sobreseimiento de la causa, el INDH dijo que decidió no presentar ningún tipo de acción judicial por el caso y que durante los meses que duró la investigación de esta causa, el INDH nunca fue llamado a declarar.

Aunque había una investigación en curso, en la sesión del Congreso la denuncia fue tomada por cierta por varios diputados de oposición. "¿Qué tenemos hoy? Muertos sin nombre, sin causa clara, sin responsables, imposibilidad de apoyar a los que están siendo detenidos, denuncias de instalación de un centro de tortura en más de una estación del Metro. Hay videos; hay videos", aseguró el diputado Tomás Hirsch, del Partido Humanista.

La diputada Carmen Hertz (PC) consideró la mención del INDH como una "confirmación". "Lo grave es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó que una parte de la estación Baquedano del Metro está siendo utilizada como centro de detención ilegal, de golpizas y torturas a detenidos. Eso es gravísimo". E insistió dirigiéndose a Chadwick: "Ministro, los muertos, los heridos, los detenidos ilegales y, como hoy sabemos, además torturados en una suerte de centro de detención ilegal y clandestino,

tienen responsables. En primer lugar, el Presidente de la República, y, señor ministro, permítame que se lo diga, usted".

Durante la sesión, los cuestionamientos de los diputados opositores continuaron pese a que el diputado Juan Antonio Coloma en su intervención dijo que ya se sabía que no se habían encontrado indicios de ningún centro de tortura en Baquedano: "¡Eso no es verdad! Hubo una denuncia de una persona, que se investigó inmediatamente, y se concluyó que era falso, pero nosotros, desde acá, estamos incitando a la población a que tenga miedo".

Tras sus dichos, intervino la diputada Camila Vallejo (PC), quien insistió en que "se está investigando la existencia de un eventual centro de detención ilegal y de un caso de tortura en una estación del Metro, en un espacio donde no había cámaras. Encontraron un bidón de alcohol y un paño para limpiar, lo que lleva a concluir que se limpió de rastros el lugar. Pero se encontraron amarras que usan los militares. Es lo que declaró el juez Urrutia". Este juez, que se constituyó en la estación de Metro Baquedano aunque no correspondía a su jurisdicción y, aparentemente, ni siquiera estaba de turno, es conocido por su posición de extrema izquierda y colaboró en este montaje. Sigue en el Poder Judicial.

Esa tarde, después de la sesión, el parlamentario socialista Juan Santana solicitó la renuncia de Andrés Chadwick, respaldado por su partido y el Frente Amplio. "Los asesinatos, la represión brutal que han ejercido militares y la información entregada por el INDH sobre el centro de tortura que ha funcionado en el Metro Baquedano, son motivos más que suficientes para que el ministro Chadwick dé un paso al costado", dijo a CNN Chile, que lo transmitió por televisión.

La representante de Comunes, Camila Rojas, a través de un tweet (que luego borró) señaló que "en la comisaría de la estación Baquedano se encontró sangre y amarras. Los jueces del séptimo Juzgado de Garantía dan cuenta de que se torturó. No puede quedar impune, no lo vamos a permitir".

Recordemos que según la institucionalidad chilena, los parlamentarios tienen fuero por las declaraciones que emitan en el ejercicio de su función. Todas las mentiras y calumnias que profirieron respecto a este caso no podrán ser perseguidas judicialmente. Así usaron los diputados citados, en este caso, una facultad destinada teóricamente a fortalecer la democracia.

Para el 27 de octubre, otras personalidades se habían sumado a la denuncia. La periodista Alejandra Matus replicó información sobre la investigación abierta por Fiscalía y escribió: "¿por qué no se constituye un fiscal o un juez ya en la Comisaría de Plaza Baquedano frente a las contundentes y escalofriantes denuncias de torturas y violaciones contra jóvenes manifestantes?".

Al final, Lüer nunca presentó una denuncia formal sobre el tema. En noviembre mantenía su versión de los hechos. Dijo a El Mercurio que había cerrado sus redes sociales debido a que recibió amenazas e insistió en que quería mantener un "bajo perfil". El 25 de octubre, Ciper daba por cierta la versión de David Muñoz, quien manifestó haber sido baleado a quemarropa por Carabineros en el acceso a la unidad policial. "El hecho ocurrió a la misma hora en que el primer denunciante, Nicolás Lüer, dice haber escuchado un tiro al interior del cuartel, cuando, según su versión, era golpeado por Carabineros dentro de las mismas dependencias", sostiene el reporte.

En noviembre hubo también reportes en redes sociales de un posible centro de tortura clandestino en el Mall Arauco Quilicura, lo cual fue desmentido por el centro comercial. En los días que rondaron al 23 de octubre, el rechazo a la institución de Carabineros se incrementó entre la población y el día 25 de octubre de 2019, ocurrió un hackeo en su plataforma que implicó la filtración de los datos privados de una cantidad importante de funcionarios de la institución, con expresa indicación de sus nombres, cédulas de identidad y sus domicilios particulares. Por esos días, también se acordó el envío de una avanzada de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al país, luego de una conversación telefónica entre la ex Mandataria y el Presidente Piñera.

El informe de la PDI, que investigó el caso, cita la declaración que Lüer hizo el 30 de octubre: "No vi al interior del lugar donde me agredieron sangre o personas heridas, mucho menos precintos plásticos como los que se utilizan para amarrar a las personas, enterándome sólo días más tarde que dicho lugar correspondía a una de las entradas de la 60° Comisaría de Carabineros". El mismo texto también da cuenta de incongruencias entre las versiones de Lüer y Muñoz; e indica que las agresiones denunciadas por ambos no ocurrieron a la misma hora, y que físicamente, Lüer no tenía las lesiones que había reportado.

Las consecuencias de estos actos fueron advertidas por el abogado Luis Hermosilla, que representó a Chadwick en el proceso de acusación constitucional. "Parte de los relatos que se fueron construyendo y fueron parte de un imaginario colectivo, porque aquí no sólo está esta realidad, también estaba esta otra realidad: la realidad de lo que circula y que vemos en los celulares", afirmó el abogado en la sesión en que la Cámara discutía el libelo contra el ex ministro, que finalmente terminó inhabilitado de la política durante cinco años.

Otras denuncias falsas

El día 8 de noviembre, través de redes sociales, una entidad que se identifica como Apoderadas Organizadas (@Apoderados.Org) denuncia que un niño, de nombre Nicolás, de 12 años, perdió su ojo por culpa de las "fuerzas asesinas del Estado" y sube una foto de un niño con un parche en el ojo derecho. Esto es reproducido en Twitter por Fernando Guzzoni, director y guionista de cine; también por ADN radio, que titula: "un niño de 12 años recibió un perdigón en el ojo por parte de Carabineros en Santiago", por soychile.cl, que informa que la Defensoría de la Niñez, a través de Patricia Muñoz, manifiesta su preocupación por estos hechos. Días después, María Eugenia del Pilar Cuevas acusa en redes sociales que el niño de la foto es su sobrino, que tiene un problema ocular y esa foto es antigua y no tiene relación alguna con manifestaciones. Por último, el niño…no se llama Nicolás.

La diputada comunista Camila Vallejos concurre los primeros días de abril a la 3ª Comisaría de Carabineros, acompañada por músicos y la joven Camila Miranda en una silla de ruedas y con parches en su rostro, reclamando que había sido golpeada por carabineros. Minutos más tarde, terminada la manifestación, a poca distancia de la Comisaría, según consta en fotos publicadas en redes sociales el 13 de abril, la joven Camila Miranda se levanta de la silla, camina y ella misma se saca los parches.

Mas uno de los hechos más graves se produce por la denuncia del estudiante de Medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, quien acusa que el 21 de octubre fue detenido por carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, quienes lo habrían violado y torturado. El episodio es relatado por Maureira al canal 24 horas y a T13, en una entrevista en este último canal que dura más de seis minutos en el noticiario central. El caso continúa siendo denunciado en esos términos por La Izquierda Diario y la Radio Juan Gómez Millas, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querella contra los carabineros acusados por Maureira. El caso sufre un vuelco cuando la jueza Silvia Caro, del 10º Juzgado de Garantía, revoca la medida de arresto domiciliario total que había decretado contra los carabineros, luego que la defensa de ellos presentara un informe del Instituto Médico Legal que descartaría la existencia de lesiones y de un médico sexólogo que desecha la supuesta violación. Maureira protagoniza otro hecho en la ciudad de Temuco el día 7 de diciembre, donde agrede a una funcionaria de Falabella, es detenido en la 2ª Comisaría de esa ciudad y vuelve a denunciar y gritar que está siendo torturado y violado, lo que es desmentido por sus propios familiares que lo acompañaban y por las cámaras de la Comisaría.

El Movimiento Salud en Resistencia, formado después del 18 de octubre por miembros de las Juventudes Comunistas de la Universidad de Chile, denuncia en varios medios que un estudio realizado por estudiantes de química de esa universidad detectó la presencia de soda cáustica en el agua del carro lanza aguas utilizado por Carabineros como antidisturbios, y conocido popularmente como "guanaco". El 16 de diciembre la información se entrega por ElSiglo.cl; soychile.cl y Latercera.com. Carabineros desmiente la acusación, que ya ha sido reproducida en canales de tele-

visión. Días después, el Colegio de Químicos AG señala que el "estudio" presenta falta de rigurosidad y vicios que invalidan sus conclusiones. La denuncia fue avalada en varios medios por los diputados Karol Cariola, Pamela Jiles, Giorgio Jackson, el alcalde Daniel Jadue y la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien llega a decir que se ha comprobado la acusación, según consigna Pauta.cl en una nota del día 28 de diciembre. Todos estos políticos piden concertadamente la salida del Director General de Carabineros, Mario Rozas.

Todos estos antecedentes ayudan a entender cómo, en un lapso tan corto de tiempo, el gobierno vio descender su apoyo en la población de manera drástica hasta alcanzar el 6% en diciembre de 2019, según la encuesta CEP. También son ilustrativos de la forma en que Carabineros de Chile, institución que ya traía problemas de imagen importantes, empieza a ser percibida por muchos chilenos como una policía que golpea y tortura a la gente a diestra y siniestra. Sin exculpar los actos que hayan cometido miembros de la Institución en esos días, que tendrán que ser sancionados según corresponda, no es justa la percepción que se formó la mayoría de los chilenos sobre Carabineros, institución que se vio enfrentada a un verdadero asesinato de imagen por acusaciones falsas como las que hemos mencionado, mientras cumplía una misión tan difícil y extenuante a partir del 18 de octubre.

Las acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior y el Presidente de la República

Andrés Chadwick fue destituido con argumentos basados en una falsedad, cual fue la supuesta existencia de torturas en la Comisaría de Carabineros de la Estación Baquedano del Metro.

Más allá de sus efectos prácticos, en esta decisión se mandó un claro mensaje al gobierno: la oposición sería impecable en impedir la represión de las manifestaciones públicas, "la calle", que les estaba permitiendo lo que las urnas no les habían concedido: la posibilidad de imponer sus políticas y programas al país, con el objeto de desmantelar la institucionalidad vigente. Al día siguiente, jueves 12 de diciembre, se votó en la Cámara

de Diputados la cuestión previa de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. El libelo fue impulsado por el Partido Comunista con el apoyo de diputados de todo el arco de la centroizquierda y buscaba destituir a Piñera, imputándole vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del estallido social. Además se le acusaba de haber comprometido "gravemente el honor de la nación" y de haber "infringido" la Constitución.

Por 79 votos contra 76, la Cámara de Diputados decidió no seguir adelante con la Acusación Constitucional contra el Presidente. Varios diputados de oposición, los que votaron en contra y algunos más, probablemente, consideraban excesiva la destitución del Presidente, que había intentado mantener el orden público y, de hecho, no lo había logrado por las restricciones con que debieron actuar las fuerzas policiales. Con todo, la votación de la oposición pudo haber contenido también un mensaje político: no se aceptaría la represión de las manifestaciones hasta el punto de detener la ofensiva política contra el gobierno. El gobierno del Presidente Piñera probablemente escuchó el mensaje y su dificultad para mantener el orden público de allí en adelante y hasta que la pandemia del Coronavirus impidió que continuaran las manifestaciones, así parece indicarlo.

La Acusación Constitucional imputaba al jefe de Estado, al igual que a Chadwick, responsabilidad política en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones sociales que se expandieron en todo el país desde el pasado 18 de octubre. En definitiva, la acusación no prosperó por no contar con los votos de los DC Matías Walker, Jorge Sabag, Miguel Ángel Calisto y Manuel Matta; los miembros del comité PR, Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza, Pepe Auth; y el independiente René Alinco. Sus nombres deben recordarse, pues ellos no estuvieron disponibles para distorsionar nuestra institucionalidad hasta el punto de destituir al Presidente de la República, quien no hacía otra cosa que ejercer sus facultades constitucionales. Con todo, es muy significativo que la gran mayoría de los diputados de la oposición hayan estado dispuestos a dar su voto para destituir al Presidente democráticamente elegido hacía dos años, todo para lograr sus objetivos políticos.

Capítulo 6

El contexto global y la confianza en las instituciones

"La centroizquierda comenzó a radicalizarse y a entrar en la lógica de los cambios refundacionales cuando vio que en Chile se hacía viable un gobierno democrático de derecha que podía llegar a las urnas con mayoría absoluta".
Max Colodro

Capítulo 6:
El contexto global y la confianza en las instituciones

Hasta ahora nuestra indagación sobre los orígenes de las violentas manifestaciones de octubre de 2019 en Chile se ha centrado en aspectos locales. Sin embargo, tenemos que recordar que ese año en varios países de la región se produjeron manifestaciones, marchas, concentraciones, disturbios, saqueos e incluso actos vandálicos. Es el caso de Ecuador, Colombia y Bolivia.

Sin embargo, como señala el cientista político Miguel Ángel Martínez, en un trabajo publicado en **Libertad y Desarrollo**[1], éste no ha sido un fenómeno exclusivamente latinoamericano o concentrado en el transcurso del último año. En España, el año 2019 hubo grandes manifestaciones y disturbios en Cataluña y también recordamos el movimiento de los "indignados" del año 2011. En Estados Unidos surgió (Occupy Wall Street) después de la crisis financiera de 2008. Venezuela ha tenido dos largos ciclos de protestas en 2014 y 2017; en Hong Kong se produjeron protestas durante todo el año 2019 y parte del 2020. Nicaragua las tuvo el 2018 y Francia, con el movimiento de los *gilets jaunes*, las ha experimentado con mayor o menor fuerza desde octubre de 2018.

Esto nos recuerda que el contexto general en el cual vienen teniendo lugar las movilizaciones de la última década es una sociedad global cada vez más interconectada. De este modo, a los factores locales que hemos analizado latamente hasta ahora, debemos agregar una mirada sobre tendencias globales tales como ideas e ideologías, movimientos generacionales, innovaciones tecnológicas y agendas políticas, cuestiones que

1 Libertad y Desarrollo, Serie Informe Sociedad y Política, Enero de 2020. "Protesta, movilización y crisis política en Iberoamérica: factores comunes de una crisis transnacional." Miguel Ángel Martínez M.

si bien no han estado completamente ausentes de nuestro análisis, no se han examinado de manera sistemática. Si bien es cierto que cada movilización debe ser estudiada en el marco de sus circunstancias concretas y particulares, es posible y necesario identificar una serie de elementos comunes y generales que permiten completar el análisis mirando estas crisis desde una perspectiva transnacional.

Estos factores que ayudan a entender la crisis se inscriben en una categoría que podríamos denominar estructural y conviven y, de alguna manera compiten, en el típico debate de las ciencias políticas y sociales, con otros factores tales como los agentes que participan activamente en los movimientos sociales y sobre los cuales hemos abundado en los capítulos anteriores.

Según el marco conceptual utilizado por Miguel Ángel Martínez en **Protesta, movilización y crisis política en Iberoamérica: factores comunes de una crisis transnacional,** en el estudio de protestas populares y movimientos sociales, siguiendo a autores como Charles Tilly[2], los grandes ciclos de protesta y movilización social están conformados por una serie de factores relativamente independientes que pueden combinarse entre sí de formas muy diversas, complejas y muchas veces inesperadas. Como todo fenómeno que se da en la forma de una acción colectiva, no se puede atribuir su desarrollo a una única racionalidad; por el contrario, en este tipo de hechos y dinámicas sociales hay una concatenación de múltiples voluntades y racionalidades particulares, las cuales generan resultados que, a menudo, escapan al control de cualquier intento de dirección centralizada. En lo que sigue dedicaremos algún espacio a mirar esas tendencias globales.

La generación de los *millennials*

Para el análisis de las tendencias globales que han tenido influencia en los movimientos de la última década, podemos partir por constatar que

2 Tilly, Charles y Tarrow, Sidney (2007): Contentious Politics. Boulder: Paradigm Publishers.

hace treinta años se inició en Iberoamérica y otras regiones del mundo un período de relativa paz y crecimiento, con un panorama mucho más alentador que el que predominó durante las tres décadas anteriores (años 60, 70 y 80 que fueron períodos de mucha inestabilidad y conflicto). Después de la emblemática caída del Muro de Berlín, que de alguna manera simboliza el inicio de las tendencias positivas que señalábamos, una nueva generación de jóvenes ha venido creciendo. En general, puede afirmarse que esa generación no ha sufrido los duros regímenes y conflictos que el mundo -y América Latina en especial- experimentaron durante las décadas anteriores. Y aunque estos jóvenes se enfrentan a desafíos nuevos y desconocidos, no han tenido que enfrentar el tipo de dificultades que vivieron sus padres.

Un grupo importante de ellos, especialmente en nuestro continente, han podido gozar de condiciones de vida y ventajas no vistas por sus predecesores. Algunas de estas condiciones que caracterizan a esta generación --los llamados *millennials*- son las posibilidades que les da haber vivido en sociedades democráticas, con una alimentación más completa y regular, con mejores condiciones de acceso a la educación (en muchos casos se trata de los primeros integrantes de sus familias en recibir educación universitaria), mejores condiciones de movilidad y un más amplio acceso a la tecnología, la información y a la comunicación.

Las generaciones que les precedieron tendían a preocuparse más por cuestiones elementales, tales como la seguridad, la alimentación y la supervivencia en general. Esas generaciones tenían valores como la moderación, el ahorro y el sacrificio; sus preocupaciones en materia de derechos humanos se concentraban en los de primera generación (derechos civiles y políticos) y segunda generación (socioeconómicos).

Los millennials, en cambio, consideran como algo natural algunas de las condiciones de vida alcanzadas por el progreso material de los últimos treinta años y sus preocupaciones principales, en consecuencia, no van por allí, sino que tienen que ver con la posibilidad de ser reconocidos en su subjetividad, de poder expresarse y participar en los asuntos comunes,

cuestión que Carlos Peña ha hecho notar en nuestro país a la hora de referirse a los jóvenes que participaron en las manifestaciones de octubre, como lo consignamos en el capítulo tres. Los jóvenes de hoy se muestran también más preocupados por los llamados derechos humanos de tercera generación, que tienen que ver con cuestiones socioculturales y medioambientales.

Otra tendencia global que observamos es que el cambio cultural que están promoviendo los *millennials* convive y se nutre de una revolución tecnológica acelerada que se desarrolla paralelamente y tiene un alto impacto sobre nuestras vidas. Miguel Ángel Martínez nos hace ver en **Protesta, movilización y crisis política en Iberoamérica** un fenómeno interesante cuando dice: "la interacción entre las facetas material e inmaterial del cambio cultural está dando pie a dinámicas absolutamente novedosas, cuyo impacto es aún imprevisible en toda su extensión. Y si bien sus facetas más visibles se relacionan con la irrupción combinada de los "teléfonos inteligentes" y las "redes sociales", lo que subyace bajo estos adelantos técnicos concretos es la tendencia generalizada hacia **la sustitución de estructuras sociales permanentes y jerarquizadas, por otras más efímeras y horizontales".**

Es bastante evidente que en los sucesos que comenzaron el 18 de octubre en Chile, tanto los jóvenes como las redes sociales han sido protagonistas fundamentales y ello responde a una tendencia global que se presenta en este tipo de manifestaciones en distintas partes del mundo. Así, un elemento decisivo de nuestro tiempo podría ser la rebelión desde las redes contra las jerarquías.

Las instituciones en Chile y la confianza

Esta reflexión nos hace recordar que el año 2012, en un libro[3], cuyo principal objetivo era indagar si el malestar que se atribuía a la población chilena a raíz de las manifestaciones estudiantiles del 2011 era síntoma

3 Larrain, Luis. "El Regreso del Modelo" Ediciones LyD, 2012.

de un rechazo mayoritario de los chilenos a un modelo de economía de mercado, utilicé el término "desintermediación". Afirmaba entonces que las sociedades modernas, caracterizadas por una democracia representativa y una economía de mercado, utilizaban la "intermediación" como mecanismo habitual de interlocución entre los ciudadanos y el poder, realizada por varias instituciones de la sociedad. En el caso de la política, los intermediarios tradicionales eran los partidos políticos y el Congreso; en el ámbito de la información, los medios de comunicación; en el campo del acceso a bienes y servicios, la tarea la llevaban adelante las empresas, siendo el dinero también un medio de intermediación por excelencia. En el terreno espiritual quienes tradicionalmente intermedian son las iglesias y en nuestro país, en particular, la Iglesia Católica.

Enseguida dábamos en ese texto varios ejemplos de cómo en distintos ámbitos se ha producido una "desintermediación" del poder. Los intermediarios, sean ellos políticos, medios de comunicación, empresas o iglesias, han perdido reputación y la confianza de los ciudadanos, razón por la cual intentan participar directamente en la discusión pública sin intermediación. La tecnología ha facilitado esta tendencia y las redes sociales son unas de las expresiones más evidentes de ello.

Un año después, en el 2013, Moisés Naím publicaba su estupendo ensayo ***El Fin del Poder***[4], donde además de documentar este fenómeno de desintermediación con múltiples ejemplos, se explayaba sobre la fragmentación del poder y el surgimiento de "micropoderes" más eficientes que las estructuras pesadas de poder. El libro de Naím fue muy certero en advertirnos acerca del desafío a la autoridad y a las instituciones que este fenómeno implicaba y hoy estamos comprobando que la dimensión de estos cambios y sus consecuencias son mayores a lo que podríamos haber imaginado.

En los capítulos anteriores nos hemos referido a varios agentes que han tenido activa participación en los hechos que siguieron al 18 de octubre,

4 Naím, Moisés. "El Fin del Poder" Random House Mondadori, 2013.

identificando a jóvenes universitarios radicales, políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio, periodistas y "medios de comunicación" de izquierda que actúan en redes sociales.

Hemos intentado también, en los primeros capítulos, examinar cuestiones más estructurales relacionadas con la economía, la pobreza, la desigualdad y las condiciones sociales en que han vivido los chilenos en los últimos años, con una especial atención a la clase media. En todos estos ámbitos parece haber un factor común: la pérdida de confianza. Muchas de las visiones sobre los sucesos de octubre del 2019 apuntan al deterioro de la confianza en las instituciones tradicionales de nuestro país, que se aceleró dramáticamente en los últimos años. Entre estas instituciones cabe mencionar a los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno, el Poder Judicial, los empresarios, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y de Orden y las iglesias. Todas ellas han sufrido caídas en su reputación que se reflejan en el poco aprecio y confianza que la población en general tiene hacia ellas.

La serie de encuestas Bicentenario de la Universidad Católica desde el año 2008 en adelante, a las que nos hemos referido en el capítulo uno, permiten apreciar este deterioro. Así, por ejemplo, el gobierno tenía el año 2010 mucha confianza o bastante confianza del 15% de la población, que ya era bajo, pero desciende entre los años 2015 y 2019 a valores que fluctúan entre 4 y 7%. Los partidos políticos, a los que sólo un 4% de la población les tenía mucha o bastante confianza en 2011, bajan a 2% en 2015 y se han estabilizado en el 1% hasta el 2019, lo que equivale a decir que nadie confía en ellos. Los parlamentarios, que ya exhibían cifras bajas de 3% de mucha confianza o bastante confianza el 2011 y 4% el 2013, de allí en adelante sólo concitan entre el 2% y 1% de mucha o bastante confianza hasta el 2019. Los tribunales de justicia, que mostraban 7% de mucha o bastante confianza el 2015, y 6% el 2017 y 2018, han subido levemente al 9% el 2019, en lo que es una excepción, pero aún con niveles absolutos muy bajos.

Por su parte las empresas, que tenían un 16% de mucha o bastante confianza el año 2013, bajan a niveles de 8% el 2015, 5% el 2017, 9% el 2018

y 10% el 2019. Por último, las Fuerzas Armadas, que tenían 49% de mucha o bastante confianza el 2010, caen a 26% el 2015, 18% el 2017 y 2018 y 23% el 2019. En este último caso, la caída debiera explicarse en buena medida por las revelaciones y consecuentes procesos judiciales que han afectado a ex comandantes en jefe del Ejército, y en particular, al General Juan Miguel Fuente Alba, a quien se le ha objetado el uso de altos montos de gastos reservados en consumos personales, además de otros fraudes cometidos al interior de la institución.

Como consignamos en el capítulo dos al mencionar el artículo de Lucía Dammert en el libro ***Hilos Tensados,*** Carabineros de Chile es otra de las instituciones que ha sufrido una fuerte baja en su reputación. Ello se debe, entre otras cosas, a situaciones de irregularidades financieras y a sus actuaciones en La Araucanía en que falsificó evidencia y ocultó información; pero a ello se ha agregado ahora, como lo vimos en el capítulo cuatro, el implacable ataque de grupos de extrema izquierda que se han ensañado con ellos a partir del 18 de octubre y los han transformado en un blanco para sus acciones de propaganda.

José Joaquín Brünner, en una columna publicada en **El Líbero**[5] el 23 de octubre, vale decir unos pocos días después del estallido, describe el proceso mediante el cual la protesta se convierte en violencia y luego afirma que en América Latina hace rato que la democracia parece haber perdido **la batalla por el corazón y la mente de la gente joven.** Cree que hay razones de fondo para explicar este fenómeno y nos advierte que la falta de apego a la democracia y sus instituciones no es un fenómeno chileno, ni tampoco reciente, sino que viene registrándose durante al menos una década.

El autor se manifiesta preocupado por esta tendencia, lo que se refleja muy claramente en el siguiente párrafo de su artículo: "por último, la democracia de las prácticas y los intersticios se sostiene sobre **una conciencia plural** de valores, ideas e ideales formada en la familia, el colegio, las

---

5 Brünner, José Joaquín. "Democracia, violencia y perspectivas futuras" El Líbero 23 de octubre de 2019.

instituciuones de educación superior y reproducida a través de los medios de información y comunicación, las redes sociales (digitales y asociativas de la sociedad civil) y el espacio público deliberativo. Es allí, en la conciencia de las personas -niños y adultos- y en el ejercicio autónomo de sus conductas y opiniones, que la democracia asienta su hegemonía o comienza a perderla y a desmoronarse, a medida que retrocede en el lenguaje y en las interacciones civiles, en los canales institucionales y las manifestaciones de acuerdos y desacuerdos, y en los comportamientos de protesta".

La formación intelectual de muchos de los jóvenes chilenos ha tenido lugar en buena medida en las facultades de ciencias sociales, humanidades y filosofía de las universidades chilenas, que como hemos señalado antes (capítulo dos), tienen una indisputada primacía del pensamiento de izquierda entre sus profesores. Influencias desde universidades extranjeras, por su parte, transmiten algunas tendencias allá imperantes, como el pensamiento políticamente correcto y los "espacios protegidos" que en la práctica imponen restricciones a la libertad de expresión, como hemos relatado en el capítulo tres. En esa misma línea, lo que aparece con fuerza hoy en los medios de comunicación son las políticas de la "cancelación", donde periodistas "progresistas" vetan la presencia de ciertas ideas o incluso personas que les parecen ofensivas para lo que ellos consideran políticamente correcto. En una interesante columna en el Diario Financiero[6] que provocativamente titula ***"La cultura de la cancelación nos vuelve tontos"***, la primatóloga Isabel Behncke critica esta tendencia que conlleva una supuesta superioridad moral y prohibe la participación pública de cualquier persona acusada de decir o hacer algo ofensivo. Agrega que esto implica la cancelación de la curiosidad y del pensamiento crítico. El castigo por cuestionar.

Así es como las universidades, centros de pensamiento por excelencia, son también instituciones que han abandonado muchas veces su misión fundamental. Incluso en nuestro país se han transformado en lugares para

6 Behncke, Isabel. "La cultura de la cancelación nos vuelve tontos" Diario Financiero, 2 de agosto de 2020.

la captación y formación de cuadros de la izquierda, según José Rodriguez Elizondo.

Los políticos y el fin del sistema binominal

Siendo los políticos y los parlamentarios parte de los grupos que menos confianza generan en la población, resulta necesario intentar algunas explicaciones particulares para ellos, más allá del desprestigio y caída de confianza en las instituciones en general.

Para ello es necesario fijar la atención en el Congreso y los partidos políticos, que es desde donde se hace política en una democracia representativa como la chilena, siguiendo el modelo de la gran mayoría de las democracias del mundo occidental.

En ese examen cobra mucha importancia el sistema electoral con que se eligen las autoridades. El sistema electoral binominal, que rigió en nuestro país entre 1990 y el 2015, es considerado un sistema mayoritario, en cuanto tiende a favorecer la representación de los principales grupos políticos en la sociedad, en desmedro de colectividades y tendencias pequeñas. Esto, porque cada distrito electoral elegía solamente dos diputados y cada circunscripción dos senadores, de modo que era muy difícil para un partido pequeño alcanzar el numero de votos para ser elegido diputado o senador. Si bien es cierto que objetivamente este sistema tiene una desventaja desde el punto de vista de la representatividad, acarrea una indudable ventaja en materia de gobernabilidad. El sistema lleva a la moderación, pues para ser elegido hay que representar una opinión más bien mayoritaria y no una extrema. En Chile llevó a la conformación de dos grandes bloques, uno de centroderecha y uno de centroizquierda, con predominio de las fuerzas más moderadas en cada bloque. Los candidatos de cualquiera de las dos coaliciones que tomaran posturas muy extremas tenían el riesgo de ser claramente superados por candidatos que tenían posiciones más moderadas. Dos de las más antiguas y respetadas democracias en el mundo, Inglaterra y Estados Unidos, tienen sistemas electorales mayoritarios, sólo que en el caso de ellos los distritos son uninominales,

se elige sólo un parlamentario. Inglaterra tiene un sistema de gobierno parlamentario y Estados Unidos un régimen presidencial.

Hay abundante literatura que nos habla de las dificultades que tienen los sistemas proporcionales para convivir con regímenes presidenciales como el chileno. Así, autores como Bruce Ackerman han señalado que "la forma más tóxica de división de poderes es la combinación constitucional de un Presidente popularmente electo junto con un Congreso electo por un sistema de representación proporcional"[7]. Durante los años de vigencia del sistema binominal, Chile vivió el período de mayor progreso de sus historia, y los frutos de ese progreso llegaron a todos los grupos sociales. Que todavía queda un largo trecho por recorrer está claro. De partida, un millón y medio de personas que aún viven bajo la línea de la pobreza, pero el sistema contribuyó, indudablemente, a este período de mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos.

La falta de deferencia de la política chilena hacia los datos desvió, desgraciadamente, la atención sobre la esencia de este sistema y logró instalar el mito de que el sistema binominal favorecía a la derecha y era uno de los enclaves autoritarios que habían quedado instalados en 1990, al reinaugurarse la democracia en nuestro país. En varias publicaciones[8], Libertad y Desarrollo refutó esa aseveración, demostrando con datos cómo el sistema electoral binominal favorecía a las coaliciones mayoritarias y en particular a la Concertación. Mas la política chilena y gran parte de la prensa tenían oídos sordos para estas verdades y preferían seguir alimentando mitos. En efecto, con los datos de las elecciones parlamentarias entre 1989 y 2013, es posible refutar la supuesta ventaja que el sistema binominal le habría dado a la centroderecha e incluso, afirmar lo contrario. El binominal, a nivel agregado, ha favorecido más a la Concertación que a la Alianza si se analizan los índices de desproporcionalidad electoral generados por el sistema, es decir, la diferencia entre el porcentaje de escaños y el por-

7 Ackerman, Bruce. La Nueva División de Poderes. Editorial Fondo de Cultura Económica, 2007.

8 Libertad y Desarrollo, Mitos y Evidencias del sistema Binominal, TP N° 1032, septiembre 2011; Reemplazo del sistema Binominal, TP N° 1172, agosto 2014.

centaje de votos que recibe una misma coalición. La Concertación se favoreció del sistema en las elecciones de diputados de los años 1989, 1997, 2001 y 2013, donde con un 47,77% de los votos, la Nueva Mayoría obtuvo el 55% de los escaños. Es decir, en 4 de las 7 elecciones desde 1989 a 2013, la centroizquierda ha sido más beneficiada que la centroderecha por el binominal.

Muchos de los expertos electorales conocen estos datos y también saben que es la manera correcta de medir el nivel de desproporcionalidad que un sistema genera, pero por el clima de opinión imperante, el mito se ha impuesto por sobre la realidad. Pareciera que una vez más, el Partido Comunista, que sí resultaba perjudicado por un sistema binominal por ser un partido pequeño, convenció a sus actuales aliados de modificar el sistema y hoy tiene gran protagonismo en el Congreso.

La discusión sobre la supuesta ventaja del binominal para la derecha oscureció el tema de fondo y dejó ocultos los previsibles problemas que traería cambiarlo por un sistema proporcional. Como lo revela la literatura sobre sistemas electorales y los documentos que hemos citado, el cambio a un sistema proporcional, como el que ahora tenemos, si no se realizaba con el cuidado suficiente, provocaría fragmentación y proliferación partidaria, incentivaría liderazgos personales y caudillismos, sin que existiera una mirada nacional a la política, lo que debilitaría a los partidos políticos y en particular, al centro.

La eficacia gubernamental, asimismo, se vería afectada también por la baja responsabilidad individual de los parlamentarios hacia sus electores, ya que serían elegidos en distritos y circunscripciones de mayor extensión y varios de ellos con votaciones muy bajas.

Recordemos que la Ley N° 20.840 de mayo de 2015 fue la que puso fin al sistema binominal. Estableció que cada distrito elegiría entre 3 y 8 diputados y rebajó el número de distritos de 60 a 28. Además, aumentó el número de diputados de 120 a 155. En el Senado, por su parte, se definieron 15 circunscripciones electorales que elegirían entre 2 y 5 senadores.

El número total de senadores aumentó de 38 a 50. Es decir, aumentó precisamente la extensión de cada distrito o circunscripción y muchos de los parlamentarios fueron elegidos en sus cargos con votaciones que apenas alcanzaban al 1 o 2% del electorado.

Eso es a grandes rasgos lo que ha pasado en el Congreso chileno. Discusiones de buen nivel, donde había liderazgos reconocidos, han sido reemplazadas cada vez más por espectáculos degradantes, donde parlamentarios que habitualmente han sido elegidos con bajas votaciones buscan darse a conocer con *performances* que son más propias del mundo del espectáculo, y lo que es más grave, con propuestas radicales y poco estudiadas que no en pocas ocasiones terminan convertidas en leyes.

El cambio del sistema electoral no es, por supuesto, el único responsable de la baja calidad de la labor parlamentaria y de su desprestigio entre los chilenos. Siendo Chile uno de los tres países de menor ingreso per cápita de la OCDE, los parlamentarios chilenos figuran como los que reciben un mayor pago de todos los países de esa organización, con gran distancia sobre los de Estados Unidos, Italia y Japón que los siguen. Si a ello agregamos el escándalo que significó la revelación de que un número muy importante de ellos recibió aportes irregulares para sus campañas políticas, provenientes de connotadas empresas de nuestro país, se entiende mejor la baja valoración y confianza que tienen entre la ciudadanía.

Tampoco queremos decir que no había necesidad alguna de cambiar el sistema electoral. Algunas desventajas del sistema binominal, que en general provenían de la forma en que se reglamentaron los pactos electorales, empañaban muchas de las cualidades que hemos atribuido a los sistemas mayoritarios. La principal crítica que se le hacía, y es válida, es que las cúpulas de los partidos podían, por su designación de los candidatos, prácticamente nominar a quienes serían elegidos. Sin embargo, eso pudo haberse corregido de otra manera[9], sin llegar al extremo que vivimos hoy, en el cual los partidos políticos prácticamente no tienen peso alguno en

9 Bellolio, Álvaro y Ramírez, Jorge. Sistema Binominal y Modernización Electoral, Septiembre 2011, Serie Informe N° 123 Libertad y Desarrollo.

las decisiones, y el Congreso ha empezado a legislar al son de la música que ponen los parlamentarios de posiciones más extremas o aquellos que tienen propuestas más populistas.

Liderazgos: la crisis de las izquierdas renovadas y la falta de vocación política de la derecha

No han sido solamente cambios en las reglas del juego electoral y la sensación de impunidad de los políticos lo que los llevó al estado de desprestigio de la actividad con que nos sorprendió el 18 de octubre. Ha existido también falta de liderazgos que tomen la posta de quienes condujeron con éxito la transición a la democracia. Nos referiremos de manera breve a ello, pues no es nuestra intención hacer un análisis acabado de la historia política reciente, pero sí nos interesa mencionar, al menos, aquellas cuestiones que parecen insoslayables a la hora de analizar los sucesos desde el 18 de octubre.

En una columna titulada **"Los Silencios del Estallido"**publicada en El Mercurio el viernes 31 de enero de 2020, José Rodriguez Elizondo se refería a la omisión que hay en nuestra sociedad a la hora de considerar el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Rodriguez Elizondo, abogado, columnista, escritor y director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, entrevistado por **El Líbero**[10] días después, señaló: **"la crisis de las izquierdas renovadas o socialdemócratas está en la base del estallido".** Agregaba que tras el golpe, la renovación de las izquierdas permitió que parte de ellas viera claro ese pasado, asumiera que cualquier democracia es mejor que una dictadura y que había que cuidar la fuerza del Estado; pero ese encantamiento duró lo que duró la Concertación. Atribuye el que no se haya podido mantener el orden interno, algo básico para el funcionamiento de la democracia, a que sin una buena docencia ciudadana es muy difícil internalizar la convicción de que la policía es un factor vital para la paz y seguridad. "Es más fácil aceptar las viejas tesis clasistas que la encasillan como guardián de los "cuicos"".

10 El Líbero, 2 de febrero de 2020, entrevista a José Rodriguez Elizondo.

Una opinión similar en relación a este punto tiene el filósofo Max Colodro, columnista de La Tercera y académico de la UAI. Militante comunista en los ochenta, desde el año 1999 en la campaña presidencial de Ricardo Lagos se incorporó al PPD. Pero su militancia duró solamente hasta el 2010. En una entrevista de la periodista Paula Coddou en **El Mercurio**[11], Colodro dice respecto a su salida del PPD: "Sentí que el mundo de la Concertación había perdido la batalla por la renovación de su proyecto, iniciando una verdadera demolición de lo que había sido el Chile de la transición. El proyecto de la línea centroizquierda social, demócrata y moderada estaba a partir de ese momento muerto y enterrado". Consultado acerca de la razón para que esto ocurriera, Max Colodro responde con una crudeza casi brutal, de una honestidad intelectual pocas veces vista en la política chilena. **"El factor determinante, a mi juicio, fue la alternancia del poder. La centroizquierda comenzó a radicalizarse y a entrar en la lógica de los cambios refundacionales cuando vio que en Chile se hacía viable un gobierno democrático de derecha que podía llegar a las urnas con mayoría absoluta".**

Esta explicación de Max Colodro es complementaria, a mi juicio, con la de Lucía Santa Cruz, que sitúa en el fracaso del gobierno de la Nueva Mayoría el origen de los hechos violentos que asolaron a Chile a partir de octubre de 2019, y sobre la cual nos extendimos en el capítulo tres. Lucía pone el énfasis en la radicalización del proyecto de izquierda a partir de la idea que una sola cuestión, la desigualdad, era responsable de los problemas de Chile. Max va a una cuestión más prosaica: el proyecto socialista no admitía alternancia en el poder en un diálogo socialdemócrata-liberal, había que llegar al objetivo a como diera lugar.

Colodro agrega que considerar que en Chile no es viable un gobierno de derecha no es real, porque la derecha ha ganado elecciones y además, aceptar esa tesis es el fin de la democracia. En su opinión, la oposición no está hoy en predisposición ni en condiciones de cumplir los acuerdos y da como ejemplo el acuerdo fiscal de US$ 12.000 millones en 24 meses para enfrentar el Coronavirus, que se rompió a los pocos días de firmado con la aprobación de la ley que autorizó el retiro de parte de los fondos

11 El Mercurio, 2 de agosto de 2020, entrevista a Max Colodro.

de pensiones. Interpreta, entonces, el cambio de gabinete realizado por el Presidente Piñera a fines de julio, en que designó a Víctor Pérez como ministro del Interior, como una simple constatación de parte del gobierno de que al frente, la oposición no está en disposición de cumplir acuerdos.

Otro testimonio valioso acerca de este tema es el que nos entrega Sergio Muñoz Rivera. En una columna titulada **¿Hacia dónde va la oposición?** publicada en El Mercurio el 5 de agosto, se refiere críticamente a una declaración de todos los partidos y bancadas parlamentarias de oposición difundida por la presidenta del Senado, Eliana Muñoz, tras la cuenta presidencial del 31 de julio. Señala que los firmantes aparecen alineados en una táctica de confrontación y polarización que suponen les traerá dividendos electorales. Luego se pregunta si piensan gobernar juntos esos partidos, que por ahora lo único que hacen es hacer lo posible porque le vaya mal al gobierno. Añade que la declaración alude varias veces al 18 de octubre. Se pregunta ahora qué es lo que más les gusta del 18 de octubre. ¿Los saqueos gozosos, el ataque al Metro, Plaza Italia, las iglesias quemadas? Califica de advertencia turbia la afirmación de que el estallido "sigue latente". Termina criticando a la DC por su irrelevancia tan lejana a lo que encarnó en el pasado; al PPD por haber perdido sus reservas de moderación en la competencia de quién es más izquierdista y dice que del PS y el PR cabría esperar al menos, memoria. Concluye diciendo que la competencia política no tiene por qué hacerse a costa del interés colectivo.

Aún no hay suficiente distancia para entender por qué la Concertación renegó, de esa manera, de un período en que se ha producido el mayor progreso en la calidad de vida de los chilenos. Algunas de las tendencias que hemos examinado en relación a la sentimentalización de la política y la proliferación de las redes sociales y sus efectos en la juventud nos dan algunos indicios.

Una derecha sin vocación política

Así como resulta inexplicable que la Concertación reniegue de su pasado, es difícil de explicar también la falta de vocación de la centroderecha para

construir un proyecto político propio. Es cierto que el sector en el último tiempo ha llegado al poder siempre de la mano de Sebastián Piñera y que el Presidente no parece haber puesto un particular empeño en construir, desde la política, ese proyecto. Fue una crítica que se le hizo terminado su primer gobierno y al iniciar este segundo mandato al menos verbalizó su intención de prolongar su proyecto en un gobierno de centroderecha que le sucediera. Sin embargo, el funcionamiento de los partidos políticos de la centroderecha, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, especialmente los dos más grandes, no ha sido una base sólida sobre la cual construir ese proyecto. Chile Vamos tampoco ha funcionado como una coalición efectiva. No vamos a ahondar aquí en las causa para que ello ocurriera, pues su análisis podría dar origen a otro ensayo como éste. En cualquier caso, las diferencias que han mostrado sus parlamentarios recientemente a raíz de las medidas para enfrentar el Coronavirus, dan cuenta de un insuficiente trabajo político para definir los contornos de este proyecto, sus prioridades y la diversidad que es capaz de admitir.

Pero esta falta de vocación política de la derecha parece tener raíces más profundas. En un interesante y ameno libro denominado ***Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición***[12], el filósofo Daniel Mansuy el año 2016 se refería al período que sigue a la llegada de la democracia en 1990. Afirma que en una suerte de acuerdo tácito, ni la Concertación ni la centroderecha se hicieron cargo de las contradicciones y tensiones sobre las que se construyó nuestra democracia. Así por ejemplo, se seguía una política económica de continuidad a la del ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, pero eso era negado por el oficialismo en su discurso. Había, según Mansuy, una brecha entre la acción y el discurso, y acusa tanto a progresistas, como a libertarios y economicistas de suscribir una visión desanclada de lo humano que agrava los problemas de la modernidad, tal como los había denunciado Raimond Aron. Ese es un tema importante que vale la pena discutir en mayor profundidad. Sin embargo, para efectos de lo que pretende este libro, que es explicar el 18 de octubre, hay que concederle completamente el primer punto a Daniel Mansuy:

12 Mansuy, Daniel. "Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la Transición". IES Chile, 2016.

la brecha entre la acción y el discurso fue evidente. La acción política de la centroderecha evidentemente descuidó los elementos conceptuales tras su visión, cuando no los ocultó. Algo similar puede decirse de muchas de la políticas de los gobiernos de la Concertación.

Respecto a si prevalece una opción desanclada de lo humano en ciertas visiones, progresistas, libertarias y economicistas, ello sería motivo de una muy interesante discusión. Por ejemplo, Mansuy atribuye a la adhesión irrestricta al mercado y a un concepto de libertad negativa, según la definición de Isaiah Berlin, limitaciones a la hora de considerar los fenómenos políticos. Son cuestiones cuya discusión tiene gran trascendencia para el futuro.

En cualquier caso, no ha existido, especialmente tras el libro de Mansuy, falta de debate en la derecha acerca de las diferentes visiones sobre un proyecto para el país. Una creciente actividad de centros de estudios, libros y otras publicaciones han proliferado en el último tiempo. Nuevos centros de pensamiento y fundaciones se han creado o han crecido en la última década, aunque es un horizonte de tiempo demasiado corto para tan importante tarea. Quizás lo que ha habido menos son instancias de diálogo entre técnicos y políticos. Parece haber, no sólo en la derecha, rutas divergentes entre tecnócratas y políticos y muchas de las cuestiones que hemos tratado en este ensayo tienen que ver con ello. Desde las redes sociales, a la irrupción de los sentimientos en la política, la búsqueda de sentido de las nuevas generaciones, la emergencia del populismo en la política, entre otras tendencias y realidades, pueden extraerse claves para entenderlo.

Como autocrítica, desde el mundo de las políticas públicas debemos decir también, que pudo primar en nosotros una suerte de comodidad con la forma en que se debatían y negociaban entre la centroderecha y la centroizquierda las políticas y las reformas a nuestra institucionalidad. Los resultados que estaban a la vista y mostraban un evidente aumento del bienestar entre todos los grupos de la sociedad chilena eran satisfactorios desde un análisis objetivo, pero quizás no lo eran tanto desde las subjetividades de cada uno de los chilenos, como puede observarse hoy con más claridad. En casi todos los diagnósticos acerca de las causas del 18 de

octubre, provenientes de personas de distintos pensamientos, se reconoce que la búsqueda de sentido en muchos grupos de la sociedad chilena no ha sido debidamente atendida. Si la interfaz entre la técnica y la política hubiese funcionado mejor, pudo haberse advertido antes esta realidad.

También influyó, en el caso de la derecha, la ilusión de ganar el poder en las elecciones en que Joaquín Lavín perdió estrechamente con Ricardo Lagos en 1999 y la realidad de los dos triunfos de Sebastián Piñera que lo llevaron a la presidencia. Estos eventos pudieron dar la impresión que la centroderecha tenía atributos y credenciales suficientes para disputar el poder político con la centroizquierda y desviaron la atención sobre sus carencias. El déficit de política no se cerró, no se comprendió que el progreso de la centroderecha en política era relativo y no absoluto, más producto de los errores y carencias de los adversarios, que de méritos propios. No se ha construido un proyecto político de largo plazo, con ideas propias, pero también con formas de comunicarlas accesibles para la gente.

Podríamos abundar en el tema, pero tenemos otras instituciones que examinar. Para resumir algunos de los elementos más importantes en que tenemos que trabajar, yo destacaría dos cuestiones que ya hemos mencionado y que interpelan a la centroderecha y a la centroizquierda, respectivamente. La primera, que enunciamos en el capítulo uno, es que el modelo funciona muy bien en quinta velocidad, pero no hemos trabajado lo suficiente en lo que hay que hacer cuando ello no ocurre. La segunda, que hemos visto recién, es que un número demasiado importante de nuestros adversarios no acepta la alternancia en el poder y es capaz de tolerar la violencia para impedirla. Como puede apreciarse, muchas de las respuestas a estos problemas deben venir de la política.

Los abusos empresariales

Los empresarios fueron otro de los grupos de la sociedad cuya reputación se vio fuertemente afectada, según muestran las encuestas. Contribuyeron a ello varios factores. Uno de los principales fue la revelación que en algunas industrias de consumo masivo las empresas dominantes se coludieron

durante largos períodos de tiempo para afectar los precios de sus productos, evitando así la libre competencia y perjudicando a los consumidores al cobrarles precios más altos que los que habrían prevalecido en ausencia de esos acuerdos monopólicos.

Algunos de los sectores en que se observaron y sancionaron esas prácticas fueron los de la industria de los pollos, con las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, con una derivación hacia las principales cadenas de supermercados del país; el papel tissue, involucrando a una de las empresas más tradicionales y emblemáticas del país, la CMPC y su competidora SCA; y las cadenas farmacéuticas Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde.

En el caso de los pollos, la Fiscalía Nacional Económica presentó en diciembre de 2011 un requerimiento contra las tres empresas citadas y la Asociación de Productores Avícolas de Chile por coludirse para mantener los precios. Las empresas y la Asociación fueron sancionadas por el Tribunal de la Libre Competencia con multas totales por un valor cercano a los US$ 70 millones.

La colusión de CMPC y SCA en el papel tissue, que llegó hasta la Corte Suprema, originó multas del orden de US$ 15 millones para cada una de las empresas, pese a que CMPC se había autodelatado primero, lo que le daba derecho a solicitar una rebaja sustancial, pues la Corte consideró que aquello no era procedente por haber organizado la colusión. Adicionalmente, y producto de demandas colectivas en las que medió el SERNAC, CMPC debió pagar indemnizaciones consistentes en paquetes de pañales a 170 mil familias, a lo que se suma el pago de $7.000 a cada chileno mayor de 18 años, lo cual implicó un desembolso de alrededor de US$ 150 millones.

En el caso de las farmacias, éstas fueron acusadas por la Fiscalía de coludirse para afectar el precio de 220 medicamentos en el período entre diciembre de 2007 y abril del 2008. Salcobrand y Cruz Verde fueron finalmente sancionadas por el tribunal, con multas de US$ 20 millones cada una, mientras Ahumada, que se autodenunció, negoció una multa de aproximadamente US$ 1 millón.

Todos estos casos tuvieron alta repercusión en los medios de comunicación, atendiendo a que se trataba de productos de consumo masivo, afectando a una gran cantidad de personas. Además, su exposición pública en los últimos años tendió a crear la idea de que en ese período se había acentuado el tema de colusión de los empresarios, lo que muy probablemente no es así. Lo que ocurrió, más bien, es que la Fiscalía Nacional Económica -organismo que, especialmente después de la reforma realizada el año 2016, que aumentó sus facultades y la dotó de nuevas herramientas y presupuestos para fortalecer la libre competencia-, ha venido aumentando en los últimos años su eficiencia en la fiscalización, adquiriendo con ello, incluso, una alta reputación entre los organismos de libre competencia a nivel internacional. Ello se ha producido, además, por la incorporación de un importante número de profesionales a ese organismo y por la experiencia que han ido adquiriendo sus profesionales. De hecho, hemos conocido pocos casos de otras industrias coludidas. Han habido varias investigaciones, y se ha sancionado a empresas en el sector naviero, y algún tipo de producto electrónico, pero no muchos más.

El prestigio de las instituciones de libre competencia en Chile se ve corroborado por otros antecedentes. Un informe elaborado por Deloitte por encargo del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez, dado a conocer en **El Mercurio**[13], y basado en la percepción de los abogados especialistas en libre competencia revela que la Fiscalía Nacional Económica obtiene una calificación promedio de 5,3 en la escala de 1 a 7, bastante superior a la de SERNAC que obtiene un 3,6. Esta nota promedia las calificaciones de distintos departamentos internos de la FNE que van entre 4,4 y 5,8. La investigación entrevistó a 45 abogados especialistas en libre competencia que en su mayoría (66%) llevan más de diez años ejerciendo en esa área legal y que respondieron un cuestionario de 79 preguntas. El estudio entrega también una alta calificación al Tribunal de la Libre Competencia, el que, sin embargo, obtiene notas inferiores a la FNE. Este estudio se ha realizado anteriormente por Deloitte en los años 2012, 2014 y 2016.

13 Percepción sobre Autoridades en Materia de Libre Competencia. Deloitte, 2020.

Cualquiera sea el caso, el hecho es que se instauró en la percepción pública, al darse a conocer los casos de colusión que hemos mencionado, la percepción de empresarios coludidos para enriquecerse a costa de los consumidores. Esta fue también la comunicación que se reforzó por la línea editorial de varios medios de comunicación, en particular en la industria televisiva. Algunos periodistas, notoriamente Daniel Matamala entre ellos, predican periódicamente acerca de los abusos de los empresarios como si fuera una cuestión cotidiana y habitual en nuestro país, lo que cualquiera que conozca ese mundo sabe que no es cierto y es la excepción, más que la regla.

Esta sensación se vino a sumar, por último, a los cuestionamientos a empresarios por aportes irregulares a la política denunciados durante el gobierno de Michelle Bachelet, que comprendieron a varias empresas, entre las cuales tuvieron mayor notoriedad los casos de Penta y SQM. Mayor malestar provocó en la ciudadanía el hecho que las sanciones a los involucrados en estos hechos, por varias razones, han sido finalmente menores y escasas. Esto se produjo, a mi juicio, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque la ley de financiamiento de la política no contemplaba sanciones efectivas para aportes irregulares y tenía plazos de prescripción muy cortos, lo que contradecía el discurso del gobierno de la época y también del Ministerio Público y los Fiscales que participaban en estos casos, que prometían fuertes y ejemplificadoras sanciones. En segundo lugar, porque cuando los alcances de los episodios de financiamiento irregular de la política amenazaron con afectar a connotados parlamentarios de izquierda, de la Democracia Cristiana y a ministros del gobierno de Michelle Bachelet, el comportamiento del Ministerio Público en el tratamiento de estos casos varió de manera fundamental. Para decirlo claro, el entusiamo por perseguir estos comportamientos, que alguna vez se calificaron de delictuales, decayó notablemente.

Frente a todo esto, la síntesis que mucha gente obtuvo de la suma de estas situaciones, es que hay grupos en la sociedad chilena que son intocables o cuyos comportamientos cuestionables no tienen sanción alguna, o sanciones menores o simbólicas. Esta sensación, cuando la situación económica

mica de la mayoría se empieza a tornar más apretada, cuando empiezan a escasear las oportunidades de trabajo y cuando hay una activa acción política y comunicacional que le hace ver a la gente que sus desventuras se deben simplemente a los abusos de otros, puede producir mucha rabia. Por supuesto, esa rabia se vio después del 18 de octubre y es parte de las explicaciones a lo que ha vivido Chile.

El rol de los medios de comunicación

La prensa es una de las instituciones claves en una democracia. A partir del mínimo de la libertad de prensa, y con diversidad de miradas, los medios de comunicación cumplen un rol importante en relevar la información que los ciudadanos necesitan para tomar decisiones y para aportar a la sociedad desde una cultura cívica que respeta a los demás. En un mundo con la densidad de datos como la que existe hoy, esta labor adquiere mayor trascendencia. Las redes sociales han desafiado el rol de intermediación de información que cumplen los medios, al permitirle a las personas disponer de fuentes propias entre sus comunidades virtuales.

La inmediatez, la simplificación y el populismo campean en las redes sociales, y los medios no debieran caer en la tentación de competir con las redes en esa dinámica, sino presentar una alternativa más reflexiva y que agregue valor.

La actuación de los medios de comunicación durante la crisis de octubre ha sido muy criticada. Aquí mismo hemos dado cabida a opiniones, como la de Carlos Peña que los acusa de simplismo y frivolidad, o de Arturo Fontaine que les reprocha desatender el daño que la violencia causó a muchos chilenos que viven de su esfuerzo. Nosotros mismos hemos criticado y documentado la forma en que varios medios dieron amplia tribuna a denuncias falsas, ya sea a través de redes sociales o directamente de políticos de izquierda, que perjudicaron gravemente a Carabineros de Chile e incluso, tuvieron incidencia en la destitución por parte del Senado del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Quien ha sido particularmente crítico de los medios, en especial de la televisión, es Sergio Muñoz Riveros. En su libro varias veces citado ***La Democracia necesita defensores: Chile después del 18 de octubre*** el autor dice que "en las horas en que cundía la angustia en los hogares debido a la violencia, los canales de televisión asumieron una actitud no sólo complaciente, sino casi propagandística del vandalismo, que era descrito como parte del mismo impulso justiciero que llevaba a muchas personas a golpear cacerolas en los barrios". Reprocha el uso reiterado de las expresiones "protesta social" en medio de la naturaleza antisocial del ataque al Metro y los saqueos a los supermercados, que a su juicio sembraron dudas sobre la capacidad de reflexión y el sentido de responsabilidad de los editores y directivos de los canales.

Más adelante, Sergio Muñoz señala que varios "rostros" de la TV, embriagados por la agitación en las calles, abusaron de la tribuna dorada que ocupan, sin ninguna conciencia de la responsabilidad cívica que pesa sobre ellos. Los acusa de asumir una posición confortable porque se mostraban socialmente sensibles, solidarios con el "pueblo indignado" y, al mismo tiempo, compraban una especie de escudo frente a los violentos al no pronunciar ni media palabra de crítica en su contra.

Menciona Muñoz que en una entrevista publicada en la revista Capital el 26 de noviembre, el periodista chileno John Müller, ex director adjunto del diario español El Mundo, apuntó a la responsabilidad periodística: "pienso que en Chile los periodistas van a tener que abrir un debate después de que termine esta crisis sobre por qué han sido incapaces de distinguir los géneros periodísticos. Y me refiero a las acusaciones contra los periodistas: esto tiene que ver con un problema de confusión de géneros. Cuando un periodista, que es un periodista informador -y que está en un segmento informativo- empieza a opinar, claramente está transgrediendo los códigos profesionales".

Los medios de comunicación, según creemos, son otras de las instituciones que han salido dañadas de esta crisis. También han tenido responsabilidad en ella, al renunciar tantas veces a su rol de intermediación, para

volcarse con juvenil e irreflexivo entusiasmo a ser parte de la noticia, a competir con los actores de ella en términos de protagonismo y a participar, sin pudor, en lo que Mario Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo.

Terminamos este capítulo mencionando que hay otras instituciones que perdieron la confianza de los chilenos. La Iglesia Católica, un actor de importancia en nuestra historia política, fue devastada por actuaciones abusivas de importantes clérigos -los padres Fernando Karadima y Renato Poblete, por nombrar los casos más emblemáticos-, que instalaron entre la gente la creencia que desde su posición de poder los sacerdotes abusaban de personas más débiles, contradiciendo brutalmente su ministerio, como ocurrió en tantas partes del mundo.

La pérdida de confianza de la mayoría de los chilenos en las instituciones fundamentales de la sociedad fue un factor que contribuyó a dotar a la protesta social y a las manifestaciones de violencia posteriores al 18 de octubre de una entidad tal, que logró cambiar radicalmente el panorama de la política chilena. Aún no conocemos los alcances de este cambio, pero como veremos en el siguiente capítulo, sus consecuencias pueden ser dañinas para nuestro país. Es cierto que una proporción muy importante de los chilenos no lo cree así y más bien ve con esperanza el proceso que vivimos, pero es justamente la falta de instituciones sólidas que reemplacen a las que han caído en descrédito, las que hacen dudar de ese optimismo.

Capítulo 7

El futuro después de la asonada

"Chile podría estar comenzando a ejercer su derecho a ser estúpido".
Niall Ferguson (2014)

Capítulo 7:

El futuro después de la asonada

La pandemia de Coronavirus que nos acompaña desde marzo de 2020 ha venido a agregar complejidad al futuro que nos espera. No me referiré en detalle a la enfermedad, sino sólo haré algunas menciones que son pertinentes para el tema que nos ocupa. En el plano local, habrá que decir que a los problemas que se arrastran desde el 18 de octubre y antes, viene a sumarse el hecho que Chile es, sin duda, más pobre de lo que era antes de la pandemia. Nuestra actividad productiva trabaja a media máquina y no se descarta un rebrote del virus, cuestión que ha ocurrido en otras latitudes, con lo cual un escenario de anormalidad en nuestra economía podría proyectarse durante un año completo. Entretanto, el Gobierno ha debido recurrir a una gran cantidad de recursos para ayudar a la población, lo que llevará a un déficit fiscal cercano al 10% del PIB este año, sin que por ello el producto deje de caer en una magnitud del orden del 5%. El financiamiento de estos déficits nos ha llevado a superar ya una deuda externa pública del 30% del PIB, con una proyección para los próximos años que la lleva al 45%, lo que irá encareciendo el crédito externo para Chile. El Banco Central ha debido hacer también un esfuerzo importante expandiendo su balance para mantener el flujo de pagos y liquidez de la economía, lo que a su vez, limita el uso de este tipo de herramientas monetarias para el futuro.

Además, paralelamente han ido sucediendo dos cuestiones que dificultan más la solución de nuestros problemas. La primera es que la oposición, mayoritariamente, ha actuado durante la pandemia en clave de octubre, como lo señaló hace poco Daniel Mansuy en una columna en El Mercurio. La forma en que han obstaculizado el actuar del Gobierno para combatir el Coronavirus es difícil de creer, tratándose de una emergencia nacional que requeriría el concurso de todos para superarla. Con escasas excepciones, se oponen a las políticas gubernamentales de la autoridad sani-

taria sin ninguna evidencia, alaban políticas distintas aplicadas por otros países que luego se han mostrado fallidas, siembran la duda con cada cifra, llegando incluso al intento de abultar el número de fallecidos con proyecciones sin fundamento, en circunstancias que Chile, de acuerdo a varios estudios internacionales, tiene un subreporte de fallecidos inferior a la mediana de las naciones afectadas y según el New York Times, está entre los cinco países con mejor calidad de información de fallecidos por Covid-19, como consigna un estudio presentado por **Libertad y Desarrollo**[1] en agosto de 2020.

Más allá de una evaluación final sobre el manejo gubernamental de la pandemia, que habrá de hacerse en un par de años más, es indudable que el Gobierno ha hecho un manejo tan profesional de ésta, que no merecía esa actitud de la oposición. El equipo a cargo del doctor Mañalich, primero y luego del doctor Paris, evitó un colapso de nuestro sistema de salud, mantuvo la capacidad de ventilación de pacientes críticos hasta en los peores momentos de presencia del virus, evitando miles de muertes que sí se produjeron en otros países de mayor capacidad económica. La actuación del Colegio Médico y su directiva de extrema izquierda y de algunos medios de comunicación, especialmente televisión, fueron de una parcialidad, sensacionalismo o mala fe pocas veces vista. El espectáculo de reporteros apostados en las Urgencias hospitalarias esperando el colapso del sistema y el desfile de cientos de cadáveres -que ellos habían anticipado y que finalmente no se produjo-, pasará a la historia de nuestro país como un episodio vergonzoso.

La segunda dificultad derivada de la pandemia está relacionada con la necesidad de suplir la falta de ingresos de los chilenos a raíz de la paralización forzada de la actividad productiva, que ha llevado al Gobierno a repartir una gran cantidad de recursos en ayudas sociales a las familias y empresas. Esta tarea, indispensable y cuya magnitud definitiva aún no es posible estimar -aunque los recursos comprometidos alcanzan ya a

1 Libertad y Desarrollo: Estadísticas de Fallecidos por Covid 19: Una revisión a su metodología, 14 de agosto 2020.

cantidades equivalentes al 15% del PIB, una de las proporciones más altas en la región según el Banco Interamericano de Desarrollo-, ha llevado a algunos a pensar que siempre habrá más recursos. **"Habla más"**, repiten algunos cada vez que se entrega un nuevo beneficio y esa lógica se aplica a todo tipo de demandas sociales. Lo más triste es que esta pulsión, entendible en alguien que esté sufriendo penurias por la situación, es alentada sin pudor por políticos, de distintos sectores, que supuestamente están llamados a una apreciación más reflexiva de las consecuencias de las políticas públicas y a tener en consideración el efecto que políticas fiscales muy expansivas tienen sobre la economía.

Esta forma de ver las cosas ignora una cuestión fundamental: la capacidad de generar riqueza de un país se lesiona gravemente cuando se afectan los incentivos para emprender e invertir. El desarrollo de la economía no es una cuestión estática, donde lo que se trata es repartir un monto limitado de recursos. El crecimiento de la población y el legítimo deseo que tenemos los seres humanos de acceder a mayor bienestar, obliga a hacer crecer ese pozo a repartir, pues, de lo contrario, se producirá frustración y estancamiento. La historia económica del mundo está plagada de países que, por intentar apurar el proceso de repartir la riqueza sin preocuparse por producirla, terminan más pobres. Los países desarrollados son una excepción en el mundo, lo común es ser pobres o de ingresos medios y estos últimos suelen caer en la llamada trampa de los ingresos medios por gastar como si ya fueran países ricos. No hay atajos. Los que trabajan y ahorran más logran superar su condición y llegan a mejorar su bienestar. Frente a esa lección que nos da la historia, nuestros políticos debieran ser más deferentes.

A nivel global, la pandemia también tendrá efectos sobre la economía y por lo tanto, sobre el bienestar de los chilenos. El más inmediato es el menor ritmo de crecimiento de la economía mundial, que ralentizará también nuestra actividad productiva por su impacto sobre las exportaciones principalmente.

¿Cómo trabajaremos, cómo estudiaremos?

Hay también efectos de más largo plazo. Uno de los que han sido advertidos por diferentes analistas y expertos es el del trabajo remoto. El cambio en los hábitos de trabajo de las empresas que ha debido realizarse obligadamente durante este período, nos ha demostrado que perdemos mucho tiempo en viajes y traslados que no son siempre necesarios, que podríamos compartir más con nuestras familias; en definitiva, que podemos mejorar la productividad y al mismo tiempo, la calidad de vida. Todo ello es muy positivo, excepto para los trabajadores menos calificados que tendrán más dificultades para lidiar con la tecnología y menos facilidades de conexión. ¿Con qué políticas abordaremos a estos grupos para que no se queden atrás?

Estos cambios se vienen a sumar a un fenómeno que ya está ocurriendo en los mercados laborales: la automatización. Ciertas industrias, ya no sólo en la producción de bienes, sino de servicios, han automatizado crecientemente sus actividades. En la salud, por ejemplo, muchas labores -que eran realizadas por personal auxiliar de salud- están siendo reemplazadas por robots y otro tipo de máquinas, incluso aparatos que los pacientes acarrean consigo y sirven para controles remotos de su estado de salud. Estas técnicas son cada vez más frecuentes por la prevalencia de enfermedades crónicas en los perfiles de morbilidad de nuestro país, que requieren de controles periódicos a los enfermos que se ven altamente favorecidos por estas nuevas tecnologías.

Otra actividad en la que se están produciendo reemplazos de personas por máquinas es en el comercio, donde las compras por internet empiezan a crecer en participación, tendencia que se acentuará luego que a raíz de la pandemia se integraran a esa forma de comprar cientos de miles de nuevos consumidores. En el rubro gastronómico el delivery es ahora la norma, y de nuevo, buena parte de ese nuevo flujo de compradores permanecerá en esa modalidad terminada la pandemia.

Las aplicaciones en internet que reemplazan al consumidor en "la última milla" están creando, de hecho, nuevas ocupaciones en que no hay una relación de empleador-trabajador propiamente tal, sino cientos de miles de personas que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores. En varias partes del mundo esto ha dado origen a discusiones acerca de la posible precarización de esas ocupaciones que, por otra parte, gozan de una serie de ventajas por la libertad que tienen quienes las ejercen en términos de flexibilidad horaria y otras materias. Consultoras en recursos humanos calculan que, de seguir estas tendencias, cerca de un 50% de los trabajadores no tendrán vínculos laborales con un empleador de la forma en que se ha dado tradicionalmente.

Las empresas de "economías colaborativas", como han sido llamadas en la literatura, abren todo un mundo de oportunidades y nuevos problemas; desafían también paradigmas como el de regulación y fiscalización de mercados que habrán de ser diferentes y consideran el gran flujo de información que estas empresas recogen y puede ser clave para su fiscalización. El economista de NYU, Arun Sundararajan, publicó el año 2016 un fascinante libro sobre economías colaborativas y plataformas basadas en agregación de demanda[2] que nos da una idea acerca de cómo serán las ocupaciones que prevalecerán en un futuro que ya está con nosotros.

Me preocupa, entonces, que en Chile tengamos cerca de tres millones de empleos que generar en los próximos años para dar trabajo a los cesantes, a quienes se ha suspendido el empleo y a los que han abandonado la fuerza de trabajo porque están desalentados de la posibilidad de encontrar una ocupación o porque las condiciones anormales de la pandemia los obligan a quedarse en su casa. ¿Quién va a crear esos empleos, de dónde saldrán las inversiones para echar a andar proyectos y empresas nuevas? ¿Estarán las personas capacitadas para tomar los puestos de trabajo que requerirá la economía? Esos son temas de futuro para Chile y no veo que haya en nuestro país suficiente conciencia de ellos, que parecieran estar

2 Sundararajan, Arun. "The Sharing Economy: The end of employment and Rise of crowd-based capitalism" New York University, 2016.

sólo en la preocupación del ministro de Hacienda, el Presidente Piñera y otros miembros de su gabinete y algunos centros de estudios.

Lo mismo ocurre en materia educacional. Las eternas peleas por los recursos en todos los niveles de educación oscurecen la discusión acerca de qué tipo de educación necesitan nuestros niños y jóvenes. El auge de clases no presenciales a nivel universitario ¿dejará una secuela positiva con posibilidades de educar de manera remota con mayor flexibilidad y menores costos? ¿Cuál será el efecto de lo anterior sobre el financiamiento de la educación superior? La capacitación a los trabajadores, en la que se gastan hoy considerables recursos fiscales en subsidios, según evaluaciones realizadas hace años cuando Evelyn Matthei era ministra del Trabajo, ha demostrado su inutilidad y debiera cambiarse por esquemas en que se entreguen capacidades que serán verdaderamente demandadas por las empresas, acercándonos más a un sistema de educación dual que forme los técnicos que Chile necesita y no solamente a jóvenes que quieren seguir carreras universitarias, algunas de ellas con escaso mercado laboral. Son temas de futuro que no están recibiendo suficiente atención.

La fragilidad de nuestras instituciones

Chile necesita instituciones para procesar y canalizar todas estas necesidades y desafíos y como veíamos en el capítulo anterior, éstas están muy desprestigiadas. Nos enteramos recién que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), agrupación emblemática que ha tenido importancia en la política de nuestro país durante mucho tiempo, ha quedado sin directiva al no reunir los quórums necesarios para elegir a sus nuevos dirigentes, ya que sólo un 14% de sus afiliados votó, pese a que la elección se realizó de manera remota. La pérdida de influencia de las instituciones no se queda, entonces, en las que tradicionalmente se asocian con las elites y el poder, sino que llega también a las dirigencias estudiantiles.

Los últimos tiempos han mostrado, adicionalmente, que con ocasión de la pandemia los comportamientos irresponsables de algunas institucio-

nes se han acentuado. El Congreso ha incurrido en conductas impropias. Con resquicios, o derechamente fraude constitucional -como lo han motejado algunos especialistas-, ha eludido las disposiciones sobre iniciativa exclusiva presidencial en materia de seguridad social y pretende hacerlo también en materia tributaria. Así es como aprobaron el retiro del 10% de las cuentas de pensiones (que no es 10%, sino cerca de 40% para la mayoría) por la vía de impulsar una reforma constitucional. Eso es gravísimo porque se legisla sin control ni responsabilidad alguna. Sólo el Ejecutivo tiene una visión de conjunto e inter temporal de las finanzas públicas, de modo que mayorías parlamentarias circunstanciales, que no rinden cuentas acerca de la marcha de la economía, darán origen a malas políticas públicas.

El Poder Ejecutivo, por su parte, no utilizó sus facultades para el control de constitucionalidad ni ejerció su poder de veto en esa misma reforma y en otras, simplemente por debilidad política. El Gobierno no usa las facultades que tiene por temor a "la calle". Y si bien el Presidente de la República es el llamado en cada ocasión a ponderar el camino a seguir dada la información con que cuenta, la debilidad que viene mostrando, especialmente a partir del 18 de octubre, configura el escenario propicio para que se le presione con la amenaza de la violencia y se vaya desmantelando una institucionalidad que, hasta ahora, ha funcionado razonablemente.

El Poder Judicial se ha visto en el último período haciendo un mayor esfuerzo para que los ministros y cortes se atengan en sus sentencias a lo que señala la ley, en lugar de reemplazar esa conducta -que es la que les corresponde- por un activismo judicial que falla según las creencias o preferencias del magistrado. Con todo, la sensación que hay en la población es que nuestro sistema judicial, incluyendo la etapa de persecución de los delitos a cargo del Ministerio Público, tiene aún muchas deficiencias.

La pandemia ha dejado en evidencia, además, que la mayoría de las instituciones públicas que tienen como motivo fundamental servir a la población, requieren una urgente modernización. Las ayudas sociales llegan con dificultad a la gente, pareciera haber un exceso de burocracia en los

registros administrativos de los servicios públicos y en su capacidad de ejecutar las políticas; los municipios muestran, en general, baja capacidad de auxiliar a las personas afectadas por carencias y emergencia social, de modo que durante el período en que hemos estado afectados por el Coronavirus muchos alcaldes se dedicaron a quejarse por los problemas que causaba la pandemia, transformándose en parte del problema, en lugar de ser parte de la solución. La digitalización de las instituciones públicas es un proceso disparejo que avanza con ritmos diferentes y tiene problemas de gobernanza. Esto se ha notado en la emergencia: algunas innovaciones, como la Comisaría virtual de Carabineros, han funcionado muy bien, otras como el uso de la Clave Única han tenido más problemas. La calidad de vida de las personas se ve afectada de manera muy importante, para bien o para mal, por el funcionamiento del Estado.

Desde hace casi dos años formo parte de un Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, nombrado por el Presidente Piñera. El Consejo está presidido por el ex Contralor, Ramiro Mendoza, e integrado por personas de diversas sensibilidades políticas y de valiosa experiencia en el Estado. La sensación de muchos consejeros es que cuesta mucho avanzar en esta tarea. El Estado tiene problemas para definir su gobernanza para gestionar la modernización y hay bastante coincidencia entre los consejeros, liderados en este tema por Javier Etcheverry, en que está pendiente la delegación efectiva de poder en una autoridad pública en esta materia.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le ha planteado al Consejo el desafío de mejorar la gestión de los datos sobre las personas al interior del Gobierno, pues la emergencia demostró que la calidad de estos deja mucho que desear y hay allí una tarea importante que deberá tomar en cuenta cuestiones relativas a la privacidad de los datos personales, que pueden resolverse con las tecnologías existentes.

Además, y en mi opinión, la administración pública está severamente capturada por los partidos políticos. La directiva de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) está altamente politizada y formó parte de la

Mesa de Unidad Social que convocó a las manifestaciones posteriores al 18 de octubre. Según información publicada por La Tercera en julio del 2018, el INE informaba que el sueldo de los trabajadores del sector público superó en un 44% a los del sector privado el año 2017. Sin embargo, en el año 2019, en el mismo medio, el director del Servicio Civil, Alejandro Weber, señalaba que los sueldos de altos cargos del sector público son un 20% inferiores a los del sector privado. Estos últimos cargos públicos son elegidos por un riguroso método de selección a través de concursos del sistema de Alta Dirección Pública. Lo que ha ocurrido, a mi juicio, es que durante muchos años los directivos públicos que no son nombrados por el sistema ADP, sino que responden a designaciones políticas, han contratado a gran número de operadores políticos de sus partidos, que reciben sueldos muy superiores a los que obtendrían en otros empleos y se constituyen en obstáculos para la modernización del Estado. El Congreso es un caso claro de esa situación, y sus funcionarios, habitualmente muy bien pagados, se han visto en sesiones de la Cámara y el Senado realizando manifestaciones, levantando pancartas e, incluso, insultando a autoridades. Será difícil mejorar los servicios del Estado a los ciudadanos si no se reforma el régimen de empleo público.

Una proporción muy alta del gasto público no favorece a los ciudadanos y parte importante del gasto social no llega a los necesitados, sino que se queda en burocracia. Según cálculos de la economista Cecilia Cifuentes[3], el gasto social per cápita ha crecido en Chile a una tasa real por año de 5,4% en los últimos treinta años, siendo que el PIB per cápita en el mismo período aumentó un 3,4% promedio anual. Así, el gasto social por persona al año pasó de $530.000 anuales (en moneda de hoy) el año 1990, a cerca de $2.500.000 por persona al año en 2019. ¿Creen ustedes que los chilenos del 80% de la población que reciben ayuda social perciben que cada año el Estado los ayuda con dos millones y medio de pesos a cada uno? ¿Cuánto queda en el camino?

---

3 Cifuentes, Cecilia. "La nueva Constitución es otro mito más de la izquierda" en "El arcoíris del Rechazo", Ediciones El Líbero, 2020.

La modernización del Estado es una inmensa tarea pendiente. Algunas de las lecciones de la pandemia podrían aprovecharse para automatizar más los servicios públicos sobre la base de un Estado al servicio de los ciudadanos. La mejoría de la gobernanza en esta materia se ve como una tarea alcanzable. La captura del Estado por parte de los partidos políticos es, desgraciadamente, un obstáculo formidable para lograrlo, que sólo podría superarse por acuerdos transversales, de esos que tan mala prensa tienen hoy día. Pese a ello, hay miles de funcionarios públicos que se esfuerzan diariamente por servir lo mejor posible a la ciudadanía y algunos servicios se destacan por el cumplimiento eficiente de sus labores: el Banco Central durante la pandemia ha sido un ejemplo de ello. Sin embargo, todo ese trabajo se ve ensombrecido por la acción de operadores políticos o de funcionarios desalentados por la captura del aparato público, cuya actitud a la larga tiene incidencia decisiva, y negativa, en cualquier intento de modernización del Estado. Esos son temas que la política debiera ser capaz de resolver.

El Plebiscito Constitucional

El país se encuentra próximo a realizar el plebiscito de entrada al proceso constitucional acordado el 15 de noviembre pasado. Los chilenos deben pronunciarse el próximo 25 de octubre por el Apruebo o Rechazo a elaborar una nueva Constitución. También deben manifestar su preferencia por una Convención Constituyente íntegramente elegida o por una de conformación mixta entre parlamentarios y constituyentes elegidos al efecto, para el evento que gane el Apruebo.

Las encuestas han mostrado, hasta ahora, que las preferencias de los votantes se inclinarían mayoritariamente por el Apruebo. Probablemente la pérdida de confianza en las instituciones a las que nos hemos referido frecuentemente en este libro tiene que ver con ello. ¿Si las instituciones que tenemos funcionan tal mal, por qué no probar con una nueva fórmula? Esa parece ser la composición de lugar que se hace mucha gente, pero hay bastante ingenuidad en esta mirada.

Sabemos que algo que funciona mal puede funcionar peor. Todo depende de la dinámica que se imponga para realizar los cambios y del ambiente. Y la dinámica que ha seguido el proceso a contar del 15 de noviembre ha sido clara: una continua radicalización de las propuestas de la izquierda y la preminencia incontrarrestable de ésta en las fuerzas de la oposición.

Pese a que el Partido Comunista ni siquiera formó parte del Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución, su audacia, sumada a la debilidad de los sectores moderados de la oposición y la del propio Gobierno, han llevado a una situación que habría sido difícil de imaginar hace seis meses. Veamos: a) está instalado un candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, como la primera opción de la centroizquierda; b) los resquicios constitucionales que ha usado el Congreso han rebasado los quórums y la iniciativa exclusiva presidencial, elementos claves de nuestra institucionalidad; y c) una de las bases del crecimiento y el financiamiento de la inversión en Chile, el sistema de pensiones, ha sido perforado permitiendo el retiro de fondos, utilizando justamente un resquicio constitucional.

Los entusiastas del Apruebo que nos prometían una conversación serena, informada e incluyente de los cambios que la institucionalidad del país necesita, con ribetes casi románticos, deben explicarnos por qué una Convención Constituyente haría las cosas de manera tan distinta a lo que vemos en Chile hoy. Lo que verdaderamente ha ocurrido en nuestro país es que el balance del poder en la centroizquierda ha cambiado de lugar y está cada vez más a la izquierda. Ese es el orden en que se llevaría a cabo el proceso constituyente si gana el Apruebo.

El cientista político, sociólogo y académico de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Nueva York, Patricio Navia fue el editor de una publicación de Ediciones El Líbero titulada ***El Arcoiris del Rechazo***[4]. Allí expone su pensamiento sobre el plebiscito. Dice Navia que ambas opciones son legítimas, pero mientras los partidarios del Rechazo han dado muestras claras de su compromiso democrático al señalar que aceptan cual-

4 Navia Patricio, Editor, "El Arcoiris del Rechazo" Ediciones El Líbero, 2020.

quier resultado, partidarios del Apruebo han amenazado con un estallido social en el caso que su opción sea derrotada. En tanto los defensores del proceso constituyente no expliciten formalmente que acatarán la decisión de la mayoría, aquellos que valoran la democracia como un conjunto de reglas que nos permite vivir en orden y tener mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos tienen una buena razón y un gran argumento para votar Rechazo.

Señala también Patricio Navia que hay quienes justifican votar Rechazo como una forma de protestar ante la violencia que ha estado asociada al estallido social que se inició el 18 de octubre. Piñera ganó la elección con un programa que no contemplaba una nueva Constitución y cambió su postura presionado por el estallido, que no se puede entender sin hacer referencia a la violencia que acompañó a las manifestaciones. La normalización que muchos hacen de la violencia es inaceptable y otra buena razón para votar Rechazo. Respecto a quienes dicen que la Constitución actual no tiene legitimidad porque no fue aprobada en democracia, Navia contesta que dos errores no hacen un acierto. Por último, el cientista político encuentra numerosas debilidades en el diseño del proceso constitucional, entre las que podemos mencionar la gran cantidad de elecciones que tendrán que enfrentar los chilenos, lo prolongado del proceso de elaboración de una nueva Constitución -lo que afecta la certeza jurídica y las condiciones para la inversión que el país necesita-, y la llamada "hoja en blanco", que postula que si no hay dos tercios para aprobar una norma, ésta queda fuera de la Constitución y debe ser aprobada por leyes simples, lo que puede dar origen a una carta fundamental que no cumpla con los requisitos mínimos de una Constitución moderna.

En la misma publicación, el Canciller Andrés Allamand nos relata por qué siendo él inicialmente partidario del Apruebo cambió su posición hace ya varios meses. Señala que el acuerdo del 15 de noviembre que dio origen al plebiscito incluía la paz social y ella no fue respetada por los firmantes. Mas lo que ya rebasó toda buena fe para Allamand fue el hecho que cuatro días después de firmado el acuerdo, en que se señala textualmente que se suscribe ante el llamado de S.E. el Presidente de la República, el

Partido Comunista presentara una acusación constitucional contra el Presidente y la mayoría de los diputados de los partidos firmantes del acuerdo votan a favor de destituir a Piñera.

Acusa Allamand que, luego, la oposición hace una mañosa interpretación del quorum de dos tercios para aprobar las disposiciones de la nueva Constitución; que además destituyen al ministro Chadwick mediante una acusación constitucional e intentan hacer lo mismo con el Intendente Guevara a días de haber asumido su cargo; que el vocero de No+AFP, Luis Mesina, amenaza con que los constituyentes se darán sus propias reglas sin atenerse a las establecidas en el acuerdo. Por último, afirma que se pueden hacer cambios a la Constitución sin necesidad de ir a una Convención, proceso que puede llevarse a cabo más rápido y de manera más pacífica y respetuosa.

También en el libro ***El Arcoiris del Rechazo,*** el abogado Gonzalo Cordero entrega sus razones para votar Rechazo. Señala, en primer lugar, que la Constitución que nos rige ha cumplido cabalmente con lo que se pide a una carta fundamental: establecer las bases de un ordenamiento jurídico que provea de seguridad a las personas y de estabilidad política a la sociedad, permitiendo el mayor desarrollo espiritual y material posible. Lo fundamenta señalando que esta Constitución permitió un tránsito ordenado y pacífico desde un régimen dictatorial a uno democrático; hizo posible transitar desde una de las sociedades más pobres de Latinoamérica a ser la de mayor desarrollo del subcontinente americano, con los mejores indicadores económicos y sociales de su historia. Permitió también el período de mayor estabilidad política y social de nuestra vida republicana, con el mayor grado de libertades públicas e individuales.

Su segunda razón es que el proceso para una nueva Constitución no fue producto de un diálogo libre e institucional, sino bajo la amenaza de la violencia. Y la tercera es que un triunfo del Apruebo, especialmente si es por un amplio margen, conduciría a una desestabilización institucional de alcances difíciles de anticipar.

Gerardo Jofré, en la misma publicación, hace una argumentada defensa de la opción Rechazo en la que el elemento más importante es la imposibilidad de construir las bases de nuestra institucionalidad a partir de una hoja en blanco. En efecto, resulta difícil pensar que se va a construir algo desde la nada. Las constituciones tienen contenidos mínimos, que, de no estar presentes, simplemente impiden que cumplan los objetivos de una carta fundamental reseñados más arriba por Gonzalo Cordero. Pretender cambiar la fisonomía de un país a partir de una hoja en blanco, sin hacerse cargo de su historia, del camino recorrido y de aquellas cosas que los chilenos aprecian, parece insensato.

En síntesis, hay muchas razones para el Rechazo. Otros coautores de ***El Arcoiris del Rechazo*** entregan varias adicionales que no mencionaremos por motivos de espacio, pero que representan a distintas personas que han reflexionado sobre esta decisión y encuentran alguna razón que los interpreta. ¿Ahora bien, qué pienso yo sobre el Plebiscito?

Hay muchos de los argumentos que hemos revisado para votar Rechazo que me hacen mucho sentido. No me cierro tampoco a la posibilidad de hacer modificaciones importantes a la Constitución, pero el proceso diseñado no me convence para votar Apruebo. Debo reconocer que la razón fundamental para votar Rechazo en el plebiscito será por una cuestión de dignidad. Será por el futuro de nuestro país y por el futuro de la derecha.

No podemos tolerar que un gobierno por el que votamos, que fue legítimamente elegido y en cuyo programa no estaba contemplado elaborar una nueva Constitución, se haya visto forzado a aceptar este proceso constituyente bajo la amenaza de la fuerza. Porque eso es en verdad lo que ocurrió en Chile desde el 18 de octubre de 2019: un golpe de Estado, que se levantó contra la autoridad legítima utilizando la violencia y obligó al gobierno del Presidente Piñera a renunciar al uso de varias de sus facultades para gobernar nuestro país, instituyendo así un parlamentarismo de facto.

Esa es la verdad, aunque cueste reconocerla, y por dignidad, aquellos que elegimos a este Gobierno, no debiéramos aceptarla, porque de hacerlo

estaríamos concediendo que en la democracia que tenemos desde 1990 es posible derribar a un gobierno legítimo por la fuerza. El Rechazo es, a mi juicio, un paso importante en la tarea de reconstituir a una derecha que se encuentra debilitada en su moral y en su capacidad de movilización. No es el único paso ni la única opción; el Apruebo, como ha sido reivindicado por varios políticos del sector, es también una opción válida, pero a mi juicio es importante para el futuro de la derecha que exista una sólida expresión por el Rechazo en el plebiscito constitucional. Seguir las aguas del Apruebo, siendo una opción legítima, en lo personal me parece una aceptación de que tenemos menos derechos políticos que nuestros rivales de la izquierda, pues si ganamos las elecciones, no podemos ejercer nuestro derecho a gobernar. Eso, que fue tan criticado en el pasado en nuestro país y que se suponía superado, es lo que me hace calificar lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en Chile como un golpe de Estado.

Tengo otra razón de peso para votar Rechazo. Creo en los equilibrios de poder, en los *check and balances* que llevan a que un grupo no imponga unilateralmente sus visiones sobre otro, porque el grupo mayoritario siempre tiene la tentación de saltarse la deliberación, no le es necesario el debate para buscar la verdad y la buena convivencia. Como las encuestas dicen hoy que ganará el Apruebo, creo que sería bueno para el país que, si ello ocurre, sea un triunfo estrecho y eso me confirma mi decisión de votar Rechazo.

El futuro de la derecha

Siendo yo una persona que no tiene problema alguno en calificarse como de derecha, he apoyado en los últimos años la formación de una coalición de centroderecha que compita por el poder político. La razón para hacerlo es que comprendo que, en una democracia representativa -sistema que con todos sus defectos es el que mejor encarna la esencia de una democracia-, quienes se interesan por los asuntos públicos deben procurar que sus ideas y proyectos se realicen, para lo cual es indispensable alcanzar en procesos eleccionarios el poder político. Por eso he apoyado en dos ocasiones a Sebastián Piñera en sus intentos por alcanzar la Presidencia de la República.

La evolución de la política durante esta administración, especialmente lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre, me hacen revisar esa posición. El supuesto habilitante para apoyar a un gobierno que no representa cabalmente mis ideas ha sido que hay al frente una centroizquierda que cree también en una democracia representativa y por lo tanto, está dispuesta a suscribir acuerdos para darle sustentabilidad al país y luego cumplirlos. Bueno, eso ya no existe, se acabó. No hay una centroizquierda con representación política relevante que haya sido capaz de levantar la voz para enfrentarse a los propios que han tolerado, y en algunos casos, propiciado la violencia como método de acción política. Tampoco han dado una batalla por respetar los acuerdos que se suscriben. Desaparece así esa razón superior, la gobernabilidad y la paz social, por la cual uno está dispuesto a ceder en sus posiciones, a apoyar posturas más centristas que tengan mayores posibilidades de acceder al poder. La etapa que viene ahora, a mi juicio, es una de defensa vigorosa de la institucionalidad democrática, que requiere una derecha que marque muy claramente sus convicciones.

Ya no estamos frente a aquel período virtuoso de nuestra historia política, en que ideas básicamente socialdemócratas representadas por la centroizquierda se enfrentaban a ideas liberales y conservadoras agrupadas en la centroderecha, haciendo posible una alternancia en el poder y una discusión civilizada y legítima acerca de cuáles son las mejores políticas para el progreso de los chilenos. Ese balance de poder, que dio origen al período más fructífero de nuestra vida independiente, en que los chilenos de todas las condiciones mejoraron su calidad de vida de una manera nunca antes vista en nuestra tierra, como este libro y muchas otras evidencias lo confirman, se rompió. Y se rompió mediante un golpe de Estado que, valiéndose de la violencia, ha dañado gravemente nuestra institucionalidad.

Ahora estamos en otra, enfrentamos a un grupo de audaces que siendo minoritarios dirigen a la centroizquierda desde el Partido Comunista y el Frente Amplio y cuyo objetivo no es reformar el país, sino llevar adelante una revolución.

Los sectores moderados de centroizquierda, que existen y probablemente son más numerosos que los de extrema izquierda, viven un momento de pasmo y sopor difícil de entender. Y no se avizora que en un futuro próximo, al menos en los plazos del proceso constituyente, esa situación vaya a cambiar. No podemos seguir esperando que la centroizquierda moderada despierte de su sueño. Tenemos que vigorizar la presencia de la derecha en política.

Existe, por lo tanto, una opción política para que una alternativa de derecha haga valer, o al menos discuta, una posición de mayoría relativa en este país. Si no hay izquierda moderada, si no hay centro político, la derecha puede disputar el voto de esos electores huérfanos. Si aparecen fuerzas políticas de centro, la derecha puede convivir con ellos y pactar, aunque sea de manera parcial y no en la forma de una coalición política, condiciones de gobernabilidad para Chile, que comiencen por un compromiso verdadero por la paz social y que sean seguidas por una discusión civilizada de los cambios que es necesario llevar adelante para vivir en una sociedad que sea más inclusiva que la actual.

La derecha política debe hablarle a su gente, a aquellos que valoran el mérito, que creen que si bien el Estado debe ser una ayuda valiosa para las personas que lo necesitan, el proyecto de vida de cada cual se delineará y definirá, en lo fundamental, por las propias personas, sus familias, las organizaciones sociales a las que soberanamente decidan pertenecer. Para ello, la derecha debe tener una identidad y encontrar un justo medio entre distintas sensibilidades que conviven, a veces malamente, en ella. Hay liberales y conservadores en la derecha, liberales en lo económico y en lo valórico, pero también muchos conservadores en diferentes ámbitos de la vida; hay socialcristianos, hay libertarios, hay quienes encuentran valor en la nación y la patria.

No es una cuestión sencilla juntar a todos estos grupos, pero debemos confiar en que habrá liderazgos que serán capaces de hacerlo. Lo que está en juego es demasiado importante. Quiero aclarar que esta invocación no significa que yo crea en una derecha que exacerbe lo identitario ni se

atrinchere en sus ideas y posiciones sin disposición a llegar a acuerdos. No creo en una derecha meramente testimonial y con vocación de minoría, pero sí creo en una derecha que defienda con prestancia sus ideas y ello, no está ocurriendo hoy.

Grandes desafíos para la derecha

Ese camino tendrá que sortear problemas difíciles, pues el ambiente en el país es complejo. Hemos hablado antes en este libro de la invasión de los sentimientos -a costa de la racionalidad- en la discusión de los asuntos públicos. Esa es, por lo demás, una tendencia mundial. En mi opinión, no podemos abandonar completamente el terreno de los sentimientos a la izquierda. Debemos buscar una manera en que la autonomía de la voluntad pueda seguir primando, pero admitir al mismo tiempo que la mayoría de las personas busca reconocimiento y que dárselo es una manera sana de entrar a tallar en el campo de los sentimientos. Podemos postular una razón dispuesta a dejar espacio a los afectos, sin verse colonizada por ellos ni rendirse a la tentación del populismo, como ha propuesto, por ejemplo, el cientista político español Carlos Arias Maldonado. Creo, como lo dije en el capítulo cinco, que hay que hacer un esfuerzo serio de investigación para intentar la integración de las emociones al ideal liberal de la autonomía. Y la respuesta debiera considerar, según mi incipiente conocimiento del tema, los aportes desde la perspectiva evolucionaria de las ciencias sociales.

En ese afán, debemos reconocer que corremos con cierta desventaja frente a la izquierda y en particular, frente a quienes alientan una salida revolucionaria. Ello, porque como lo ha advertido Raimond Aron, partimos de una desventaja propagandística, pues aparecemos como conformistas del estatus actual, frente a quienes siguen un ideal romántico que nunca revela cómo se puede llegar a él. Por eso ha dicho Aron que el espíritu revolucionario se puede seguir nutriendo de la ignorancia del porvenir. Tenemos que aceptar, como afirma Pierre Rosanvallon, que hay una ventaja estructural para la negatividad en la sociedad en que vivimos, lo cual no puede desalentarnos, por honestidad intelectual, a proponer soluciones a

los problemas. La precariedad de las posiciones de poder de gobiernos en todas partes del mundo, responde, en alguna medida, a esta nueva realidad, muy basada en la actitud de los jóvenes, que sólo ve problemas y nunca elabora soluciones.

Termino estas ideas señalando que, a mi juicio, el mayor peligro que enfrenta la derecha, pues puede carcomerla por dentro, es el populismo. En Chile hemos vivido recientemente, con ocasión de la pandemia, expresiones de varios políticos de la derecha que son populistas, que ofrecen soluciones fáciles donde no las hay, que transforman a los ciudadanos en dependientes del Estado y de los políticos, y que han estado dispuestos a hacer un daño a nuestra institucionalidad con tal de aparecer frente a la gente como generosos, aunque siempre con el dinero ajeno. El populismo tiene éxito porque en un mundo de poca reflexión y mucha inmediatez, será más grato para los oídos de la gente escuchar que sus problemas son culpa de otro, de alguien que lo tiene sometido a las penurias que está pasando. Más grato que escuchar que no hay atajos, que el mejoramiento de las condiciones se logra siempre con un componente importante de esfuerzo propio y que, claro, hay condiciones del entorno que le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida y es legítimo que intente cambios en la sociedad para que ello ocurra. Pero esos cambios tienen costos, deben realizarse de manera pacífica y aún así, no son la panacea que algunos oportunistas les quieren mostrar.

El populismo no es sólo un fenónemo local. El mundo está viviendo hoy experiencias populistas de derecha, notoriamente la de Donald Trump en Estados Unidos, aunque es dudoso que ellas vayan a ser exitosas. Porque de verdad cuesta aceptar que países y tradiciones que se han hecho grandes a partir del libre comercio, renieguen hoy de él, que naciones cuyas exitosas democracias se han nutrido de la inmigración, sostengan una posición de completa y cerrada oposición al ingreso de extranjeros a buscar oportunidades en sus países. Por supuesto que estar abierto a la inmigración debe considerar, primero, los intereses de los nacionales y no dar pie a procesos migratorios insensatos y no sustentables, como el que vivió Chile hace algunos años o los países de Europa también en un pasa-

do reciente. Una inmigración regulada y sustentable debiera enriquecer a los países, no empobrecerlos.

La pulsión populista de echar la culpa de los problemas del pueblo a otro, que es un villano, sea éste la elite, el extranjero u otro país, es siempre un engaño a la larga y en mi concepción, al menos, la derecha no debiera caer en esa tentación facilista. De las cosas más peligrosas del populismo es su antipluralismo, como ha señalado el académico de Princeton Jan-Werner Müller en su libro ***¿Qué es el populismo?***[5]. Pese a ello, señala este autor, los populistas hablan el lenguaje de la democracia y eso es peligroso.

Los momentos que hemos vivido en Chile a partir del 18 de octubre pueden causar un daño inmenso si ponen a la gente en contra de la democracia. Siempre hay sectores leales y desleales a la democracia, pero como nos advierte la ciencia política, el problema es cuando sectores semileales se transforman en desleales. Los jóvenes tienen menos miedo a la dictadura que los viejos, como afirma Yascha Mounk, politólogo de la Universidad de Harvard, quien nos advierte de estos peligros en su libro ***El pueblo contra la democracia***[6] reseñado en El Mercurio. El autor afirma que si bien reconoce que en Estados Unidos hay injusticias con las que acabar, la forma de conseguirlo pasa por propiciar un clima de discusión abierta, en el que la gente no tenga miedo de perder su trabajo por decir algo impopular. La posibilidad que una persona sea despedida por decir públicamente que en Estados Unidos no hay en este momento un debate intelectual abierto -lo que efectivamente ocurrió-, evidencia cómo está el sistema. Por eso Mounk firmó la carta de los 100 intelectuales que reivindican la necesidad de preservar la posibilidad de discrepar sin consecuencias profesionales funestas, enfrentándose a la cultura de la cancelación que, amparada en grupos que son fuertes en la academia y los medios, te amenazan con que si no estás de acuerdo con ellos, no sólo te van a criticar, sino dirán que eres una mala persona, racista, sexista, etc.

5 Müller, Jan-Werner. "¿Qué es el Populismo?" University of Pensilvania, 2017.
6 Mounk, Yascha. "El pueblo contra la democracia" Paidós Estado y Sociedad, 2018.

La tradicional democracia representativa con la que hemos vivido por tantos años está desafiada, pues la mala evaluación de los políticos ha llevado a mucha gente a culparlos de todos los males y a pensar en alternativas de gobierno sin políticos, o con políticos que tienen tentaciones dictatoriales. Las experiencias de Hungría y de Turquía, por ejemplo, deben seguirse con atención. Debemos estar muy conscientes que el populismo es un riesgo para la derecha y mientras alguien no encuentre una opción mejor que la democracia representativa, tenemos que intentar seguir perfeccionándola, en lugar de echarla por la borda. Por eso es grave que parlamentarios de la derecha estén dispuestos a pasar por sobre la constitución para obtener un aplauso fácil: la institucionalidad política de un país no es una cuestión banal.

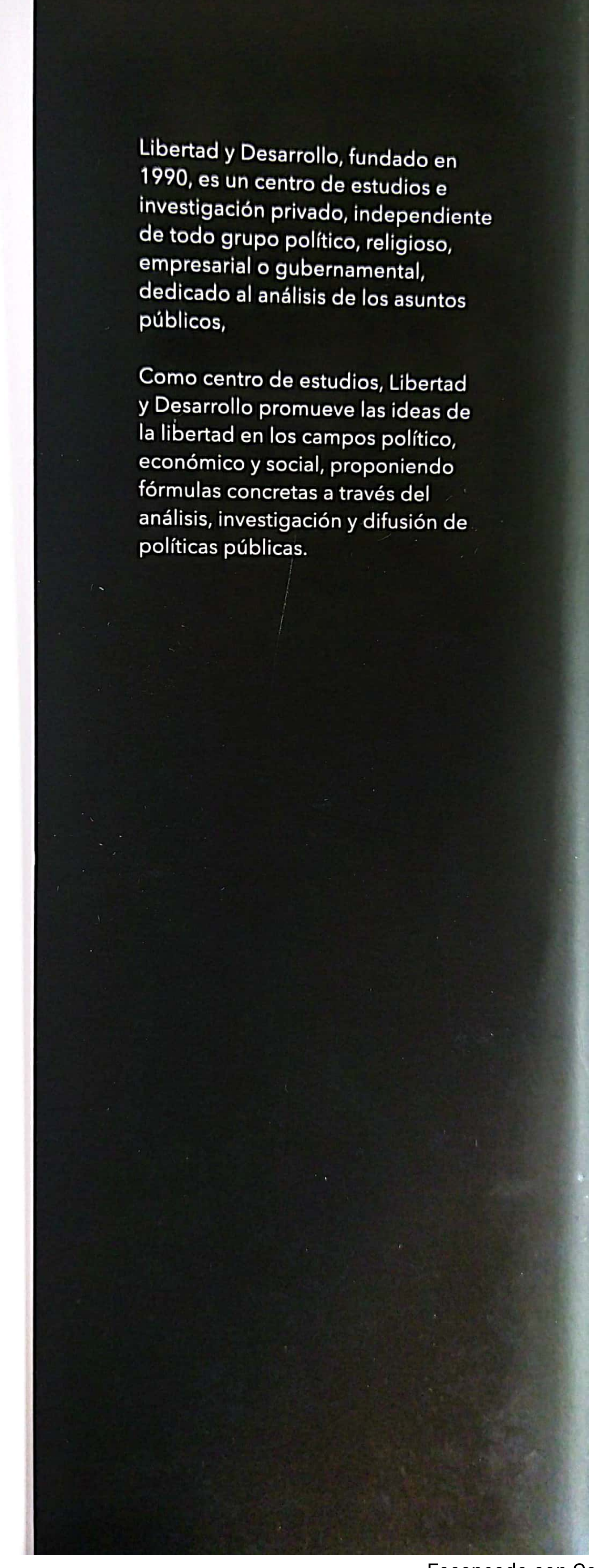
Los tiempos que vienen en Chile son difíciles para los partidarios de la libertad. El país es más pobre y las expectativas de la población son muy grandes. La brecha es ahora mucho mayor que el 18 de octubre y hay quienes han descubierto el arma de la violencia para lograr sus objetivos. Esto no puede amedrentarnos. Yo al menos me niego a votar Apruebo porque ello podría traer menos violencia. Creo que no es así, porque los violentos no se conformarán con nada, porque no es posible revertir, en el corto plazo, la pérdida de riqueza que hemos sufrido el último año. Entonces irán por más.

Pero también votaré Rechazo por dignidad, como lo dije antes, porque no podemos aceptar ser ciudadanos de segunda categoría cuyos derechos políticos están subordinados al humor de la calle. Y por último, porque los equilibrios de poder requieren que haya una fuerza significativa que esté por el Rechazo, para que cualquiera sea el resultado del plebiscito, la discusión sobre cambios a la institucionalidad se dé en un ambiente de respeto y mayor equilibrio de poderes.

Alguien podría considerar pesimista mi visión. Puede que lo sea en el corto plazo. Los años que vienen serán complejos para el país, pero los chilenos tenemos el derecho y el deber de trabajar para que el futuro mejore y en ese sentido, soy optimista en el largo plazo. Aún estamos a tiempo para no

tirar por la borda el trabajo de treinta años. En ese afán, creo fundamental que la derecha juegue un rol importante y tenga su propia visión sobre lo que ocurre en Chile. Un primer paso es tener nuestro propio diagnóstico que, por cierto, difiere de aquel que asegura que la acumulación de tensiones y humillaciones durante treinta años ha provocado, repentinamente, un estallido social.

Lo que aquí ha ocurrido es un golpe, un asalto al poder, que si bien tiene características distintas a otros que Chile ha vivido -desde ya ha sido un golpe de liberación prolongada (como algunos fármacos)-, no deja de ser un golpe. No debemos engañarnos pensando que la extrema izquierda va a renunciar a sus propósitos de someter a los chilenos por la violencia. El momento de actuar es ahora y el contragolpe debe partir por una rearticulación de la derecha que permita recuperar y fortalecer nuestra democracia representativa, donde el poder reside en los ciudadanos que lo delegan en gobernantes y legisladores, y no en la calle ocupada por los violentos.



Libertad y Desarrollo, fundado en 1990, es un centro de estudios e investigación privado, independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental, dedicado al análisis de los asuntos públicos,

Como centro de estudios, Libertad y Desarrollo promueve las ideas de la libertad en los campos político, económico y social, proponiendo fórmulas concretas a través del análisis, investigación y difusión de políticas públicas.

El 18 de octubre de 2019 veinte estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas en una acción coordinada de grupos violentistas. Otras cuarenta y una estaciones sufrieron daños de diversa consideración. Las semanas que siguieron de inusitada violencia a lo largo de todo Chile -con un gobierno desbordado- llegó a su punto cúlmine con la declaración de todos los partidos de oposición, desde la DC al PC, para la formación de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución para el país "emanada" de esa misma "ciudadanía movilizada" para "establecer un nuevo modelo político, económico y social".

Así nació el Proceso Constituyente que, con una importante probabilidad, puede culminar en una nueva Constitución para Chile. Ese día se consagró en nuestro país el ejercicio de la fuerza como método de acción política aceptado en la democracia en que vivíamos a contar del 11 de marzo de 1990, y los firmantes de esa declaración tendrán que responder ante la historia por ese acto, que significó transformar las estructuras de poder establecidas en nuestra institucionalidad y marcó el abandono, por parte de los partidos que tenían mayoría en el Congreso, de su responsabilidad constituyente a manos de los manifestantes de la calle.

Tratar de entender a cabalidad este proceso no es fácil. Parece evidente que lo que ocurrió en Chile es un fenómeno multicausal y no puede recurrirse a una única explicación para él. Lo que sí podemos hacer es aproximarnos a los motivos de una convulsión tan importante en la vida de los chilenos, con consecuencias aún desconocidas, desde distintas vertientes y disciplinas. Para formarse convicciones, o al menos hipótesis plausibles acerca de lo que ha estado ocurriendo en Chile, me ha parecido honesto examinar distintas opiniones, ideas e investigaciones.

El Otro Golpe: 18 de octubre de 2019, nos habla de un golpe de Estado distinto, de liberación prolongada como algunos fármacos, pero un golpe al fin, en cuanto despoja del poder a la autoridad legítima. Es provocativo, lo reconozco, y los lectores podrán juzgar luego de terminar de leer el libro si es acertado o no.



